



UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO



**Inadecuada aplicación de la medida cautelar personal
de prisión preventiva en los juzgados de investigación
preparatoria del Distrito de Chiclayo. análisis de
resoluciones judiciales comprendidas en los años
2013 a 2014**

TESIS

**Presentada para optar el Grado Académico de
Maestra en Derecho con Mención en Ciencias Penales**

AUTORA:

Vasquez Ramos, Sandra

ASESOR:

Dr. Arana Cortez, Miguel Arcangel

LAMBAYEQUE – PERÚ

2019

**INADECUADA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR
PERSONAL DE PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS JUZGADOS DE
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO.
ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES COMPRENDIDAS EN
LOS AÑOS 2013 A 2014**

PRESENTADO POR:

**SANDRA VASQUEZ RAMOS
AUTORA**

**Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
ASESOR**

APROBADO POR:

**Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE**

**Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
SECRETARIO**

**Mg. CARLOS MANUEL CEVALLOS DE BARRENECHEA
VOCAL**

ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

095

Siendo las 6.00 PM horas del día 18 de DICIEMBRE del año Dos Mil

DIECINUEVE, en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado,

designados mediante Resolución N° 1427-2019-EPE de fecha 17-10-2019, conformado por:

Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA PRESIDENTE (A)

Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO LUCENENO SECRETARIO (A)

Mg. CARLOS MANUEL ANTENON (EVALUADOR DE BARRIO) VOCAL

Dr. MIGUEL ANTONIO ANANA CONTEZ ASESOR (A)

Con la finalidad de evaluar la tesis titulada INADECUADA APLICACION DE LA MEDIDA CAUTELAR PENAL DE PRISION PREVENTIVA EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PROBATORIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO ANALISIS DE DECISIONES JUDICIALES COMPRENDIDAS EN LOS AÑOS 2013 A 2014

presentado por el (la) Tesista SANDRA VASQUEZ RAMOS

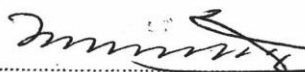
sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 1767-2019-EPE de fecha 09 DE DICIEMBRE DE 2019

El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 80 puntos que equivale al calificativo de BUENO

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de:

MAESTRIA EN DELITO CON MENCION EN CIERRE (A) PENALES

Siendo las 7.03 PM horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.



PRESIDENTE



SECRETARIO



VOCAL



ASESOR

Dr. LUIS JAIME COLLANTES SANTISTEBAN
Director Académico

L. 08/11/2020

NOTA: La existencia del acta en los libros de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; ha sido verificada por la Sra. Ana Gabriela Rodríguez Laca, quien con su firma da fe de lo mencionado.


Sra. Ana Gabriela Rodríguez Laca

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Yo, **Sandra Vasquez Ramos**, Investigador Principal y **Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez**, Asesor del Trabajo de Investigación **“Inadecuada aplicación de la medida cautelar personal de prisión preventiva en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito de Chiclayo. análisis de resoluciones judiciales comprendidas en los años 2013 a 2014”**, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 18 de Diciembre del 2019.

Nombre del Investigador: **Sandra Vasquez Ramos**

Nombre del Asesor: **Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez**

DEDICATORIA

A:

DIOS, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.

MI MADRE, por darme la vida, quererme mucho, creer en mí y porque siempre me apoyaste. ¡Mamá gracias! por tus palabras de aliento que no me dejaban decaer para que siguiera adelante y siempre sea perseverante y cumpla con mis ideales, todo esto te lo debo a ti.

MI ESPOSO, por su apoyo incondicional y el amor que me brinda día con día para alcanzar nuevas metas, tanto profesionales como personales.

MIS HIJOS, por ser fuente de mi motivación e inspiración, para poder superarme cada día más y obtener un futuro mejor, para que vean en mí un ejemplo a seguir. Los amo.

Muchas gracias mi hermosa familia, siempre los amaré.

ÍNDICE

DEDICATORIA	v
ÍNDICE	vi
RESUMEN	viii
ABSTRAC	ix
INTRODUCCIÓN	10
PRIMERA PARTE: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	13
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	13
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	14
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO	15
1.5. OBJETIVOS	16
1.5.1. OBJETIVOS GENERALES	16
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
1.6. HIPÓTESIS:	16
1.6.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS	16
1.7. VARIABLES:	17
1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE	17
1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE	17
SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO	19
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	19
CAPITULO I: MEDIDAS CAUTELARES	22
1.1. DEFINICIÓN Y ALCANCES	22
CAPITULO II: PRISIÓN PREVENTIVA	25
2.1. DEFINICIÓN	25
2.2. CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	27
2.3. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	30
2.4. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	34
2.5. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES	39
2.6. LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE SE PRONUNCIEN SOBRE MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL	41
2.7. FALTA DE MOTIVACIÓN	42

2.8. DEFECTUOSA MOTIVACIÓN	42
2.9. EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD	42
TERCERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO	46
3.1. MARCO METODOLÓGICO	46
3.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	47
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	47
3.4. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	48
3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.	49
3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS.....	50
CUARTA PARTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS.....	54
4.1. PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	54
4.2. CASUÍSTICA.....	57
QUINTA PARTE: CONCLUSIONES	63
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64

RESUMEN

Nuestra realidad fáctica presenta un grave problema reflejado en la excepcionalidad que debe brindársele a una figura procesal que se encuentra cada vez más desgastada en nuestro sistema, específicamente en nuestro ámbito de población como lo es el Distrito de Chiclayo; me refiero a la *medida cautelar personal de prisión preventiva*, cuya excepcionalidad se encuentra protegida en forma más amplia por los instrumentos internacionales que permiten lograr un mayor control en la aplicación de esta figura.

De acuerdo al contexto de la presente investigación desarrollo los **aspectos metodológicos** como una **primera parte**, el mismo que constituye el punto de partida que respalda la preocupación de la investigación efectuada, encuadrándose en **la realidad problemática, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación e importancia del mismo, entre otros puntos que se engloban** del sustento de estudio que se ha realizado. Y, para poder respaldarlo en la **segunda parte** desarrollare **el marco metodológico** como guía de tratamiento para circunscribir y delimitar los parámetros teóricos que se desarrollan respecto a la presente problemática a nivel nacional e internacional.

Como **tercera parte** desarrollare el **marco metodológico**, que contiene el **tipo de investigación, el diseño de contrastación de la hipótesis, la población y muestra utilizada, los materiales e instrumentos, los métodos y procedimientos para la recolección de datos, y el respectivo análisis de las sentencias obtenidas en el juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo.**

Finiquitando, el trabajo de investigación con las **conclusiones y recomendaciones** respectivas que se han generado a lo largo del desarrollo de la investigación, de lo cual respaldaremos que existe una **inadecuada aplicación de la medida cautelar personal de prisión preventiva en el Distrito de Chiclayo.**

ABSTRAC

Our factual reality presents a serious problema reflected in the exceptionality that should be provided to a procedural figure that is increasingly worn out in our system, specifically in our population environment such as the District of Chiclayo; I refer to the precautionary measure of preventive detention, whose exceptional nature is protected in a broader way by international instruments that allow to achieve greater control in the application of this figure.

According to the context of the present investigation, I develop the methodological aspects as a first part, the same one that constitutes the starting point that supports the research concern, framed in the problematic reality, the approach of the problem, the formulation of the problem, the justification and importance of it, among other points that are included in the sustenance of the study that has been carried out. And, to be able to support it in the second part, I will develop the methodological framework as a treatment guide to circumscribe and delimit the theoretical parameters that are developed regarding the present problem at a national and international level.

As a third part, I will develop the methodological framework, which contains the type of research, the design of the test of the hypothesis, the population and sample used, the materials and instruments, the methods and procedures for data collection, and the respective analysis of the sentences obtained in the preparatory investigation court of Chiclayo.

Finishing, the research work with the respective conclusions and recommendations that have been generated throughout the development of the investigation, of which we will support that there is an inadequate application of the precautionary measure of preventive detention in the District of Chiclayo.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis titulada como la **“Inadecuada aplicación de la medida cautelar personal de prisión preventiva en los juzgados de investigación preparatoria del distrito de Chiclayo. Análisis de resoluciones judiciales comprendidas en los años 2013 a 2014”** tiene por finalidad demostrar que en el Distrito de Chiclayo existe una inadecuada aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva que no se condice con los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia, tratando el investigador de determinar si la aplicación de la prisión preventiva – como medida cautelar personal – es ***primera ratio*** dentro de los parámetros de aplicación que se desprende del principio de proporcionalidad. Asimismo he realizado un examen que defienda mi postura sobre la contravención que se viene generando como acto vulneratorio del principio de presunción de inocencia, concluyendo con un análisis de las resoluciones expedidas por los juzgados de investigación preparatoria del distrito de Chiclayo a fin de disgregar la motivación aplicada por el ***ad quo***.

De esta forma, lograremos llegar a un punto conciso que logre englobar concatenadamente cada aspecto de la realidad problemática plasmada en la presente investigación, debiendo recurrir no solo a la legislación y a la jurisprudencia nacional, sino también al ámbito internacional; es decir, a los mecanismos internacionales de protección que enmarcan la jurisprudencia supranacional, debido a que son estos instrumentos los que permiten al Tribunal Constitucional realizar una interpretación extensiva de nuestra jurisprudencia, y normativa existente.

De tal forma que el desarrollo que realice será con la finalidad de lograr la causa – efecto del problema como variable (independiente y dependiente), y la consecuente hipótesis como respuesta a la investigación ***in concreto***.

PRIMERA PARTE

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

PRIMERA PARTE: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Nuestro contexto social expresa una situación de vulneración cuando ante la comisión de un evento criminal, el fiscal - como persecutor de la acción penal - requiere prisión preventiva al Juez de Garantías (Juez de Investigación Preparatoria). Los que estamos involucrados con el sistema de justicia, y debido a la problemática del hacinamiento carcelario, devenimos en síntesis cual es el centro del factor que acrecienta cada día más resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional que resuelven declarar Fundada la Prisión Preventiva. Y en consecuencia ordenan el internamiento preventivo por nueve meses del presunto autor del delito, obviando las otras medidas cautelares personales que dispone la norma como una medida alternativa de no vulneración del derecho fundamental a la Libertad.

Instituciones y organismos nacionales e internacionales se han pronunciado sobre la **Prisión preventiva**, siendo una de ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a denotado a través del control de convencionalidad la **excepcionalidad** de esta medida cautelar. Asimismo, surge otro problema su carácter **eventual** ante una absolución del procesado, y de ello germinan varias interrogantes *¿Quién le devuelve al imputado ese tiempo privado de su libertad? ¿Quién resarce ese daño causado? ¿Qué valora el magistrado para dictar una medida cautelar personal gravosa? ¿Y cómo se motiva en nuestro sistema una resolución de prisión preventiva?* A manera de conclusión, el presente trabajo de investigación, se centra en **analizar y detallar** la motivación de las resoluciones judiciales expedidas por el Juez de Investigación preparatoria cuando resuelve

declarar Fundada la prisión preventiva. Así como examinar los criterios de ***necesidad y proporcionalidad*** que son ponderados por la judicatura circunscrita al Distrito de Chiclayo.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es menester tener en consideración que la prisión preventiva puede conllevar a que los jueces sean mucho más propensos a dictar resoluciones judiciales ***Condenatorias (Sentencias)*** con la finalidad de respaldar su decisión de haber privado de la libertad al acusado.

El Nuevo Código Procesal Penal ha prescrito los presupuestos materiales concurrentes que deben ser acreditados para el concesorio de la prisión preventiva, pero surge para la investigadora un vacío existente en nuestra legislación, y es la falta de motivación y carencia de análisis del ***principio de proporcionalidad*** pues se podría - como señala el Instituto de Defensa Legal - denominar a la Prisión preventiva como una ***pena anticipada y no como una medida cautelar***.

Por lo que la investigadora aspira destacar el abuso de esta institución, con la finalidad de reducir la errónea aplicación en la que se incurre.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la motivación realizada por los jueces de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo para declarar fundada la medida cautelar personal de prisión preventiva?

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: abordaremos el problema de la inadecuada aplicación de la prisión preventiva declaradas fundadas por los Juzgados de Investigación Preparatoria circunscrita al Distrito de Chiclayo, los mismos que denotan la falta de aplicación de las otras medidas cautelares personales que pueden proceder ante la instauración de un proceso penal. Si bien es cierto, esta medida se resuelve a través de un pedido del representante del ministerio público, también es cierto que la persona facultada para otorgar este requerimiento de medida cautelar personal es el ***ad quo***; razón por la cual resulta útil y necesario abordar el tema y su problemática sobre la aplicación de la prisión preventiva. Teniendo en cuenta que la problemática subyace en nuestro contexto social debido al incremento de la delincuencia, para lo cual el Estado como titular del ***ius puniendi*** ejerce una política criminal de golpe por golpe, desproporcional al principio de presunción de inocencia que reviste a los ciudadanos implicados en un ilícito penal.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: el desarrollo de la investigación va a permitir que los involucrados en el sistema de justicia denotemos los diversos instrumentos nacionales e internacionales que señalan que la medida cautelar personal de ***prisión preventiva*** debe ser una excepción a la regla.

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: el resultado de la investigación contribuirá a que los ciudadanos que son parte de un proceso penal – como investigados – vean resuelta su situación ante la concesión de una prisión

preventiva bajo los parámetros de proporcionalidad, y presunción de inocencia.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES

DEMOSTRAR que en el Distrito de Chiclayo existe una inadecuada aplicación de la medida cautelar personal de prisión preventiva que no se condice con el principio de proporcionalidad y presunción de inocencia.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DETERMINAR si la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar personal es *primera ratio* dentro de los parámetros de aplicación del principio de proporcionalidad.

EXAMINAR si la medida cautelar de prisión preventiva contraviene el principio de presunción de inocencia cuando se declara fundada y se ordena el ingreso del procesado.

ANALIZAR las resoluciones judiciales expedidas por los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo a fin de disgregar la motivación aplicada por el *ad quo*.

1.6. HIPÓTESIS:

1.6.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

SI analizamos la motivación de las resoluciones judiciales que declaran fundadas las prisiones preventivas **ENTONCES** podremos determinar la inadecuada

aplicación de esta medida cautelar personal excepcional dentro del Distrito de Chiclayo.

1.7. VARIABLES:

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

- Medida cautelar personal de prisión preventiva.

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE

- Inadecuada aplicación de la medida cautelar personal.

SEGUNDA PARTE

MARCO TEÓRICO

SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El Nuevo Código Procesal Penal de 2004, al entrar en vigencia en nuestra jurisdicción Lambayecana el 01 de abril de 2009, trajo una serie de instituciones nuevas, al tornarse en un código adjetivo de corte acusatorio - adversarial; y teniendo a la oralización como principio élite. Es así, que dentro de sus instituciones encontramos a la Prisión Preventiva como una medida cautelar personal la cual debe cumplir con los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268º del Código Procesal Penal a fin de que se pueda declarar fundada, y por ende privar a un procesado de su libertad por el termino de ***hasta 9 meses y en casos complejos hasta 18 meses.***

Teniendo en cuenta lo antes expresado, corresponde circunscribir la problemática existente en la prisión preventiva pues se han realizado diversas investigaciones con respecto a esta medida personal cuya excepcionalidad ha sido no solamente reconocida por la jurisprudencia interna a través del Tribunal Constitucional, sino también por la doctrina extranjera, y por instituciones de arraigo internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre esta medida cautelar personal, teniendo como último documento el ***Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas de fecha 30 de diciembre de 2013*** estableciéndose en su prefacio que ***“(...) uno de los principales desafíos que enfrentan la absoluta mayoría de los Estados de la región es el uso excesivo de la detención preventiva (...)”***. Ello, enmarca nuestra investigación, debido a la existencia de una desbordante problemática, pues el 90% de las audiencias de

prisión preventiva son declaradas fundadas convirtiéndose esta medida cautelar en **primera ratio** existiendo una desnaturalización de esta institución.

El Art. 9º.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) señala sobre la Prisión Preventiva: **“ii. Excepcionalidad.** *Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso para la ejecución del fallo*”. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de la prisión preventiva como **último recurso**, esto circunscrito bajo los mismos parámetros que prescribe el PIDCP en la STC N° 1091 – 2002 – HC del 02 de agosto **“Caso Vicente Ignacio Silva Checa”** señalando lo siguiente: (...) *Si bien la detención judicial preventiva (prisión preventiva) constituye una medida que limita la libertad física, por si misma, esta no es inconstitucional. Sin embargo, por el hecho de tratarse de una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general (...).*

El Instituto de Defensa Legal (IDL) realiza una investigación y parámetro su posición respecto a la prisión preventiva prescribiendo que: *“En el marco del proceso, de prisión preventiva, como medida cautelar, está llamada a ser una medida de ultima ratio, y por tanto, excepcional. Los datos obtenidos por esta investigación nos*

permitieron medir el grado de excepcionalidad desde tres ángulos: primero, a partir de la proporción de casos en etapa de investigación preparatoria que son sujetos de un requerimiento fiscal de prisión preventiva; segundo, teniendo en cuenta la proporción de pedidos de prisión que son encontrados fundados por el juez de investigación preparatoria; y finalmente, considerando la proporción de procesados en cárcel con respecto a aquellos que purgan una condena firme”.

CAPITULO I: MEDIDAS CAUTELARES

1.1. DEFINICIÓN Y ALCANCES

El *ius puniendi* poseído por el Estado, faculta a este, a no solamente intervenir mediante su potestad punitiva, ni tampoco a que esta se restrinja en la misma, sino a extender la acción de esa decisión. En definitiva, el Estado, ostenta exclusivamente la potestad de realizar el Derecho Penal haciéndolo a través de una serie de actos regulados jurídicamente que conocemos como “proceso”. El ilustre jurista peruano **San Martín Castro** señala lo siguiente: *“El proceso penal, como acto de autoridad para cumplir sus fines necesita, en casos taxativos, una intromisión legítima en la esfera de algunos derechos fundamentales, cuya base o fundamento se encuentra en la garantía de tutela jurisdiccional – a su efectividad -, en concreto a la tutela coercitiva. Por un lado, (...), están los actos de investigación limitativos de derechos, que son medidas instrumentales restrictivas de derecho que buscan garantizar el proceso de conocimiento – su finalidad de esclarecimiento -, asegurar fuentes de investigación; pero, por otro lado están lo que el NCPP denomina medidas de coerción, que aseguran la eficacia del proceso – su normal funcionamiento - y de la sentencia del proceso, por lo cual el órgano jurisdiccional – a través de una cognición sumaria - habrá de ejecutar la medida de coerción que sean adecuadas para garantizar el debido esclarecimiento de los hechos y la efectividad de la sentencia a expedirse”*¹

Jorge Fabrega P. en su libro Medidas Cautelares acota que: *“En primer término, debe distinguirse entre la función cautelar y la función preventiva. La función preventiva tiene como finalidad tutelar el derecho de los ciudadanos ante un*

¹ SAN MARTIN CASTRO, Cesar. *Derecho Procesal Penal. Lecciones*. Fondo Editorial del INPECCP. Lima.2015. Pág. 438.

peligro determinado. V. gr. Separación de los cónyuges en un proceso de divorcio. La función cautelar es instrumental de la pretensión ejercitada en el proceso para asegurar la ejecución. Las medidas cautelares son jurisdiccionales y su finalidad es evitar que se frustre el proceso – concretamente lograr la efectividad de la ejecución de la sentencia -. Así la función cautelar es una de las que ejerce el órgano jurisdiccional, al paso que lo es la cognición y la ejecución. Algunos autores han considerado que la función cautelar es un mero apéndice, un desdoblamiento, un despliegue de la función ejecutiva”².

Al respecto el maestro **Rosas Yataco** señala en su *Manual de Derecho Procesal Penal* que: *“Las medidas coercitivas son todas aquellas restricciones al ejercicio de los derechos (personales o patrimoniales) del inculcado o de terceras personas, que son impuestas o adoptadas en el inicio y durante el curso del proceso penal tendiente a garantizar el logro de sus fines, que viene a ser la actuación de la ley sustantiva en un caso concreto, así como la búsqueda de la verdad sin tropiezos”³.*

En el ámbito doctrinario CARNELLUTTI⁴ coincide con la opinión dominante en señalar que la función de las medidas es la de evitar que una decisión se haga ilusoria en sus efectos por lo cual expresa: *“La providencia cautelar. Es claro que impedir un cambio posible o probable, eliminar un cambio ocurrido, anticipar un cambio posible o probable, no se puede más que mediante en primer lugar, un mandato del juez, quien inhibe que algo se haga o bien, ordena que algo ya hecho se deshaga o bien, que se haga algo todavía no hecho.*

² FABREGA P. Jorge. *Medidas cautelares*, Santafé de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1998, pág. 29.

³ ROSAS YATACO, Jorge. *Manual de Derecho Procesal Penal. Con aplicación al nuevo proceso penal*, Jurista Editores, Lima, 2009, pág. 466.

⁴ CARNELLUTTI FRANCESCO. *Derecho procesal, civil y penal*. Vol. IV Ciudad de México. Biblioteca Clásicos del Derecho, Editorial Harla, 1997, pág. 228 y ss.

Pues que, como se ha dicho, la finalidad de tal mandato es la de disponer las cosas de modo más idóneo para alcanzar el fin del proceso, se comprende la razón de que tome nombre de providencia cautelar: cautela, de cavere, significa precisamente diligencia, previsión o precaución”.

En el ámbito doctrinal la medida cautelar por excelencia sobre los seres humanos ha sido *la detención, en sus dos variantes, es decir con o sin privación de la libertad locomotora* al respecto los doctores Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett⁵ ha referido lo siguiente: *“La regulación de lo atinente la libertad del imputado en el código de procedimiento penal consulta varios tratados internacionales suscritos por Colombia. Entre ellos el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (Ley 16 de 1972). De conformidad con el artículo 93 de la carta, tales convenios, una vez ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden interno. En estas convenciones internacionales, vinculadas a nuestro ordenamiento jurídico por leyes de la república, se consagran principios universalmente aceptados, como el de presunción de inocencia y la detención preventiva como medida excepcional en el proceso penal”.*

⁵ BERNAL CUELLAR y otro. *El Proceso Penal*. 3º Ed. Bogotá Colombia, Universidad Externado de Colombia, Julio de 1995, págs. 129 y ss.

CAPITULO II: PRISIÓN PREVENTIVA

2.1. DEFINICIÓN

La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal y de naturaleza provisional, que se da únicamente cuando un proceso se encuentra debidamente formalizado, y a través del requerimiento del órgano persecutor de la acción penal el juez de la investigación preparatoria decide si concede o no dictarla, teniendo por finalidad asegurar que el imputado este sometido al proceso y no eluda la acción de la justicia o no la perturbe en su actividad probatoria.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) señala que la Prisión preventiva es una privación legal de libertad impuesta sobre una persona como medida de precaución. Se toma esta medida con el fin de garantizar una efectiva investigación del delito al que se vincula al imputado, su juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena⁶.

La prisión preventiva, es llamada también **encarcelamiento preventivo**, representa un nuevo grado de complejidad y gravedad en la privación de la libertad cautelar, caracterizada, en relación con los demás Estados, por su eventual prolongación en el tiempo y su consiguiente estabilidad. Ella es, precisamente por esa razón, la injerencia más grave en la libertad personal y, al

⁶ DE LA JARA Ernesto, y otro. *La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?*, Primera Edición, Impreso en Jesús Bellido M., setiembre 2013.

mismo tiempo, la más evidente contradicción con el principio de inocencia que ampara al imputado (*nulla poena sine iudicio*)⁷.

Para Claus Roxin⁸ en su libro de *Derecho Procesal Penal* la prisión preventiva en el proceso penal es la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. Para él, se persigue los siguientes objetivos concretos: **(a)** pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal; **(b)** pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal; **(c)** pretende asegurar la ejecución penal.

Para Cesar San Martin⁹, la prisión preventiva es "el presupuesto o condición sine qua non para limitar la libertad de una persona es que exista sospecha grave o vehemente que se ha cometido un delito, con todas sus características y que el imputado está vinculado dolosa o culposamente a ese delito como autor o participe. "El concepto de sospecha grave o vehemente es fundamental como una base. Pero este es un dato necesario, pero no suficiente",

"La legitimidad constitucional de una medida de privación de libertad como la prisión preventiva, que es la más grave del sistema, requiere además de la presencia de dos requisitos",

Para Pablo Sánchez Velarde¹⁰ afirma que "se trata de la medida coercitiva o cautelar de mayor gravedad en el proceso penal pues importa la privación de la

⁷ QUIROZ SALAZAR William, y otro. *La prisión preventiva. Desde una perspectiva constitucional, dogmática y del control de convencionalidad*. Ideas Solución Editorial. Junio 2014, Lima, pág. 126.

⁸ ROXIN, Claus. *Derecho procesal penal*, traducción de la 25ª edición alemana por Gabriela E. Córdoba y Daniel Pastor revisada por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Argentina, 2000, pág. 257.

⁹ <https://laley.pe/art/8564/cesar-san-martin-explica-la-nueva-jurisprudencia-vinculante-sobre-prision-preventiva>

¹⁰ http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_06.pdf

libertad del imputado mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación”.

2.2. CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

En el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas¹¹ señala que al igual que el Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, esta se sustenta en los siguientes tres principios:

(a) El principio del trato humano: *según el cual, toda persona privada de libertad será tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos fundamentales¹². Es decir, que la reclusión de una persona no debe conllevar restricciones o sufrimientos que vayan más allá de aquellos que sean inherentes a la privación de libertad¹³. Como ha afirmado el RT, “[e]l principio del trato humano de las personas privadas de libertad es el punto de partida para cualquier examen de las condiciones de reclusión y para el diseño de los regímenes penitenciarios”¹⁴. El principio del trato humano está relacionado con todos los aspectos del tratamiento que da el Estado a las personas bajo su custodia, particularmente con las condiciones de reclusión y la seguridad.*

(b) El principio de la posición de garante del Estado: según el cual, el Estado al privar de libertad a una persona asume una posición de garante de sus derechos fundamentales, en particular de sus derechos a la vida y a la integridad personal. Lo que implica que el ejercicio del poder de custodia lleva

¹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas*, 30 de diciembre de 2013.

¹² CIDH. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobado por la CIDH mediante Resolución 1/08 en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, (en adelante “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”), Principio I.

¹³ CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, adoptado el 31 de diciembre de 2011, (en adelante “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas”), párrs. 66 y ss.

¹⁴ ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe provisional, A/68/295, publicado el 9 de agosto de 2013, párr. 35.

consigo la responsabilidad especial de asegurar que la privación de la libertad sirva a su propósito y que no conduzca a la violación de otros derechos básicos¹⁵. En este sentido, es fundamental la satisfacción de las necesidades básicas de la población reclusa, relacionadas, por ejemplo, con los servicios médicos, alimentación, provisión de agua potable, y sobre todo de condiciones básicas de seguridad interna en los penales. Este principio está estrechamente relacionado con el principio del trato humano.

(c) El principio de la compatibilidad entre el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana¹⁶: esto significa, que el respeto de los derechos humanos de las *personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que por el contrario es un elemento esencial para su realización. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana, y por lo tanto, del desarrollo humano, e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores¹⁷.*

Asimismo, la CIDH señala en sus fundamentos:

“20. La naturaleza excepcional de la aplicación de la prisión preventiva, de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, es un elemento que necesariamente debe estar presente en toda

¹⁵ CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, párrs. 8, 46 – 65; CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Cap. VIII, párr. 1.

¹⁶ A este respecto, la Declaración de Salvador reafirma “la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en la prevención del delito y la administración de justicia [...]”; y reconoce que “un sistema de justicia penal eficaz, justo y humano se basa en el compromiso de proteger los derechos humanos en la administración de justicia y en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia”. ONU, Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución, adoptada en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador (Brasil) del 2 al 19 de abril de 2010.

¹⁷ CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.57, adoptado el 31 de diciembre de 2009, (en adelante “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”); Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas párr. 2.

política criminal que tome en consideración los estándares del Sistema Interamericano. Así, la Convención Americana, establece un orden jurídico según el cual “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario” (artículo 7.3); y, toda persona “tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (artículo 7.5). Igualmente, la Declaración Americana dispone que “[...] [t]odo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a [...] ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad” (Art. XXV). Es decir, el estar en libertad mientras dure el proceso penal, es un derecho del acusado, y como tal sólo puede ser restringido de manera excepcional y con estricto apego a las normas establecidas en los instrumentos internacionales que lo establecen. No se trata pues de una prerrogativa o un beneficio, sino de un derecho establecido para proteger bienes jurídicos tan fundamentales como la libertad, e incluso, la integridad personal.”

“(...) 21. (i) La detención preventiva debe ser la excepción y no la regla; (ii) los fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso; (iii) consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona; (iv) aún existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal; (v) todos los aspectos anteriores requieren una motivación

individualizada que no puede tener como sustento presunciones; (vi) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena; y (viii) en el caso de niños, niñas y adolescentes los criterios de procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad; y cuando sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más breve posible”.

2.3. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

El principio de proporcionalidad exige que las restricciones a los derechos fundamentales previstas por el ordenamiento positivo sean adecuadas a los fines legítimos a los que se dirijan y constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para alcanzarlo. En consecuencia, es dable afirmar que dicho principio es una técnica para garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales frente a los órganos de poder del Estado¹⁸. Este principio tiene arraigo constitucional y lo encontramos en el artículo 200º último párrafo el mismo que prescribe *“Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examinará la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivos”*. Nuestro Código adjetivo también da una connotación a este principio en su artículo 253º inciso 2): *“La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad (...)”*.

¹⁸ CÁMARA NACIONAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL, Sala I, c. 30.219 “G. Lidia M. Excarcelación, tentativa de homicidio” Interloc. 3/110, rta. 13 de diciembre de 2006. En <http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=31,387,0,0,1,0>

Teniendo en cuenta lo establecido en la norma podemos señalar que el principio de proporcionalidad debe parametrarse entre el medio elegido y el propósito perseguido. Este principio rechaza el establecimiento de conminaciones legales (proporcionalidad *in abstracto*) y la imposición de penas (proporcionalidad *in concreto*) que conozcan de relación valorativa con el hecho cometido, contemplado este en su significado global, de ahí que tiene un doble destinatario: el poder legislativo (que ha de establecer penas proporcionadas, en abstracto, a la gravedad del delito) y el judicial (las penas que los jueces impongan al autor del delito han de ser proporcionadas a la concreta gravedad de este). Esta exigencia de proporción se determina mediante un juicio de ponderación entre el cargo coactivo de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Por ello, se dice que el principio de proporcionalidad responde a la creencia de que la entidad de la pena, esto es, la aflicción y que ella origina por su naturaleza o entidad, o por los efectos socio personales que desencadena, debe acomodarse a la importancia de la afectación al objeto tutelado y a la intensidad de la responsabilidad concurrente, lo que aporta un plus de legitimación a la intervención penal.¹⁹

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2009 “Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela”, señala dos aspectos importantes sobre la proporcionalidad:

“[U]na persona inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería

¹⁹ GARCÍA - PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho Penal, parte general. Jurista, Lima, 2009, págs.528-529.

posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción”.

Conforme lo señala Urquizo Olaechea²⁰, el principio de proporcionalidad debe cumplir una función de garantía en el ámbito jurídico penal y para ello es necesario ubicarlo con relación a las diferentes categorías dogmáticas que reflejan el estado actual de la teoría del delito, asimismo precisa que el principio de proporcionalidad se asienta necesariamente en los criterios o normas que rigen el valor de la justicia.

Para este principio rige tres sub-principios como son: ***la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.***

a. Principio de Idoneidad. supone que la reacción punitiva que afecte derechos fundamentales, como la libertad debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, como por ejemplo, la protección de bienes jurídicos.

Este sub-principio es una *regla de decisión* y comporta la elección de aquella medida cautelar que sobresalga por su eficacia para cautelar los

²⁰ URQUIZO OLAECHEA, José. Principio de proporcionalidad penal. en la ciencia del derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor Don José Cerezo Mlr. Tecnos, Madrid, pág. 194.

fines del proceso, pero que a su vez sea la que restringe en menor medida los derechos del procesado que se pretenden limitar.²¹

b. Principio de necesidad. por su parte el principio de necesidad implica que toda medida de restricción de derechos del imputado debe ser la más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, supone una comparación entre la medida adoptada por el legislador y otros medios alternativos.

Este sub-principio es una **regla de decisión** que parte de la concepción de que la determinación de una medida cautelar en particular, debe primero observar la no existencia de una medida alternativa de similar o igual efectividad de aquella que se pretende imponer, si existiera esta, debe elegirse aquella que comporte una menor lesión a derechos que se pretenden restringir.²²

c. Principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. se entiende que la afectación de un derecho como la libertad debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa. De ahí que las ventajas que se obtienen mediante la restricción de ciertos derechos deben compensar los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general, esto es la llamada prohibición de exceso, que permite establecer si la medida guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.

²¹ GONZÁLES-CUELLAR SERRANO, Nicolás. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Editorial Colex, Madrid 1990, pág. 154.

²² CÁCERES JULCA, Roberto. *Las medidas cautelares en el Proceso Penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Medidas coercitivas personales, Medidas cautelares reales*. Jurista Editores. Lima, Enero 2014, pág. 61.

Respecto de la pena a imponer, se tiene que para la dosificación punitiva o para los efectos de imponer una sanción penal debe tenerse presente que la finalidad esencial está orientada a buscar en el sujeto culpable su reeducación y reinserción en la sociedad, sin excluir los fines de prevención general y en tal sentido su dosimetría no constituya un exceso y pierda su objetivo final; que es de enfatizar que el legislador ha establecido las clases de penas y el quantum de estas, pero no de una manera fija y absoluta, por consiguiente se han fijado los criterios necesarios para que el juzgador pueda individualizar judicialmente la pena y concretarla; que dentro de este contexto debe observarse el principio de proporcionalidad establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva del Estado para evitar cualquier perjuicio que sobrepase la medida de su culpabilidad por el hecho que nos conduce.

La proporcionalidad *strictu sensu* es una regla valorativa, ponderativa y material, cuya virtualidad se fija genéricamente en la prohibición de exceso y, concretamente en la interdicción de vaciar el contenido esencial del derecho objeto de limitación.²³

2.4. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El derecho a la presunción de inocencia consagrado en artículo 2º inciso 24 apartado e) de nuestra Constitución Política de 1993²⁴ constituye uno de los límites de la prisión preventiva. Este derecho implica que cualquier persona que esté siendo investigada - por un presunto delito - este revestida de su inocencia,

²³ PUJADAS TORTOSA, Virginia. *Teoría general de medidas cautelares penales*. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, pág. 145.

²⁴ Art. 2.24.e de la Constitución Política del Perú de 1993: “*Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad*”.

en tanto y en cuanto no se demuestre su culpabilidad a través de una resolución judicial firme y consentida. El Nuevo Código Procesal Penal en su artículo II inciso 1) del Título Preliminar también nos hace referencia sobre la presunción de inocencia²⁵ señalando que toda persona imputada en la comisión de un ilícito punible es considerada inocente.

En la presunción de inocencia como señala Vega Torres citado por Del Río Labarthe se acude a una triple acepción: 1) principio informador de todo el proceso penal de corte liberal, 2) regla de tratamiento del sujeto pasivo del proceso y 3) regla de juicio fáctico de la sentencia con incidencia en el ámbito probatorio²⁶.

Al estado de inocencia, puede entenderse como un límite al poder de castigar que tiene el Estado y como parámetro al legislador, para establecer las reglas de la investigación y el proceso, consciente de las garantías que hacen parte de este principio, esto le permite orientar las actuaciones, porque reitero, la violación a esta condición es violación de las garantías y viceversa. La carga de la prueba en cabeza del Estado y la demostración de la existencia del delito son requisitos ineludibles que emanan del Estado de inocencia, entonces, el órgano especializado de la acusación y la investigación debe presentar la prueba con la cual soporta la pretensión punitiva o de la medida cautelar, porque al implicado no se le puede sorprender con la vinculación al proceso, con la sola manifestación de ese interés o por capricho del órgano acusador, obsérvese, que la grandeza del

²⁵ Art. II.1. del Nuevo Código Procesal Penal: "Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado".

²⁶ VEGA TORRES citado por DEL RÍO LABARTHE Gonzalo. *Temas Penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Anuario de Derecho Penal 2008. La prisión preventiva en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.*

estado de inocencia radica en que si no existe prueba para solicitar una medida cautelar, la libertad es la consecuencia, entonces, bien puede la defensa realizar actividades pasivas, si se entera de la ausencia de pruebas en contra del defendido y con ello tiene garantizado un resultado favorable.²⁷

De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal la más elemental es quizás la presunción de inocencia, expresamente reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.2), la Declaración Americana (Art. XXVI) y la Convención Americana (Art. 8.2)²⁸.

La CIDH señala sobre la presunción de inocencia en su **Fundamento 132**. ***“Esta disposición atribuye a favor del acusado la presunción de que debe ser considerado inocente, y tratado como tal, mientras no se determine su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. El contenido de la presunción de inocencia exige que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de la pena, sólo pueden estar fundadas en la certeza del tribunal acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. El juez a quien le corresponde conocer de la acusación penal tiene la obligación de abordar la causa sin prejuicios, y bajo ninguna circunstancia debe suponer a priori que el acusado es culpable. Esa presunción de inocencia es la que ha llevado***

²⁷ MOSQUERA MORENO, Luis A. *Las medidas cautelares en el proceso acusatorio*. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, Medellín – Colombia. 1a. Edición – 2005, pág. 17.

²⁸ CIDH. Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 118. Este principio no sólo está recogido en el derecho de tratados, sino que también es reiterado en otros instrumentos internacionales relativos a personas privadas de libertad, como el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Principio 36.

al derecho penal moderno a imponer como regla general, que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que es sólo por vía de excepción que se puede privar al procesado de la libertad (principio de excepcionalidad)”²⁹. En caso de resultar necesaria la detención del acusado durante el transcurso de un proceso, su posición jurídica sigue siendo la de un inocente³⁰. Por eso, y como se reitera consistentemente en este informe, el derecho a la presunción de inocencia es el punto de partida de cualquier análisis de los derechos y el tratamiento otorgado a las personas que se encuentran en prisión preventiva³¹.

De esta forma, la hermenéutica de la Convención Americana deberá guiarse de tal forma que sus disposiciones tengan un resultado útil,

En este sentido, la CIDH reitera que la Convención Americana debe interpretarse de forma tal que sus disposiciones tengan un efecto útil, es decir, que cumplan la finalidad para la cual fueron instituidas.

La observancia del derecho a la presunción de inocencia implica, *prima facie*, que como regla general el imputado debe afrontar el proceso penal en libertad³². Lo que supone que la prisión preventiva sea utilizada realmente como una medida excepcional; y que en todos aquellos casos en los que se disponga su aplicación, se tenga el derecho a la presunción de inocencia al establecerse las razones

²⁹ CIDH. Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 119. En el mismo sentido: CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 69 y 70.

³⁰ CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, Cap. IV, párr. 33.

³¹ CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Cap. VII, párr. 32. 183 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; y Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 36.

³² CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párr. 168.

legítimas que pudiesen justificarla. Como toda limitación a los derechos humanos, la privación de la libertad previa a una sentencia, deber ser interpretada restrictivamente en virtud del principio *pro homine*, según el cual, cuando se trata del reconocimiento de derechos debe seguirse la interpretación más beneficiosa para la persona, y cuando se trata de la restricción o supresión de los mismos, la interpretación más restrictiva³³.

El criterio de presunción de inocencia se encuentra íntimamente ligado con la excepcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva Sergio García Ramírez magistrado señala: “[L]a prisión preventiva [...] [es] la más severa de las medidas cautelares que hasta hoy conserva el enjuiciamiento penal, en tanto entraña una restricción profunda de la libertad, con muy importantes consecuencias. Solemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción; no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente, es cierto. Sin embargo, considerado este fenómeno de cara a la realidad –aunque ésta tropiece con el tecnicismo– la prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva: ambas son privación de libertad, se desarrollan (a menudo) en pésimas condiciones, causan al sujeto y a quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico, y traen consigo repercusiones de largo alcance, a veces devastadoras. [...] Por ello, entre otras cosas, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la prisión preventiva”³⁴.

³³ CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 71 y 75.

³⁴ 197 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 18.

2.5. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

El reconocimiento supranacional de la motivación de las resoluciones judiciales lo encontramos en el Artículo 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Artículo 41º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en nuestra normatividad en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución; y el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para mayor ahondamiento esta garantía de la debida motivación de las resoluciones prescrita en nuestra Carta magna señala: ***“La motivación escrita de todas las resoluciones en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustente”***. Aunado a lo antes expresado encontramos ligado al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho reconocido también por la Constitución Política de 1993 en su Artículo 139º inciso 3); y Artículo 4º del Código Procesal Constitucional.

El derecho a la debida motivación es un principio fundamental, largamente establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”³⁵. En esta línea, el GTDA, señaló con respecto al derecho a la libertad personal, que “[e]l fundamento jurídico que justifica la privación de libertad debe

³⁵ 261 Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 108; Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 152.

ser accesible, comprensible y no retroactivo, y debe aplicarse de manera coherente y previsible a todos por igual”³⁶.

Así, en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, la Corte Interamericana estableció específicamente que toda decisión por medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal por medio de la aplicación de la prisión preventiva deberá contener una motivación suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación (indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional, y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad)³⁷. Este deber de motivación suficiente también se extiende a las resoluciones judiciales posteriores en las que se decide el mantenimiento o no de la detención, sea que esta revisión se haga de oficio o a petición de parte. En términos generales, la Corte entiende que “[l]a motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. Y que la misma “es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. [...] [L]a argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente [...]”³⁸.

La motivación de las resoluciones judiciales es un derecho fundamental y una garantía procesal de toda persona por la cual los jueces y tribunales de justicia deben justificar sus actos de decisión para que puedan constituir actos de decisión legítimos. La motivación jurídica se extiende a las bases fácticas,

³⁶ 262 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/22/44, publicado el 24 de diciembre de 2012, párr. 62.

³⁷ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 93.

³⁸ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 107 y 118.

jurídicas y probatorias en que se apoya la decisión que se ha tomado. “Existen dos tipos de justificaciones, por un lado una justificación interna, y por el otro, una justificación externa. En la primera la argumentación lógica se encuentra, fundamentalmente, implícita, pues la labor justificativa de una decisión se basa en un silogismo jurídico. En la segunda, se parte de que tanto la premisa normativa como la fáctica presentan dudas, por lo tanto, es preciso presentar argumentaciones adicionales a favor de las premisas o sea argumentaciones materiales y dialécticas”³⁹.

2.6. LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE SE PRONUNCIEN SOBRE MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

La motivación de las resoluciones permite comprobar que la actividad del órgano jurisdiccional ha sido legítima. Es legítima cuando comporta un cauce formal y material: 1) es formal cuando la resolución se materializa como producto de un determinado procedimiento. Esto significa que la medida de coerción debe ser impuesta por el juez competente e imparcial.⁴⁰ 2) es material o sustantivo cuando el contenido de la resolución justificado en base a la legalidad vigente, es decir, al sistema de fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra la Constitución (principios como proporcionalidad, razonabilidad, presunción de inocencia, etc), y las normas de derecho que correspondan aplicar al caso en concreto, además del Código Procesal Penal (Acuerdos Plenarios, Ejecutorias Supremas Vinculantes, Resolución Administrativa de la Corte Suprema de Justicia N° 325-2011-P-PJ-Circular sobre Prisión Preventiva, Resolución Administrativa de la Corte Suprema

³⁹ VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Omar. *La argumentación jurídica en el Tribunal Constitucional Español. Los casos, fáciles, difíciles...trágicos*. Revista Telemática de Filosofía del Derecho N° 9, Madrid, año 2005/2006, pág. 208.

⁴⁰ CÁCERES JULCA Roberto, y otro. *Las Medidas cautelares en el proceso penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Medidas coercitivas personales. Medidas cautelares reales*. Jurista Editores. Perú. Enero 2014, pág. 68.

de Justicia N° 029-2011-SP-CS-PJ- Disposiciones sobre la medida de detención domiciliaria en el proceso penal, etc.) y de las cuales se puede identificar cual ha sido el juicio lógico que fundado en criterios jurídicos razonables, ha presidido la articulación o subsunción del hecho concreto en el precepto normativo aplicado.⁴¹

2.7. FALTA DE MOTIVACIÓN

La falta de motivación se produce por diversos factores:

- a) Cuando la resolución es arbitraria.
- b) Cuando la resolución ha incurrido en un error.

2.8. DEFECTUOSA MOTIVACIÓN

Esta puede presentarse cuando exista:

- a) Aparente motivación.
- b) Falta de motivación en sentido estricto

2.9. EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

El Tribunal Constitucional señala en el Exp. N° 090-2004-AA/TC. Lima de fecha 05 de julio de 2004 que: “El principio de razonabilidad (...) expresamente formulado en el artículo 200 de la Constitución, no tolera ni protege que se realicen o expidan actos o normas arbitrarias. Razonabilidad, en un sentido mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un elemental sentido de justicia”.

La suficiencia de la razonabilidad es, en definitiva, el resultado de la ponderación de los intereses en juego: los derechos de la persona cuya inocencia se presume,

⁴¹ CÁCERES JULCA Roberto, y otro, pág. 69.

por un lado; y la búsqueda de la justicia que permita el correcto uso de la acción penal, por el otro lado; siempre y cuando se utilicen adecuadamente las reglas del razonamiento lógico – jurídico.⁴²

Se puede decir que una resolución judicial que se pronuncia sobre medidas de coerción deviene en irrazonable cuando:

- i. La decisión no es adecuada a valores constitucionales.
- ii. Falta causa o motivo suficiente y verdadero para tomar dicha decisión.
- iii. La decisión es en sí misma contradictoria o conduzca a un resultado absurdo.
- iv. La resolución es excesiva, al no ser proporcionado con la resolución que se ha tomado.
- v. La ejecución de la resolución es imposible.
- vi. La decisión judicial provoca más conflictos de los que intenta resolver.
- vii. La decisión priva de eficacia a un texto normativo, como puede ser la Constitución o el Título Preliminar del Código Procesal Penal.

De lo anotado se colige que “la falta de razonabilidad en la decisión de un juez no es más que la manifestación de una irracionalidad latente de la decisión, bien sea por una carencia de racionalidad formal porque el procedimiento de decisión

⁴² CÁCERES JULCA, Roberto. *El proceso de pérdida de dominio & las medidas cautelares en la investigación preliminar*. Editorial IDEMSA, Lima, 2008.

judicial no se haya desarrollado conforme a derecho; o bien por una falta de racionalidad material de la norma jurídica empleada a decidir”.⁴³

⁴³ COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. *La motivación de las sentencias. Sus exigencias constitucionales y legales*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 314.

TERCERA PARTE:

MARCO METODOLÓGICO

TERCERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO

3.1. MARCO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Jurídico – sociológica. Metódica. Se Apoyará en los siguientes métodos:

- a. **Método Descriptivo**: se procederá al recojo, organización, y resumen de los resultados observados.
- b. **Método Analítico**: se analizarán las resoluciones fundadas sobre prisión preventiva, a fin de examinar los alcances de las resoluciones expedidas por los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo.
- c. **Método Sintético**: la síntesis será el resultado del análisis, por medio del cual se logrará la comprensión de la esencia de la aplicación de la prisión preventiva, es decir se va a realizar una breve exposición de lo investigado, un resumen.
- d. **Método Inductivo**: partiendo de lo particular a lo general, constituyendo el hecho particular, el análisis de las resoluciones expedidas por los órganos jurisdiccionales (Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo), se va a obtener una proposición general, una vez realizado el estudio, análisis y síntesis de los hechos y fenómenos en particular.

- e. **Método Dogmático**: en la investigación a realizar se va a recurrir también a la Doctrina Nacional y Extranjera, al Derecho Comparado y a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

3.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para la contrastación de hipótesis será preciso:

- a. Recopilar información sobre el tema, acudiendo a bibliotecas, hemerotecas e instituciones.
- b. Se utilizara papel, CD – R y USB, para redactar, comparar, analizar e integrar datos.
- c. Se verificará la información obtenida con el estudio minucioso de diversos textos y además con el acceso a internet.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

La presente investigación, está constituida por el total de procesos de prisión preventiva seguido ante los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo en los años 2015 a 2017 en el que se resuelve **DECLARAR FUNDADA LA PRISION PREVENTIVA DEL PRESUNTO AUTOR DEL DELITO.**

LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DÓNDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO:

El proyecto se desarrollará en el Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, República del Perú; en la Institución del Poder Judicial – Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo.

3.4. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

A. Entre los **materiales** se utilizará

- Computadora.
- Impresora.
- Tinta.
- Scanner.
- CD.R.
- Papel bond.
- Lapiceros

B. Entre las **técnicas** de recopilación de datos, tenemos:

a. Observación: Nos permite apreciar cómo se despliega la investigación a estudiar; a través de ella se llega a conocer su grado de aplicación en la actividad procesal.

b. Bibliográficas: La utilización de la revisión de la bibliografía relacionada con el tema objeto de estudio.

La información se obtiene de las Bibliotecas Especializadas de las Facultades de Derecho de las Universidades locales y nacionales, páginas Web.

- c. Fichaje:** Necesario para la elaboración del marco teórico, entre estas tenemos las fichas: Bibliográficas, textuales, resumen, comentario y mixtas; elaboradas durante la investigación.
- d. Documental:** Para la presente investigación se efectuará una extracción de datos preexistentes en los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Chiclayo.
- e. Encuestas:** De igual forma, se utiliza la técnica indirecta de la aplicación de cuestionarios que se elaboraran tomando en cuenta la información obtenida, dichos medios se aplicará a Jueces, fiscales, abogados partes procesales de la Ciudad de Chiclayo.

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Dentro de los diferentes métodos científicos a aplicar tenemos:

- a. Deductivo:** Es aquel método que orienta a la investigación de lo general a lo específico; es decir que, de un enunciado general se va desentrañando partes o elementos específicos”.
- b. Exegético:** Llamado también histórico, pues constituye aquella ubicación que va del pasado al presente, para proyectarse al futuro, método que se utiliza en el estudio de los antecedentes, conceptualización y objeto de la investigación de autos.
- c. Análisis:** Se emplea en toda la investigación a fin de determinar las causas y efectos de la investigación.

d. Sintético: Se aplica al realizar un estudio sistemático de toda la información recopilada.

e. Descriptivo-explicativo: su finalidad es procurar dar respuesta a la interrogante planteada en el problema.

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS

- Se utilizara para la explicación de los resultados a obtener del acopio documental a través de cuadros estadísticos y en gráficos.
- **Se tendrá en cuenta para definir la muestra:**

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra "**n**" para la población de tamaño "**N**".

$$\frac{n = Npq}{(N - 1)D + pq}$$

En donde:

- **P** es igual a 1-q; y
- **D** es igual a 2 e/4
- **N**, es el tamaño de la población en estudio
- **n**, es el tamaño de la muestra que queremos determinar
- **p**, es la probabilidad de éxito, es igual a 95%, es decir 0.95
- **q**, es la probabilidad de fracaso, es de 1-0.95=0.05.

- e, es el error de estimación es dependiente de la estimación anterior y le corresponde la cifra de 0.05; así $D=0.000625$

Media Aritmética (M) y Desviación Estándar (S)

$$M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - M)^2}{N - 1}}$$

Donde X_i = todos los valores de la variable X

N = número de muestras

Intervalos de confianza para la estimación puntual de la media (Z)

El valor real de una variable μ con un intervalo de confianza α está dado por:

$$M - Z_{(1-\alpha/2)} \frac{S}{\sqrt{N}} \leq \mu \leq M + Z_{(1-\alpha/2)} \frac{S}{\sqrt{N}}$$

Donde n = número de muestras

Coeficiente de Correlación de Pearson (r)

$$r = \frac{N \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][N \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Donde X_i = todos los valores de la variable X

Y_i = todos los valores de la variable Y.

N = número de muestra

Coeficiente Alfa de Cronbach

$$\alpha = \left(\frac{N}{N-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

Donde **N** = Número de ítems

S_i² = Varianza de los puntajes de cada ítem

S_t² = Varianza de los puntajes totales

CUARTA PARTE

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS

CUARTA PARTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS

4.1. PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

*“El CPP de 2004, de forma similar a los reformados sistemas procesales penales de la región, contiene los dos requisitos básicos y comunes para la imposición de cualquier medida coercitiva, como es el caso de la prisión preventiva: el *fumus delicti comissi* y el *periculum in mora*.*

1. *Fumus delicti comissi*. *El primero de los presupuestos que debe ser tomado en cuenta para el dictado de la prisión preventiva, es el *fumus delicti comissi*, equiparable con el *fumus boni iuris* exigible en el Derecho Civil, y se halla establecido en el artículo 268, literal a) del CPP de 2004. Este presupuesto implica un juicio provisional de imputación, esto es, la fundada sospecha de la intervención del imputado ya sea a título de o participe en un determinado hecho con apariencia delictiva. En el ámbito del proceso penal se traduce en la razonable atribución a una persona determinada de la comisión de un hecho punible.*

2. (...).

3. *Periculum in Mora*. *El tercer presupuesto que debe cumplirse para aplicar la prisión preventiva es el *periculum in mora* o peligro procesal, cuya existencia se constituye en el elemento más importante a considerar para la imposición de alguna medida cautelar de naturaleza personal.*

Es sabido que la duración temporal de un proceso penal, puede constituir una ocasión propicia para que la parte pasiva del proceso penal realice actuaciones que puedan derivar en la ineffectividad de este y de la sentencia que le pone a fin. Es para evitar ese riesgo que se adoptan las medidas cautelares. Y es precisamente por esta razón, que es en la configuración de periculum in mora donde se advierte con mayor claridad cuáles son los objetivos que en ordenamiento procesal persigue mediante la utilización de la prisión preventiva.

Sin embargo, también resulta necesario considerar que, no todo perjuicio derivado de la demora de la definición del proceso penal puede consagrar un presupuesto de periculum in mora. Para que así suceda es preciso que en el momento de emitir la medida cautelar el mismo aparezca a los ojos del juzgador como un daño inminente y de una entidad tal que ponga en peligro la efectividad práctica de la posterior sentencia.”⁴⁴

Es así que de acuerdo al **Artículo 268° del Código Procesal Penal**:

“El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.*

⁴⁴ VILLEGAS PAIVA, ELKY A. “Límites a la detención y prisión preventiva. Cuestionamiento a la privación arbitraria de la libertad personal en el proceso penal”. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima Perú. Julio 2016. Pags. 293 – 307.

- b) *Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y*
- c) *Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)."*

Artículo 269° del Código Procesal Penal:

"Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:

- 1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;*
- 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;*
- 3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo;*
- 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;*
- 5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas."*

Artículo 270° del Código Procesal Penal:

“Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:

- 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.*
- 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.*
- 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.”*

Artículo 271° del Código Procesal Penal:

- 1. (...). 2. (...). 3. **El auto de prisión preventiva será especialmente motivado***⁴⁵*, con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes.*

4.2. CASUÍSTICA

- Expediente N°: 5207-2014-1-1706-JR-PE-04

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Del Castillo Muro, Norma Katiuskha y otros.

Delito: Asociación Ilícita para Delinquir y otro.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), contra José Nicolás Baca Távara, (...), por el plazo de dieciocho meses (...).”

⁴⁵ El énfasis es nuestro.

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador:

- Expediente N°: 8455-2015-9-1706-JR-PE-06

Juzgado: Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Medina Cubas, Luis Franklin.

Delito: Asociación Ilícita para Delinquir, y otros.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), por el plazo de dieciocho meses (...).”

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador:

- Expediente N°: 5972-2016-3-1706-JR-PE-7°

Juzgado: 7mo. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Sánchez Coronel, Hernán y otros.

Delito: Organización Criminal, y otros.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), por el plazo de dieciocho meses (...).”

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador.

- Expediente N°: 3916-2017-7-1706-JR-PE-2°

Juzgado: Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Córdova Merino, Jhon Oliver.

Delito: Microcomercialización o Microproducción.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), por el plazo de nueve meses (...).”

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador: **a criterio de la investigadora no hay una motivación coherente de parte de la juzgadora, toda vez que la misma solo establece texto expreso de la sustentación del fiscal, no existe el análisis de juicio de ponderación, ni tampoco de razonabilidad.**

- Expediente N°: 4778-2017-3-1706-JR-PE-2°

Juzgado: Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Lozano Vásquez, Oscar Yonel.

Delito: Robo Agravado.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), por el plazo de nueve meses (...).”

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador:

- Expediente N°: 6352-2017-56-1706-JR-PE-5

Juzgado: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Maldonado Saldaña, Leo, y otro.

Delito: Homicidio en grado de tentativa.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), por el plazo de nueve meses (...).”

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador:

- Expediente N°: 9050-2017-95-1706-JR-PE-03

Juzgado: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo

Imputado: Guerrero Mechan, Carlos

Delito: Robo Agravado.

“Resolución Número: Dos. (...). Parte Resolutiva: Fundado el requerimiento de prisión preventiva, (...), por el plazo de siete meses (...).”

Motivación de la Resolución de acuerdo al artículo 271° del CPP inciso 3) por parte del juzgador:

ANÁLISIS:

Acorde con el desarrollo de nuestra investigación, y análisis de cada una de las casuísticas presentadas de los diferentes Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo, en ninguna de las mencionadas resoluciones judiciales (Autos) se fundamenta expresamente una debida motivación, tal y como, lo establece el artículo 271° inciso 3), del Código Procesal Penal, esto es que **“El auto de prisión preventiva será especialmente motivado”**, obviándose así, el desarrollo contenido en nuestro marco teórico con respecto a los principios de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, de ponderación. Así mismo, los **autos**, que declaran fundada una medida cautelar gravosa, deben contener una debida y coherente motivación, dentro de los márgenes de la razonabilidad. No solo deben ser mencionados sino desarrollados en su contexto integral, como doctrinariamente lo podemos ubicar a nivel nacional e internacional, ya que de nada sirve *que el juzgador emita una resolución si esta posee una aparente o defectuosa motivación.*

Con lo expuesto, no estoy señalando que no se aplique esta medida de coerción personal *-que debe resultar ser excepcional-* sino que su aplicación sea adecuada, garantista, que la misma se conciba dentro de un estado democrático de derecho, no esperando por parte del *A quo* que sea el superior jerárquico quien enmarque dentro de la legalidad las resoluciones inadecuadamente expedidas por los jueces de investigación preparatoria, porque ello constituiría una manifiesta arbitrariedad.

QUINTA PARTE

CONCLUSIONES

QUINTA PARTE: CONCLUSIONES

5.1. Se ha llegado a determinar tres conclusiones específicas:

5.1.1. Que, la prisión preventiva se ha convertido en *prima facie* cuando se pide una medida coercitiva personal, y que las resoluciones emitidas por el juzgador no cuentan con la aplicación de los parámetros del principio de proporcionalidad.

5.1.2. Que, la medida cautelar personal de prisión preventiva contraviene el principio de presunción de inocencia debido a que del propio examen, es más un adelanto de fallo, en base a los recaudos presentados por la fiscalía; y que estos poseen una motivación defectuosa.

5.1.3. Que, a pesar del transcurso del tiempo de vigencia de nuestro Código Procesal Penal, no se ha superado un nivel de motivación que sea contundente, proporcional, y razonable con la dignidad del ser humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BERNAL CUELLAR y otro. *El Proceso Penal*. 3º Ed. Bogotá Colombia, Universidad Externado de Colombia, Julio de 1995.
2. CÁCERES JULCA, Roberto. *Las medidas cautelares en el Proceso Penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Medidas coercitivas personales, Medidas cautelares reales*. Jurista Editores. Lima, Enero 2014.
3. CÁCERES JULCA, Roberto. *El proceso de perdida de dominio & las medidas cautelares en la investigación preliminar*. Editorial IDEMSA, Lima, 2008.
4. CARNELLUTTI FRANCESCO. *Derecho procesal, civil y penal*. Vol. IV Ciudad de México. Biblioteca Clásicos del Derecho, Editorial Harla, 1997.
5. COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. *La motivación de las sentencias. Sus exigencias constitucionales y legales*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.
6. DE LA JARA Ernesto, y otro. *La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?* Primera Edición, Impreso en Jesús Bellido M., setiembre 2013.
7. FABREGA P. Jorge. *Medidas cautelares*, Santafé de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1998.
8. GARCÍA - PABLOS DE MOLINA, Antonio. *Derecho Penal, parte general*. Jurista, Lima, 2009.

9. GONZÁLES-CUELLAR SERRANO, Nicolás. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Editorial Colex, Madrid 1990.
10. MOSQUERA MORENO, Luis A. *Las medidas cautelares en el proceso acusatorio*. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, Medellín – Colombia. 1a. Edición – 2005.
11. QUIROZ SALAZAR William, y otro. *La prisión preventiva. Desde una perspectiva constitucional, dogmática y del control de convencionalidad*. Ideas Solución Editorial. Junio 2014, Lima.
12. ROSAS YATACO, Jorge. *Manual de Derecho Procesal Penal. Con aplicación al nuevo proceso penal*. Jurista Editores, Lima, 2009.
13. ROXIN, Claus. *Derecho procesal penal*, traducción de la 25ª edición alemana por Gabriela E. Córdoba y Daniel Pastor revisada por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Argentina, 2000.
14. URQUIZO OLAECHEA, José. Principio de proporcionalidad penal. En la ciencia del derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor Don José Cerezo Mlr. Tecnos, Madrid.
15. VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Omar. *La argumentación jurídica en el Tribunal Constitucional Español. Los casos, fáciles, difíciles...trágicos*. Revista Telemática de Filosofía del Derecho Nº 9, Madrid, año 2005/2006.
16. VEGA TORRES citado por DEL RÍO LABARTHE Gonzalo. *Temas Penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Anuario de Derecho Penal 2008. La prisión preventiva en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*.

17. VILLEGAS PAIVA, ELKY A. *“Límites a la detención y prisión preventiva. Cuestionamiento a la privación arbitraria de la libertad personal en el proceso penal”*. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima Perú. Julio 2016.

Organismos internacionales.

1. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas*, 30 de diciembre de 2013.
3. CIDH. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobado por la CIDH mediante Resolución 1/08 en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
4. CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, adoptado el 31 de diciembre de 2011.
5. ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, Informe provisional, A/68/295, publicado el 9 de agosto de 2013.
6. CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.57, adoptado el 31 de diciembre de 2009.
7. CIDH. Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000.

8. CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay.
9. CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Cap. VII, párr. 32. 183 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; y Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55.
10. CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008.
11. CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009.
12. Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, voto razonado del Juez Sergio García Ramírez.
13. Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180; Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.
14. ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/22/44, publicado el 24 de diciembre de 2012.

15. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.

Normas nacionales.

1. Constitución Política del Perú de 1993.
2. Nuevo Código Procesal Penal de 2004.

Sentencias del Tribunal Constitucional:

1. STC N° 1091 – 2002 – HC del 02 de agosto “Caso Vicente Ignacio Silva Checa”.

Consultas a páginas de internet:

1. <http://www.cidh.org>
2. <http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=31,387,0,0,1,0>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas*, 30 de diciembre de 2013.

3. <https://laley.pe/art/8564/cesar-san-martin-explica-la-nueva-jurisprudencia-vinculante-sobre-prision-preventiva>.
4. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_06.pdf

La prisión preventiva en el Código Procesal Penal 2004.

ANEXOS

**ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE
PRISIÓN PREVENTIVA**

EXPEDIENTE : 05207-2014-1-1706-JR-PE-04
JUZGADO : 4TO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
IMPUTADO : DEL CASTILLO MURO, NORMA KATIUSKHA y OTROS
DELITO : ASOCIACION ILICTA PARA DELINQUIR y OTRO
AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
ESPECIALISTA : MILTON LLONTOP SANTISTEBAN
ESP. AUDIENCIA : CÉSAR ADREANO RAFAEL IDROGO.

Lugar : Sala de Audiencias N° CUATRO - Sede Chiclayo.
Fecha : 20 de Enero de 2015.
Hora : 07:19 Horas
Dirige audiencia : Juez Cecilia Margarita Grandez Rojas

I. ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES:

DR. ELI DIAZ PEREZ, Fiscal Adjunto Provincial asignado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, con domicilio procesal en la Calle María Izaga N° 115, 4to. Piso - Chiclayo. RPM N° *682331.

DR. ELIV ARISMENDIZ AMAYA, Fiscal Adjunto Provincial asignado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, con domicilio procesal en la Calle María Izaga N° 115, 4to. Piso - Chiclayo. RPM N° *682331.

DR. SERGIO CHIMPEN OJEDA, Abogado del procesado **José Nicolás Baca Távora**, con registro ICAL N° 396, con domicilio procesal en la calle Siete de Enero N° 873 3er piso A - Chiclayo.

DR. MARTIN PAIVA LA ROSA, Abogado del procesado **José Nicolás Baca Távora**, con registro ICAL N° 3702. Para efectos de interconsulta.

PROCESADO: JOSÉ NICOLAS BACA TAVARA, identificado con DNI N° 17449596, con domicilio real en Río Chotano N° 160 - Urb. Federico Villareal, grado de instrucción superior Arquitecto, trabaja ESPSEL desde hace 14 años ininterrumpidamente, gana 2,750.000 nuevos soles, contrato indeterminado, contrato permanente, católico, casado con Gladys Mercedes Velásquez Pesantez, tiene dos menores hijos de 7 y 10 años, vive en casa alquilada, esta tomando

medicina para la sinusitis, no se fuma ni se droga, no tiene antecedente penales ni policiales, mide 1,68 mt. aprox., contextura delgada, tez blanca, nariz aguileña grande, pesa 66 kilos, no tiene tatuajes, tiene una cicatriz en medio del pecho tipo queloides de 4 cm aprox., cabello lacio, frente con entradas, cejas pobladas, boca mediana, labios regulares.

II. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA:

SEÑORA JUEZ: Declaró válidamente instalada la presente audiencia al no existir observaciones formales por parte de los sujetos procesales.

III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

DEFENSA TECNICA DEL PROCESADO: Señala que ha presentado el recurso de declinatoria de competencia de conformidad con el artículo 271° inciso 2) del Código Procesal Penal, toda vez que, los mismos hechos se viene investigando en el distrito de José Leonardo Ortiz. (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Precisa que la presente audiencia es inaplazable y la declinatoria de competencia será resuelta oportunamente, por lo que ordenó se oralice el requerimiento de prisión preventiva. (Se registró en audio).

FISCAL: Fundamentó el requerimiento de Prisión Preventiva contra **JOSÉ NICOLÁS BACA TAVARA**, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo Impropio y Lavado de Activos, en agravio del ESTADO. (Se registró en audio).

DEFENSA TECNICA DEL PROCESADO: Se opone al requerimiento solicitado. (Se registró en audio).

Seguidamente se realizó la **REPLICA** y **DUPLICA** por parte del representante del Ministerio Público y el Abogado del imputado. (Se registró en audio).

PROCESADO: Señala que en ningún momento ha estado relacionado con los actos ilícitos que lo vienen investigando. (Se registró en audio).

Acto seguido: la señora Juez procedió a emitir la resolución correspondiente:

IV. - DECISIÓN:

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS

Chiclayo, veinte de Enero
del dos mil quince.

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el **DR. ELI DIAZ PEREZ**, Fiscal Adjunto Provincial asignado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, contra el imputado **JOSÉ NICOLAS BACA TAVARA**, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo Impropio y Lavado de Activos, en agravio del **ESTADO**; los argumentos de defensa del procesado **José Nicolás Baca Tavara**; y,

CONSIDERANDO:

PRESUPUESTOS MATERIALES

El artículo 268° del Código Procesal Penal, establece tres elementos para dictar una medida de prisión preventiva, que tienen que ser copulativos sucesivamente.

A). HECHO Y ELEMENTOS FUNDADOS Y GRAVES DE CONVICCIÓN.

EL artículo 268° inciso 1) literal a) del Código Procesal Penal, hace referencia a los graves y fundados elementos de convicción que vinculen al procesado con el hecho delictivo, al respecto se tiene como imputación contra José Nicolás Baca Tavara, la comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo Impropio y Lavado de Activos, en agravio del ESTADO, previsto y sancionado en los artículos 317, 394 del Código Penal y artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1106- Lavado de Activos; el delito de Asociación Ilícita para Delinquir, el Código Penal establece la asociación de dos o más personas en forma permanente, con orden jerárquico, tiene como fin cometer varios ilícitos penales, tiene que haber un concierto previo de voluntades, cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años.

Respecto al delito de Cohecho Pasivo Impropio, previsto en el artículo 394° del Código Penal, que consiste en que: "El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su

obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal"; y el delito de Lavado de Activos castiga el incremento patrimonial, en el cual el procesado tiene la carga de la prueba de indicar la procedencia del dinero para la compra de estos bienes, nuestra legislación prevé varias modalidades delictivas entre las está la conversión del dinero procedente actos ilícitos para la compra de propiedades ya sea muebles e inmuebles, entre otras modalidades.

Cuando se inicia un proceso, en la formalización de la investigación preparatoria el Ministerio Público no esta obligado a señalar una tipificación específica sino señalar el hecho fáctico y dar los lineamientos de la tipificación; el hecho fáctico por el cual se pide la prisión preventiva son los siguientes: respeto al delito de Asociación Ilícita para Delinquir que se le atribuye al procesado José Nicolás Baca Távora, se indica que formó parte de la red de corrupción liderado por Roberto Torres Gonzáles como trabajador de EPSEL realizando diferentes actividades ilícitas.

El imputado José Nicolás Baca Távara, ingresó a laborar a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque, como practicante, permaneciendo en dicha condición durante cuatro meses, luego de lo cual fue designado Jefe de Oficina de Catastro, percibiendo la suma de mil doscientos nuevos soles; en el año 2002 fue designado Jefe del Departamento de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de EPSEL percibiendo un promedio de mil ochocientos nuevos soles; en el año 2004 fue designado Sub Gerente de Catastro, hasta el año dos mil siete percibiendo un ingreso de cerca de tres mil quinientos nuevos soles. Posteriormente, en el año 2010 cuando ya era Alcalde Roberto Torres Gonzáles pasó a desempeñarse como Gerente Comercial de EPSEL, hasta diciembre del 2013 percibiendo una remuneración de cuatro mil trescientos nuevos soles mensuales; posteriormente en entre los meses de enero a Junio del 2014 fue designado como Gerente General de EPSEL, percibiendo una remuneración de seis mil quinientos nuevos soles luego de lo cual ha regresado a laborar a la Sub Gerencia de Catastro, percibiendo una remuneración mensual de tres mil quinientos nuevos soles y en el mes de diciembre del 2014 ha pasado a prestar servicios en la Unidad Formuladora de estudios de proyectos que consiste en la elaboración de proyectos, de acuerdo al SNIP, para ver la rentabilidad y si es viable o no el proyecto.

Cuando ingreso Roberto Torres Gonzáles a la Alcaldía Provincial de Chiclayo lo tuvo como su gente de confianza, donde también trabajaba como miembro del Directorio el señor Percy Quesquen Díaz; el Ministerio Público basa su imputación en los nombramientos que éste tuvo, pues el directorio de EPSEL esta conformado por el alcalde Roberto Torres Gonzáles quien nombra a una persona para que los represente, en este caso el cargo de Gerente es un cargo de confianza no es un cargo de carrera que uno pueda acceder por concurso público; es sabido que el señor Percy Quesquen Díaz que formaba parte de la Red liderada por el señor Roberto Torres Gonzáles, y éste a su vez ha ayudado para el nombramiento del señor José Nicolás Baca Távora; también ha señalado el Ministerio Público como la defensa, que el procesado ha firmado el ADENDUM N° 001-2014 EPSEL, celebrado entre EPSEL y la Municipalidad de Chiclayo, para el mejoramiento del Pavimento en las vías de la Urbanización Campodónico y Urb. San Martín de la localidad de Chiclayo, con código SNIP 279415 y el proyecto Mejoramiento del Pavimento y Veredas en las calles de la Urb. Capondónico y Urb. San Martín de la ciudad Chiclayo con código SNIP N° 279281; pese a que el procesado como Gerente de EPSEL sabia que estaba prohibido conforme se advierte que el Gerente de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS - Renzo Rojas Jiménez le envió sendos oficios, quien indica que: "De la revisión de la documentación remitida se advierte que la reestructuración al Fondo de Inversiones aprobada por sus representada incluye, entre otros, el financiamiento de la pavimentación de la Urbanización Campodónico y Urbanización San Martín - Chiclayo, con los recursos del Fondo de Inversiones de el EPS con cargo de su devolución, obra que no esta vinculada a la mejora de a prestación de los servicios de saneamiento. No obstante lo antes señalado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas se pueden efectuar cambios al plan de Inversiones del Estudio Tarifario, siempre que no implique la modificación de las metas de gestión, previa sustentación de la EPS y evaluación y autorización de la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS. En tal sentido, siendo que el proyecto Pavimentación de la Urbanización Campodónico y Urb. San Martín - Chiclayo, no esta vinculado a la mejora de los servicios de saneamiento; y que a la fecha la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS no ha autorizado la modificación del plan de inversiones del estudio tarifario aprobado por esta Superintendencia, no es procedente que su representada destine recursos del Fondo Exclusivo de Inversiones a proyectos no aprobados en su Estructura Tarifaria."; posteriormente el veintidós de abril del 2014, el señor Renzo Rojas Jiménez en calidad de Gerente de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, "reitera que siendo proyectos de Pavimentación de la Urbanización Campodónico y Urb. San Martín - Chiclayo, no esta vinculado a la mejora de los servicios de

saneamiento; y que a la fecha la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS no ha autorizado la modificación del plan de inversiones del estudio tarifario aprobado por esta Superintendencia, no es procedente que su representada destine recursos del Fondo Exclusivo de Inversiones a proyectos no aprobados en su Estructura Tarifaria. Cabe indicar que, como es de su conocimiento, el uso de los recursos del Fondo de Inversiones para fines distintos a los establecidos en la resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Formula Tarifaria y Metas de Gestión, está tipificado como tipificación como infracción muy grave en el ítem A-4 del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, con una sanción máxima de 250 IUT."; se debe precisar que la adenda que el procesado ha firmado tiene como data nueve de enero del 2014, se ha señalado que el procesado ha tenido un cargo de confianza que duro dos meses pero este contrato fue firmado el nueve de enero del 2014, con el cual se prueba que ha sido nombrado y ejercía funciones, firmo una adenda sabiendo lo irregular de la misma, sabiendo legalmente que eso no era posible, teniendo en cuenta su capacidad o instrucción de Arquitecto, pues ha trabajado en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento desde el año 2000 desde que fue practicante, conoce cuales son funciones y cual es la regulación que tiene la Empresa Prestadora de Servicios, aún pese a ello lo firmo, demostrando así que ha existido un concierto de voluntades con sus coprocesados, por lo cual considera la Juzgadora que por el delito de Asociación Ilícita que se está imputando existe elementos de convicción, lo irregular en su conducta con la suscripción de una adenda pese a que es irregular, conociendo su trayectoria en esa entidad.

Respecto al delito de Cohecho Impropio, el fundamento fáctico del Ministerio Público se basa en las declaraciones de testigos o colaboradores eficaces, tiene como fuente abierta el diario "El Correo", Semanario Expresión y colaborador eficaz con clave CE-22-2014, indica que esta persona en condición de Gerente Comercial de EPSEL, fue competente para generar los requerimientos de compra de medidores para diferentes zonas de Lambayeque, y como Presidente del Comité Especial de Contrataciones, otorgó la buena pro de la Licitación Pública N° 04-2013 para la adquisición e instalación de dos mil medidores de agua, justamente en beneficio de la empresa TRIVECA, entonces con su actuación previa como es el requerimiento del área usuaria, direccionó para que esa empresa, que no cumplió con sus metas y plazos, resulte ganadora de la licitación. Todo ello también concuerda con la versión del colaborador eficaz 09-2014, quien da cuenta de una reunión donde participó en el Hotel Costa del Sol, conjuntamente con Vera Cóndor, Percy Quesquén y el procesado Baca Távara,

donde Quesquén quería que se le consiga facturas para el pago, del soborno "el diezmo", debido a que ya se había pagado una valorización a TRIVECA, en esta reunión el colaborador eficaz tomó conocimiento que anteriormente el pago del diezmo se había efectuado en efectivo directamente a Quesquén, y Vera Cóndor refería que ya no se podía seguir pagando de esa manera porque no podría sustentar las salidas de dinero, por lo que sugiere nuevamente se haga a través de facturas de compra de materiales, es en esta oportunidad se le consigue las facturas y las guías de remisión de cuyas copias se han adjuntado a la Carpeta Fiscal, en estas se verifica que el señor Vera Cóndor los envió al local de TRIVECA ubicado en el Parque Industrial de Chiclayo. Posteriormente cuando Vera Cóndor hacía el depósito del dinero en la cuenta del proveedor de las facturas, se avisaba a Percy Quesquén y éste llamaba al Colaborador Eficaz y le solicitaba que fuera al proveedor de las facturas a retirar el depósito de su cuenta, luego de ser cobrado el depósito el proveedor Burga Llaque, cogía su parte de su comisión que consistía en el 5% del monto de la factura y la diferencia se lo entregaba en un sobre cerrado de manila en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo Ex Mutual, teniendo el dinero en sus manos el colaborador desconociendo el monto, llama a Quesquén quien le indicó que fuera a casa de sus padres, ubicada en el Jirón 28 de Julio N° 571 del Pueblo Joven Diego Ferré y a donde se dirigió que es un edificio de cuatro pisos de fachada blanca, a donde ingresaron, abriendo Percy la puerta con su propia llave; este dinero que le había dado el proveedor de las facturas y que correspondía a la coima de TRIVECA, luego llegó Baca Távora conversaron entre ellos cuanto le iban a dar de dádiva, entregándole la suma de cinco mil nuevos soles, en forma inmediata para que se fuera, quedándose con Baca y Percy Quesquén para que se repartieran el dinero restante entre los dos, el monto que se repartían eran aproximadamente doscientos sesenta mil nuevos soles que correspondían a las facturas que conseguía para justificar estos pagos por parte de TRIVECA. La imputación por el delito de cohecho impropio radica en su condición de Gerente Comercial en el requerimiento de compra de medidores, eso es la imputación específica por este delito.

Respecto al delito de Lavado de Activos, en este delito la carga de prueba le corresponde al procesado, el Ministerio Público indica que en su máximo cargo como Gerente General de EPSEL percibió el sueldo de seis mil nuevos soles, quien empezó ganando mil doscientos, tiene una vivienda ubicada en la Urb. Los Sauces de tres pisos, con baños propios, con yacusi, cocina con terminados de lujo, con cuarzo, este material es el más caro para colocarse en una cocina, el metro cuadrado asciende la suma de dos mil nuevos soles, esta vivienda según el Ministerio Público supera los trescientos mil nuevos soles, se ha

construido un área de ochenta y cinco metros cuadrados, en tres pisos, incluso el tercer piso iba ser un departamento independiente del primer y segundo piso, casa con cochera y acabados de lujo; el procesado ha alcanzado contratos para justificar sus ingresos; la imputación que el Ministerio público tiene contra él respecto al incremento patrimonial es la compra de la camioneta Santa Fe color negro, placa de rodaje M2U-500, año 2012, adquirida por la suma de Cincuenta Mil Nuevos Soles, asimismo, cuenta con un vehículo Toyota yaris adquirido en el año 2010, que esta a nombre de su padre por cuanto tenía problemas conyugales; el Ministerio Público indica que el mes de junio del 2014, presto la suma de veinte mil dólares americanos, a su cuñado Wilmer Gregorio Velásquez Pesantes, con la finalidad de que adquiriera una camioneta marca Toyota modelo Hi Lux placa de rodaje M3Y-779, a quien luego de dos meses de posesión por la falta de pago, requirió la entrega del vehículo, este vehículo lo adquirió de la persona de Betsabet Quesquen.

De lo indicado en la audiencia se ha corroborado para el delito de Lavado de Activos el procesado adquirido los vehículos pero por remate, es decir ha pagado cuarenta y cinco cuotas, si bien es cierto la empresa pandero, cuando uno remata paga más letras para poder comprar el vehículo, pero lo más sorprendente es que el señor ingresa a esa opción de ahorro y a los pocos meses de haber adquirido el vehículo, el primer vehículo ha ingresado el treinta de junio del 2010, y el cinco de septiembre del 2011, fue adjudicado por remate en treinta seis cuotas, es decir después de un año y tres meses, el otro vehículo también fue adquirido por remate, para poder adjudicarse de un vehículo de esa manera uno remata y se tiene un espacio pequeño aproximadamente de ocho días o treinta para abonar la suma por la cual se está rematando, en el caso del último vehículo ingresa a la promotora opción el quince de febrero del 2013 y remata el diecisiete de abril del 2013, es decir de dos meses exactamente, el remate son de cuarenta y cinco cuotas, remate mayor al anteriormente del indicado, es el vehículo por el cual el Ministerio Público se le esta procesando, vehículo nuevo comprado de tienda, por la suma de doce mil dólares americanos.

Respecto al préstamo bancario que ha hecho a su cuñado, se ha indicado que supuestamente es para la compra del vehículo pero no se ha justificado la procedencia de los veinte mil dólares americanos convertido al tipo de cambio equivaldría a la suma de cincuenta y dos mil nuevos soles aproximadamente, si bien es cierto ha adjuntado su declaración jurada de ingresos de ostenta incluso un contrato de FOGAPI, pero es un único contrato y los contratos que ha presentado como Arquitecto en los años de su carrera son pocos, las

sumas que indican son de tres mil a cuatro mil nuevos soles e incluso uno por la suma de diez mil nuevos soles para una casa quinta, la declaración de impuesto a las renta es del año 2013 para adelante, lo que se ha verificado que el terreno donde ha construido su casa que hoy ha sido incautada, ese terreno que se compro a la inmobiliaria Centenario pero también a los veintiún cuotas se pago la totalidad, es decir se pago al contado la diferencia del predio, no se ha indicada movimiento bancario de esta persona, si se trata de una persona que tiene una empresa, tiene ingresos suficientes para poder realizar una actividad comercial, no tiene ningún movimiento bancario, ahorros con los cuales hubiera podido demostrar su capacidad de gasto, a una persona se puede demostrar ingresos no solo no solo por lo que tiene sino por la capacidad de gastos que tiene, en el presente caso se observa un desbalance entre lo que él gana y lo que gasta, no se encuentra una justificación suficiente entre los contratos que tenia y con su capacidad de compra y gasto; tiene dos prestamos bancarios de cincuenta y cinco mil y cincuenta mil nuevos soles, tanto en el Banco de Crédito como el Scotiabank, que iban a ser pagados en varios años, dinero que pudo ser usado para poder comprar o construir su predio en parte; se verifica también que el préstamo que tiene en el Scotiabank es seis de octubre del 2011 y la compra del terreno que tiene en los Sauces es del uno de abril del 2012, siendo incongruente que con ese préstamo haya comprado ese terreno; respecto al préstamo que tiene el procesado en el Banco de Crédito de fecha treinta de julio del 2013, como se ha indicado en el años 2013 y 2014 ha empezado a construir su casa, habiendo acreditado en todo caso parte de la construcción pero con el anterior préstamo no tiene coherencia con la construcción ni con la compra del terreno, en ese sentido la Juzgadora considera que no esta justificado el incremento patrimonial del procesado, por lo que conforme al artículo 268° inciso 1) del Código Procesal Penal, existen suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos investigados

B).- RESPECTO A LA PROGNOSIS DE LA PENA.

Previsto en el Artículo 268° inciso 1) literal b) del Código Procesal Penal, la prognosis de pena por los delito que se atribuyen al procesado; el delito de Asociación Ilícita para Delinquir tiene una pena no menor de ocho ni mayor de quince años, de igual manera el delito de lavado de activos tiene una pena no menor de ocho ni mayor de quince años, el delito de Cohecho Impropio tiene una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años, sumando las penas de los delitos antes mencionados superan ampliamente los cuatro años de pena privativa de libertad que la norma exige para dictar la medida de prisión preventiva.

C). - PELIGRO PROCESAL DE FUGA

Se encuentra previsto en el artículo 268° inciso 1) literal c) del Código Procesal Penal, debe señalarse en este contexto que conforme al artículo 269° código acotado, se debe precisar que Tanto la Corte Suprema como la Sala Superior en sendas resoluciones ha indicado, como en el presente caso, la pertenencia a una Asociación delictiva, a pesar de tenerse domicilio y trabajo conocido, conforme estipula el artículo 268° inciso 2) del Código Procesal Penal, es la pertenencia del imputado a una red delictiva o su reintegración a la misma, es del caso de advertir que puede utilizar los medios que ella le brinde para propiciar la fuga o de otros imputados, u obstaculizar la averiguación de la verdad, por el que en base a la norma señalada se determina que existe peligro de procesal en sus dos vertientes, peligro de fuga y obstaculización de la verdad, en el presente caso existe un concurso real de delitos según el cual se suman las penas lo cual también contribuirá a que no se presente voluntariamente al proceso.

Por los considerandos antes indicados.

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el requerimiento de **PRISIÓN PREVENTIVA** solicitado por el representante del Ministerio Público, contra **JOSÉ NICOLÁS BACA TAVARA**, por la presunta comisión de los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, COHECHO PASIVO IMPROPIO Y LAVADO DE ACTIVOS**, en agravio del **ESTADO**, por el plazo de **DIECIOCHO MESES** contados a partir de la fecha.

ORDENAR el inmediato traslado al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Pisci) debidamente custodiado; **OFICIÁNDOSE** para tal efecto.

En este acto la señorita Juez **NOTIFICA** con la resolución oralizada a los sujetos procesales presentes:

FISCAL

: Conforme.

ABOGADO DEL IMPUTADO

: Interponen recurso de apelación.

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES

Chiclayo, veinte de Enero
del dos mil quince.

PARTE EXPOSITIVA. (Se registró en audio).

PARTE CONSIDERATIVA. (Se registró en audio).

PARTE RESOLUTIVA. Se transcribe.

SE RESUELVE

CONCEDER EL RECURSO IMPUGNATORIO interpuesta por la defensa técnica del procesado **José Nicolás Baca Távora** contra la Resolución número DOS, que resuelve: **DECLARAR FUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público, contra: **JOSÉ NICOLÁS BACA TÁVARA**, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo Impropio y Lavado de Activos, en agravio del **ESTADO**, por el plazo de **DIECIOCHO MESES**.

SE LE CONCEDE a la defensa técnica el plazo de ley para que fundamente su recurso de apelación, en caso de no hacerlo se tendrá por no presentado.

En este acto la señorita Juez **NOTIFICA** a las partes procesales presentes con la Resolución emitida:

FISCAL : Conforme
ABOGADO DEL PROCESADO: Conforme

CONCLUSIÓN

Siendo **09:19 horas** del mismo día, concluyó la audiencia, cerrándose la grabación de audio, suscribe el acta correspondiente la señora Juez y el Especialista Judicial de Audiencias.

**ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
DE REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA CON DETENIDO**

Expediente	:	08455-2015-9-1706-JR-PE-06
Juzgado	:	6° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Delitos	:	ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR EXTORSIÓN SICARIATO
Imputado	:	LUIS FRANKLIN MEDINA CUBAS (A) "COYOTE"
Agraviados	:	EL ESTADO Y OTROS
Jueza	:	Dra. MARÍA YOLANDA GIL LUDEÑA
Esp. de Juzgado	:	KARINA BEATRIZ RAMÍREZ MIMBELA
Esp. de Audiencias	:	JORGE LUIS SÁNCHEZ COICO
Lugar	:	SALA DE AUDIENCIAS N° 13
Fecha	:	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Hora	:	13:12

I.- ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

1. Representante del Ministerio Público: **Dr. GERMÁN DELGADO MONTERO UGÁZ**, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con Casilla Electrónica N° 00000. *(Quedó grabado en audio).*
2. Abogado del Imputado: **Dr. LUIS MARÍN MINO**, identificado con Reg. ICAL N° 1559, con Casilla Electrónica N° 00000. *(Quedó grabado en audio).*
3. Imputado: **LUIS FRANKLIN MEDINA CUBAS**, identificado con DNI 46158925, con domicilio real ubicado en la av. México, 3300 – Chiclayo. *(Quedó grabado en audio).*

Acto seguido, la Señora Jueza le agradeció a la defensora pública por su presencia y le informó que puede retirarse cuando crea conveniente, toda vez que ha concurrido el abogado de libre elección del imputado; asimismo, declaró instalada formal y válidamente la presente audiencia, al no haber observaciones de tipo formal por parte de los sujetos procesales. *(Quedó grabado en audio).*

II.- LECTURA DE RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

PARTE CONSIDERATIVA. *(Quedó registrado en audio).*

PARTE RESOLUTIVA. *(Se transcribe y quedó registrado en audio).*

Por tales consideraciones y en aplicación de lo previsto por los artículos 317° segundo párrafo, 200° quinto párrafo y 108-C° del código penal y los artículos 268°, 269°, 270°, 271° y 272° del NCPP, **SE RESUELVE:**

1. **DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA**, solicitado por el representante del Ministerio Público; en consecuencia **DICTAR PRISIÓN PREVENTIVA POR**

EL PLAZO DEDIECIOCHO MESES, la misma que será computada a partir del día de su detención; esto es, el 2 de septiembre del 2016, vencerá el día 1 de marzo del dos mil 2018, en contra del imputado **LUIS FRANKLIN MEDINA CUBAS(a)** "coyote", **identificado con DNI 46158925**.

2. DISPONER EL INGRESO INMEDIATO al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Pisci) con las previsiones de ley, por el plazo indicado; girándose la respectiva papeleta de ingreso, cursándose los oficios para tal fin.

3. OFICIAR a las Dependencias Judiciales poniendo en conocimiento la situación jurídica del imputado.

Por último, la Señora Jueza dejó constancia que fueron notificados válidamente los sujetos procesales intervinientes en la audiencia, habiendo mostrado su conformidad el representante del Ministerio Público y en ese mismo acto el abogado del **IMPUTADO INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA**; siendo ello así, la Señora Jueza informó al abogado del imputado que se admitirá la apelación interpuesta siempre y cuando sea presentada en el plazo de ley, bajo expreso apercibimiento en caso de incumplimiento de declararse inadmisibile la misma; en consecuencia, siendo las 13:43 se dio por culminada la audiencia. *(Quedó grabado en audio)*.

**ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA CON
14 DETENIDOS**

Expediente Nº : 05972-2016-3-1706-JR-PE-7º
Juzgado : 7mo. Juzgado de Investigación Preparatoria
DETENIDOS : HERNAN SÁNCHEZ CORONEL
RODIL IVAN SANCHEZ CORONEL
OSCAR BUSTAMANTE IDROGO
ERROL DANILO SANTISTEBAN CHAVEZ
SAMUEL ANTONIO RONCAL MIÑANO
ALBERTO GONZALES GONZALES
HEBERT MOSQUERA PÉREZ
ANGEL MOSQUERA PÉREZ
ANGEL ANIBAL BARRANTES VÍLCHEZ
OSIEL BENAVIDES JULCA
WILMER ZEGARRA BONILLA
SILVIA RICARDINA FRANCIA SÁNCHEZ
EMÉRITA BENAVIDES JULCA
MARY PAOLA FERNANDEZ UGAZ
Delitos : ORGANIZACIÓN CRIMINAL
HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO
SICARIATO
EXTORSIÓN AGRAVADA
RECEPTACIÓN AGRAVADA
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Agraviado : SOTERO SANTA CRUZ CABANILLAS Y OTROS
Esp. De Juzgado : Kelly Juliana Puescas Chunga.
Esp. De Audiencia : Erika Lourdes Vargas Félix.

Lugar: Sala de Audiencias Nº 11 – SEDE CHICLAYO
Fecha: 18 de noviembre del 2016.
Hora: 08:30 AM.

Dirige audiencia: DRA. MARY ISABEL NUÑEZ CORTIJO, Juez Titular del presente Juzgado.

ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

- DR. JUAN FRANCISCO MOGOLLÓN CASTILLO, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lambayeque, con Sede en Chiclayo, con domicilio procesal en la calle Luís Gonzáles N°245 – segundo piso - Chiclayo.
- DR. GERMAN EDGARDO MONTERO UGAZ, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lambayeque, con Sede en Chiclayo, con domicilio procesal en la calle Luís Gonzáles N°245 – segundo piso – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°41946
- DR. WILFREDO CASAS RAMÍREZ, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lambayeque, con Sede en Chiclayo, con domicilio procesal en la calle Luís Gonzáles N°245 – segundo piso – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°43904
- DR. MIGUEL ANGEL AUGUSTO FALLA ROSADO, Abogado defensor Particular de la investigada MARY PAOLA FERNANDEZ UGAZ, con domicilio procesal CASILLA ELECTRÓNICA N°42007. celular RPM 979905932.

** Abogado interconsulta DR. GANDHI VÁSQUEZ GONZALES

- DR. JORGE LUIS LARIOS MANAY, Abogado defensor Particular del investigado RODIL IVAN SANCHEZ CORONEL y HERNAN SÁNCHEZ CORONEL, con domicilio procesal en la calle Alfonso Ugarte N° 974 – Oficina N° 203 – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°21012
- DR. JOSÉ LUIS QUIROGA SECLÉN, Abogado defensor Particular de los investigados HEBERT MOSQUERA PÉREZ y ANGEL MOSQUERA PÉREZ, con domicilio procesal en la avenida José Leonardo Ortiz N° 102 – 5to. piso – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°54000.
- DR. JOSÉ ANTONIO CARO JOHN, Abogado defensor Particular del investigado SAMUEL ANTONIO RONCAL MIÑANO, con domicilio procesal en la Calle Diego Ferré N° 416 – Interior B - Urbanización El Porvenir - Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°10979.
- ** Abogado Interconsulta DR. LUIS ALBERTO VERONA SAMPÉRTEGUI.
- DR. JOVINO CASTILLO CASTILLO, Abogado defensor del investigado ALBERTO GONZALES GONZALES, con domicilio procesal en la calle Manco

Cápac N° 288 – cuarto piso – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°42571.

- DR. EDWARD BECERRA DÍAZ, Abogado defensor del investigado ERROL DANILLO SANTISTEBAN CHAVEZ, con domicilio procesal en la calle Francisco Cabrera N° 106 – oficina 301 - Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°7403.
- DR. GERMAN VÁSQUEZ MERINO, Abogado defensor del investigado WILMER ZEGARRA BONILLA, con domicilio procesal en la calle Las Magnolias N° 395 – urbanización Los Parques – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°42130.
- DR. ALEJANDRO BURGOS MONTALVO, Abogado Defensor de ANGEL ANIBAL BARRANTES VÍLCHEZ, con domicilio procesal en la calle Vicente de la Vega N° 1399 – Chiclayo, CASILLA ELECTRÓNICA N°3895.
- DR. MIGUEL CHAFLOQUE CHAFLOQUE, Abogado defensor del investigado OSCAR BUSTAMANTE IDROGO, con domicilio procesal en la calle Manco Cápac N° 240 – Oficina N° 02 – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N°13011.
- DR. ALVARO MELCHOR JULCA DÍAZ, Abogado defensor de la investigada SILVIA RICARDINA FRANCIA SÁNCHEZ, con domicilio procesal en la calle San José N° 429 – Segundo Piso – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N° 8305.
- DR. CÉSAR CHAMAN CABRERA, Abogado defensor del investigado OSIEL BENAVIDES JULCA Y EMÉRITA BENAVIDES JULCA, con domicilio procesal en la Mz C lote 07 – Urbanización el Ingeniero – Chiclayo. CASILLA ELECTRÓNICA N° 38114.
- MARY PAOLA FERNANDEZ UGAZ, investigada, identificada con DNI N° 46601901, con domicilio real en la calle Los Botánicos N °380 – San Antonio Chiclayo.
- OSIEL BENAVIDES JULCA, investigado, identificado con DNI N° 44381592, con domicilio real en la calle Los Laureles N° 759, Distrito de José Leonardo Ortiz.
- SILVIA RICARDINA FRANCIA SÁNCHEZ, investigada, identificada con DNI N°10581552, con domicilio real en la calle María Parado de Bellido N° 192 – Pueblo Joven Santa Rosa.
- EMÉRITA BENAVIDES JULCA, investigada, identificada con DNI N° 33586419, con domicilio real en la calle Los Laureles N°759 – Distrito de José Leonardo Ortiz.
- HERNAN SÁNCHEZ CORONEL, investigado, identificado con DNI N° 27280674, con domicilio real en la calle Richard Gord N°298 - Distrito de José Leonardo Ortiz.

- **ALBERTO GONZALES GONZALES**, investigado, identificado con DNI N° 17422715, con domicilio real en Caquetá - La Merced - Distrito de José Leonardo Ortiz.
- **HEBERT MOSQUERA PÉREZ**, investigado, identificado con DNI N°80030702, con domicilio real en el fundo Santo Tomas N°01 Mz B Lote 06 del Distrito de Lambayeque.
- **ANGEL MOSQUERA PÉREZ**, investigado, identificado con DNI N° 44195446, con domicilio real en la avenida Belaúnde N°1140 - Urbanización La Primavera - Chiclayo.
- **RODIL IVAN SANCHEZ CORONEL**, investigado, identificado con DNI N° 45224439, con domicilio real en la Prolongación Rusbel Mz N lote 03 - Urbanización Carlos Stein - Distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo.
- **OSCAR BUSTAMANTE IDROGO**, investigado, identificado con DNI N°41157113, con domicilio real en la avenida Bolívar N°1902 - Distrito de José Leonardo Ortiz.
- **WILMER ZEGARRA BONILLA**, investigado, identificado con DNI N°16645948, con domicilio real en la avenida 09 de octubre N°678 - Pueblo Joven 09 de octubre - Chiclayo.
- **ERROL DANILO SANTISTEBAN CHAVEZ** investigado, identificado con DNI N°42909785, con domicilio real en Chile N° 1430 - Pueblo Joven Víctor Raúl Distrito de José Leonardo Ortiz.
- **SAMUEL ANTONIO RONCAL MIÑANO**, investigado, identificado con DNI N°16660263, con domicilio real en la calle José León Barandiarán N° 226 - Urbanización Arturo Cabrejos Falla - Chiclayo.
- **ANGEL ANIBAL BARRANTES VÍLCHEZ**, investigado, identificado con DNI N°41856082, con domicilio real en la calle Virrey Toledo N°1029 y 05 de abril N° 380 del Pueblo Joven Atusparias - Distrito de José Leonardo Ortiz.

En este acto la **SEÑORA MAGISTRADO** preguntó a los investigados si desean estar presentes en la presente audiencia, de no querer hacerlo lo puede representar su abogado defensor. (Se registró en audio)

A continuación **TODOS LOS INVESTIGADOS** manifestaron continuar presentes en audiencia. (Se registró en audio)

En este estado la **SEÑORA JUEZ** instaló válida y formalmente la presente audiencia al

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA

2º JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED

EXPEDIENTE : 03916-2017-7-1706-JR-PE-02

JUEZ : VASQUEZ RUIZ MARISOL

ESPECIALISTA : RAMOS HERRERA CRISTIAN DANILO

IMPUTADO : CORDOVA MERINO, JHON OLIVER

DELITO : MICROCOMERCIALIZACIÓN O MICROPRODUCCIÓN.

AGRAVIADO : EL ESTADO PROCURADORA PUBLICA DE LOS ASUNTOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVOS TID ,

ESP. DE AUDIENCIAS : LISSETE TORRES TAFUR

Lugar : Sala de Audiencias N° DOS - NCPP- Chiclayo.

Fecha : 04 de mayo del 2017

Hora : 12:31 p.m.

Dirige audiencia : Juez Marisol Vásquez Ruiz

A las 12:31 horas del día 04 de mayo del 2017, avocándose al conocimiento de la presente causa la SRA. JUEZ MARISOL VASQUEZ RUIZ, en su calidad de Juez Titular del SEGUNDO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO, en la SALA DE AUDIENCIAS N° DOS DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO, para realizar la AUDIENCIA UNICA de PRISIÓN PREVENTIVA en el proceso N° 03916-2017-0, seguido contra **LUIGI ALEXANDER AGUADO TELLO, GERMÁN ALEJANDRO YUPANQUI PARODI, NAYLA VIOLETA RIVERA CHIROQUE, JIHM KELLY HUANCA ELIAS, JORGE BRAJHANT FACHO RAMÍREZ, CESAR AUGUSTO BOCANEGRA FERNANDEZ y JHON OLIVER CORDOVA MERINO**, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en agravio de ESTADO PERUANO.

Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio, cuya grabación demostrará el modo como se desarrollará el presente juicio conforme así lo establece el inciso 2, del artículo 361° del Código Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dicho registro, por tanto se solicita procedan oralmente a identificarse para que conste en el registro, y se verifique la presencia de los intervinientes convocados a este juicio.

I. ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES:

1. DR. MIGUEL ERNESTO VELASQUEZ CABRERA, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Chiclayo, domicilio legal: Calle María Izaga 115, 3° piso – Chiclayo, con Casilla Electrónica N° 71439.

2. DRA. VERONICA CHIROQUE BECERRA, Abogado de Nayla Violeta Rivera Chiroque, registro de colegio de abogados N° 2514, teléfono celular N° 9925089084.

3. DR. EDDIE MARTÍN QUILCATE MESTANZA, Abogado de Luigi Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, Jorge Brajhant Facho Ramírez y Jhon Oliver Córdova Merino, con registro ICAL N° 2170, con domicilio procesal en calle Daniel Alcides Carrión N° 196 - 2° piso - Chiclayo.

4. DR. JOSÉ LUIS QUIROGA SECLÉN, Abogado de Jihm Kelly Huanca Elías, con registro ICAL N° 1964, con domicilio procesal en Av. José Leonardo Ortiz 102 - 5° piso-Chiclayo.

5. DR. PABLO GUERRERO SAMAME, Abogado de Cesar Augusto Bocanegra Fernández, con registro ICAL N° 2346, domicilio procesal calle Luis Gonzales N° 1603 - 2 piso - Chiclayo.

6. DRA. DORIS PAOLA NIETO LAZO, defensor público designada en atención al oficio remitido por este órgano jurisdiccional, con domicilio procesal en calle Daniel Alcides Carrión N° 196 - 2° piso - Chiclayo.

En este acto, la Señora Juez, agradeció la puntualidad y exoneró de responsabilidad a la defensora pública Doris Paola Nieto Lazo, toda vez que los imputados cuentan con abogados de libre elección (Se registró en audio).

7. DR. ODAR CORNEJO CUSTODIO, Abogado interconsulta de la defensa de Nayla Violeta Rivera Chiroque.

8. DR. CARLOS CESAR CHAYANGO LLATAS, defensor público en atención a la solicitud realizada por los familiares del imputado Cesar Augusto Bocanegra Fernández, con domicilio procesal en calle Daniel Alcides Carrión N° 196 - 2° piso - Chiclayo.

En este acto, la Señora Juez, preguntó al imputado Cesar Augusto Bocanegra Fernández, que precise quien, de los letrados apersonados en esta audiencia, asumirá su defensa técnica (Se registró en audio).

Imputado Cesar Augusto Bocanegra Fernández: Manifestó que asumirá su defensa técnica el letrado Carlos Cesar Chayango Llatas (Se registró en audio).

Señora Juez: Agradece la participación del letrado Pablo Guerrero Samame (Se registró en audio).

9. JORGE BRAJHANT FACHO RAMÍREZ, imputado, identificado con DNI N° 72952893, 22 años de edad, nacido el 09 de diciembre de 1994, hijo de Jorge Manuel y Elizabeth del Pilar, natural de Chiclayo- Lambayeque, domicilio real Av. Unión N° 129 - Urb. Quiñones - Chiclayo, grado de superior incompleta, ocupación, estudiante, asimismo precisa que trabaja como mesero / parrillero percibiendo veinticinco soles como ingreso diario, en el restaurant parrilla D'Carlos ubicado en Av. Salaverry cuadra 17, estado civil soltero, no tienen antecedentes, solo ha tenido intervenciones policiales por consumo.

10. JHON OLIVER CORDOVA MERINO, imputado, identificado con DNI N° 48840296, 20 años de edad, nacido el 15 de mayo de 1996, hijo de Donatila María y Santos Walter, domicilio real Av. Los Higueros N- 180 - P.J San Miguel - Chiclayo, grado de instrucción superior incompleta, ocupación estudiante y trabaja repartiendo gas, estado civil soltero, no tiene antecedentes.

11. JIHM KELLY HUANCA ELIAS, imputado, identificado con DNI N° 43702926, 35 años de edad, nacido el 15 de noviembre de 1981, natural de Picsi- Chiclayo-Lambayeque, hijo de Isidro y María Liliana, domicilio real Pasaje El Rosario N° 168 - Urb Las Brisas- Chiclayo, tiene un proceso por hurto en investigación, trabaja como controlador de carga y descarga de material de construcción, estado civil casado, tiene dos hijos.

12. LUIGI ALEXANDER AGUADO TELLO, imputado, identificado con DNI N° 77811071, 18 años de edad, nacido el 21 de noviembre de 1998, estado civil soltero, hijo de Dante Eloy Elías y Carmen Rosa, grado de instrucción cuarto de secundaria, ocupación realiza diferentes trabajos.

13. GERMÁN ALEJANDRO YUPANQUI PARODI, imputado, identificado con DNI N° 46537888, 26 años de edad, domicilio real en Jr. Pimentel 303-Urb. San Felipe-Comas-Lima, nacido el 04 de octubre de 1990, hijo de Guido Alejandro y Ana Consuelo, trabaja en un show infantil y como mototaxista en la ciudad de Lima, refiere que ha sido condenado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, refiere haber cumplido su condena, grado de instrucción quinto de secundaria.

14. NAYLA VIOLETA RIVERA CHIROQUE, imputada, identificado con DNI N° 70679907, 18 años de edad, nacida el 12 de junio de 1998, hija de Edgardo y Verónica, domicilio real calle Minavir 262-Urb. San Isidro-Chiclayo, no tiene antecedentes penales, grado de instrucción superior incompleta, ocupación estudiante de ciencias de comunicación y trabaja en la empresa KEOPS encargándose del Panel Fotográfico, estado civil soltero.

15. CESAR AUGUSTO BOCANEGRA FERNANDEZ, imputado identificado DNI N° 44354020, sexo masculino, 31 años de edad, nacido el 29 de agosto de 1985, hijo de Pedro y Blanca, estado civil conviviente, tiene dos hijos, ocupación chofer de taxi, domicilio real en calle Ecuador N- 1686 - Victor Raúl Haya de la Torre - Distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo.

II. INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

SEÑORA JUEZ: Declaró válidamente instalada la presente audiencia al no existir observaciones por parte de los sujetos procesales. (Se registró en Audio)

III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

* Sobre los graves y fundados elementos de convicción:

FISCAL: Refirió respecto a los graves y fundados elementos de convicción que sustenta su requerimiento Prisión Preventiva; asimismo, determina la participación de cada uno de los detenidos, en el proceso que se le sigue por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en la modalidad de FAVORECIMIENTO AL TRAFICO en agravio de ESTADO PERUANO (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE BOCANEGRA FERNANDEZ: Refirió que no se encuentra acreditado el rol que le imputa la fiscalía a su patrocinado, señala que el día de la intervención, solo estaba brindado un servicio de taxi al señor Huanca Elías; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Concedió el uso de la réplica y dúplica a las partes procesales. Posteriormente, concede el uso de la palabra a la defensa del imputado Huanca Elías (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE HUANCA ELIAS: Refirió que el representante del Ministerio Público imputa a su patrocinado ser abastecedor de droga, sustentándose en lo que alega el imputado Facho, cuando realmente es consumidor, lo cual no significa la existencia de vinculación de su patrocinado con los detenidos; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Concedió el uso de la réplica y dúplica a las partes procesales. Posteriormente, concede el uso de la palabra a la defensa del imputado Facho Ramírez (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE FACHO RAMIREZ: Cuestionó el informe de videovigilancia al no existir una disposición suscrita por el representante del Ministerio Público. Asimismo, refirió que su patrocinado solo es consumidor de drogas, no es un comercializador como refiere el imputado Huanca Elías; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Concedió el uso de la réplica y dúplica a las partes procesales. Posteriormente, concede el uso de la palabra a la defensa del imputado Córdova Merino (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE CORDOVA MERINO: Refirió que el Ministerio Público sostiene que su patrocinado es el facilitador del inmueble donde vende drogas, sosteniendo su imputación solo en la declaración del técnico policial; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Concedió el uso de la réplica y dúplica a las partes procesales. Posteriormente, concede el uso de la palabra a la defensa del imputado Yupanqui Parodi (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE YUPANQUI PARODI: Refirió que su patrocinado vive en Lima, que solo vino a Chiclayo desde el 14 de abril a visitar a su enamorada, con quien se encuentra viviendo estos días, precisando que ha sido circunstancial que su patrocinado se haya encontrado en el momento de la intervención; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Concedió el uso de la réplica y dúplica a las partes procesales. Posteriormente, concede el uso de la palabra a la defensa del imputado Aguado Tello (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE AGUADO TELLO: Refirió que su patrocinado se encontraba en la casa de Córdova en el momento de la intervención, debido que es su primo y vive con él desde enero del 2017, que solo es consumidor de drogas; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Concede el uso de la réplica y dúplica a las partes procesales. Posteriormente, concede el uso de la palabra a la defensa del imputado Rivera Chiroque (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE RIVERA CHIROQUE: Refirió que la presencia de su patrocinada en el momento de la intervención ha sido circunstancial, toda vez que habría ido a dejar la cámara fotográfica a Córdova Merino para que lo arregle, asimismo precisa que del examen toxicológico se advierte que no es consumidora; sus demás argumentos de defensa quedan registrados en audio (Se registró en audio).

* Sobre la prognosis de la pena:

FISCAL: Oralizó la prognosis de pena previsto en el primer párrafo del artículo del 296, concordante con el artículo inciso 6) del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA AGUADO TELLO, YUPANQUI PARODI, FACHO RAMÍREZ Y CÓRDOVA

MERINO: Se opone a lo alegado por el representante del Ministerio Público Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE HUANCA ELIAS: Se opone a lo alegado por el representante del Ministerio Público Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE RIVERA CHIROQUE: Se opone a lo alegado por el representante del Ministerio Público Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Suspende la audiencia por cinco minutos. Acto seguido, se reanuda la audiencia concediendo a las partes procesales para que se prosiga con el debate (Se registró en audio).

* Sobre el peligro procesal y gravedad de la pena:

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Bocanegra Fernández (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE BOCANEGRA FERNANDEZ: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Huanca Elías (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE HUANCA ELIAS: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Facho Ramírez (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE FACHO RAMIREZ: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Córdova Merino (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE CORDOVA MERINO: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Yupanqui Parodi (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE YUPANQUI PARODI: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Aguado Tello (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE AGUADO TELLO: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

FISCAL: Expuso respecto al peligro procesal y gravedad de la pena de Rivera Chiroque (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE RIVERA CHIROQUE: Sustentó su arraigo domiciliario, familiar y laboral (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Suspende la audiencia por treinta minutos. Acto seguido, siendo las 08:15 P.M., se reanuda la audiencia concediendo a las partes procesales unos minutos a fin de que se ponga en debate respecto al plazo de prisión preventiva (Se registró en audio).

* Plazo de prisión preventiva:

FISCAL: Solicitó que se imponga a los detenidos el plazo de nueve meses de prisión preventiva (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE BOCANEGRA FERNANDEZ: Se opone al plazo de periodo de prisión preventiva (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA AGUADO TELLO, YUPANQUI PARODI, FACHO RAMÍREZ Y CÓRDOVA MERINO: Se opone al plazo de periodo de prisión preventiva (Se registró en audio).

FACHO RAMIREZ: Refirió haber colaborado con la intervención, precisando que no forma parte de ninguna organización (Se registró en audio).

BOCANEGRA FERNANDEZ: Refirió que nunca ha tenido problemas policiales ni judiciales, que es inocente (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA DE BOCANEGRA FERNANDEZ: Manifestó que el Dr. Quiroga Seclen se ha sentido delicado de salud, por lo que tuvo que retirarse, precisando que asumiría en este acto la defensa del imputado Huanca Elías (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Preguntó al imputado Huanca Elías, si se encuentra de acuerdo que su defensa técnica sea asumida por el letrado CARLOS CESAR CHAYANGO LLATAS (Se registró en audio).

HUANCA ELIAS: Manifestó que antes de que ha conferenciado con su patrocinado y que se encuentra de acuerdo que asuma su defensa el letrado CARLOS CESAR CHAYANGO LLATAS (Se registró en audio).

SEÑORA JUEZ: Corrió traslado a la defensa técnica de Huanca Elías del acta de audiencia de control de acusación (Se registró en audio).

DEF. TÉCNICA HUANCA ELIAS: Refirió que se advierte del acta de audiencia de control de acusación, que se sigue en su contra una investigación por el delito de hurto agravado, y que se consignó en el acta la dirección del abogado que lo asesoraba, habiéndose precisado en el acta que consulta su dirección (Se registró en audio).

HUANCA ELIAS: Se declaró inocente de los hechos materia de imputación (Se registró en audio).

CORDOVA MERINO: Se declaró inocente de los hechos materia de imputación, precisando que solo tenía un negocio de gas (Se registró en audio).

IV. DECISIÓN.

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS

Chiclayo, cuatro de mayo del dos mil diecisiete

I.- OIDOS Y VISTOS:

En audiencia pública, el requerimiento de prisión preventiva contra **LUIGI ALEXANDER AGUADO TELLO, GERMÁN ALEJANDRO YUPANQUI PARODI, NAYLA VIOLETA RIVERA CHIROQUE, JIHM KELLY HUANCA ELIAS, JORGE BRAJHANT FACHO RAMÍREZ, CESAR AUGUSTO BOCANEGRA FERNANDEZ y JHON OLIVER CORDOVA MERINO**, por el delito de **TRAFICO ILICITO DE DROGAS**, en agravio de **ESTADO PERUANO**; dejándose constancia que las argumentaciones expuestas en la presente audiencia corren registradas en el sistema de audio.

ALEGACIONES DE LOS SUJETOS PROCESALES

a) RESPECTO A LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

i) **El Señor Representante Del Ministerio Público**, indica sus argumentos, precisando, lo siguiente que:

1) solicita la Prisión Preventiva contra los imputados Luigi Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, Nayla Violeta Rivera Chiroque, Jihm Kelly Huanca Elías, Jorge Brajhant Facho Ramírez, Cesar Augusto Bocanegra Fernández Y Jhon Oliver Córdova Merino, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, conducta prevista en el primer párrafo del artículo del 296, concordante con el artículo inciso 6) del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal, en agravio de ESTADO PERUANO; 2) asimismo señala que se les atribuye a los procesados que el día 18 de abril del 2017 a las 11:20 horas, el personal policial de inteligencia se constituyó por inmediaciones de la Av. Pacífico -Chiclayo, con la finalidad de identificar y ubicar a los conocidos como "Manco" y "Vendedor", cuyas características fueron brindadas por fuentes de inteligencia; siendo que a las 12:00 horas aproximadamente, se observó que un sujeto con discapacidad física salía del domicilio ubicado en la calle los Higueros N° 180-PP.JJ, llevando consigo una mochila, cuando observa que dicho sujeto se dirigió a un vehículo de color azul de placa de rodaje C7E-306, luego ingresa al vehículo, lo que motivó a que personal policial proceda a intervenir el vehículo y sus ocupantes, logrando identificar a Huanca Elías Jihm Kelly, quien estaba en el asiento posterior detrás del conductor, a quien se le encontró sobre sus piernas, una bolsa chequera color negra abierta en su extremo libre conteniendo tres paquetes conteniendo en su interior restos de especie vegetal seca, con olor y características a cannabis sativa - marihuana; asimismo, a la persona de Facho Ramírez Jorge Brajhant, conocido como "manco" se le encontró sobre sus piernas una mochila con la inscripción RIP CURL en cuyo interior se encontró tres bolsitas plástica tipo ziploc con cierre hermético cada uno conteniendo en su interior especie vegetal seca con olor y características al parecer Cannabis Sativa - marihuana, Un teléfono celular. es así que Facho Ramírez les indica que en la casa donde vive (calle Los Higueros N° 180 - PP.JJ "San Miguel") tiene más droga, por lo que condujo al personal policial interviniente, al llegar tocó la puerta y fueron atendidos por la persona de Jhon Oliver Córdova Merino, con su autorización ingresaron, encontrándose en su interior una bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina indicando el intervenido Jorge Facho Ramírez que eran de su propiedad, y entre ellas se encontró un (01) paquete conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer Cannabis Sativa - Marihuana; sobre una mesa de madera que se encontraba a la vista otra bolsa plástica color blanca tipo chequera conteniendo en su interior trece (13) bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc cada una conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer Cannabis Sativa Marihuana, asimismo se encontró Una (01) bolsa

plástica Transparente conteniendo semillas al parecer Cannabis Sativa - Marihuana, además se encontró una (01) Pipa y nueve (09) bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc vacías, advirtiéndose que en un ambiente contiguo se encontró a las personas de Luigui Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, Nayla Violeta Rivera Chiroque. 2) Además señala que existen fundados y graves elementos de convicción, los cuales los detalla: 1) Informe N° 048-2017-SEGMACREGPOL-LAM-DIVICAJ/DEPANDRO-CH de fecha 17 de abril de 2017; 2) Acta de intervención N° s/n-2017-REGPOL-LAM/DIVICAJ-DEPANDRO.PNP.CH, realizada el 18 de abril de 2017; 3) Acta de registro personal de Jorge Brajhant Facho Ramírez; 4) Acta de registro personal de Cesar Augusto Bocanegra Fernández; 5) Acta de registro personal de Jihm Kelly Huanca Elías; 6) Acta de registro personal de Nayla Violeta Rivera Chiroque; 7) Acta de registro personal de German Alesandro Yupanqui Parodi; 8) Acta de registro personal de Jhon Córdova Merino; 9) Acta de registro domiciliario, comiso de droga e incautación, en el inmueble ubicado en la calle Los Higueros N° 180 PJ San Miguel -Chiclayo; 10) Análisis de descarte y pesaje N° 33/2017; 11) Acta de registro de incautación de vehículo, de placa de rodaje N° C7E-306, vehículo en el cual se trasladaban los imputados Cesar Bocanegra Fernández; Jhim Huanca Elías y Jorge Facho Ramírez; 12) Análisis de descarte y pesaje N° 034/2017; 13) Análisis de descarte y pesaje N° 248/2017; 14) Lectura de memoria de los celulares incautados; 15) Declaración de Luigui Alexander Aguado Tello; 16) Declaración de Germán Alejandro Yupanqui Parodi; 17) Declaración de Jhon Oliver Córdova Merino; 18) Declaración de César Augusto Bocanegra Fernández; 19) Declaración de Nayla Violeta Rivera Chiroque; 20) Manifestación de Jorge Brajhant Facho Ramírez; 21) Manifestación de Jihm Kelly Huanca Elías; 22) Acta de verificación domiciliaria, donde se deja constancia de las tomas fotográficas del inmueble intervenido; 23) Examen toxicológico N° 266-272/2017; 24) Acta de verificación domiciliaria Oficio N° 7528-2017-RDC-CSJLA/PJ de fecha 25 de abril del 2017; 25) Declaración del efectivo policial Jorge Pinegro y 26) Declaración del efectivo policial Luisa Juárez Olazábal; refiriendo su utilidad, pertinencia y conducencia para los fines de su pedido reiteró que se cumplen los presupuestos constitutivos del requerimiento formulado por su despacho.

ii) **La defensa técnica del procesado BOCANEGRA FERNANDEZ:** Preciso que los graves y fundados elementos de convicción que ha oralizado el representante del Ministerio Público, se sustenta en que toda transacción de drogas se hace entre personas de confianza, es decir fundamenta su prisión preventiva contra su patrocinado en cuestiones subjetivas, por ello se debe advertir que el señor Cesar Augusto Bocanegra Fernández, se encontró al momento de la intervención, a razón de que estaba

brindando el servicio de taxi, al señor Jihm Kelly Huanca Elías, quien solicitó que lo llevara con dirección a la calle Napo, asimismo refiere que habiendo llegado a su destino éste le pidió que se estacione por un momento para esperar a una persona y luego les hiciera otra carrera, es así, que de pronto sube al taxi una persona minusválida, precisando que es en ese instante que fueron intervenidos por la policía; siendo así, se colige que no existe conexión entre su patrocinado y los demás imputados, más aun cuando el representante del Ministerio Público, no ha referido que el número de celular del señor Cesar Augusto Bocanegra Fernández, se encuentre vinculado con los otros imputados.

iii) **El abogado de procesado HUANCA ELIAS:** Refirió que la investigación del representante del Ministerio Público se sustenta en que habría recibido información de que dos personas estarían traficando y comercializando droga, y lo identifican como sujeto conocido como "manco", sin embargo su patrocinado en ningún momento su patrocinado aparece en la investigación, precisando que ha sido circunstancial el haberse encontrado durante la intervención del señor Facho; su presencia se dio en razón que su patrocinado es consumidor, lo cual no signifique que lo vincule con los demás sujetos investigados, conforme se verifica de sus declaraciones, pues su co imputados señalan que no conocen a su patrocinado, precisando que solo conoce a Facho por su condición de comercializador. Respecto que su hermano se encuentra en el penal sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas, es vulnerar el principio de presunción de inocencia porque el hecho que tenga un hermano delincuente no le convierte en delincuente, y con relación a la droga que se le encontró en las piernas de su patrocinado, se debe a que el imputado Facho lo habría arrojado hacia él.

iv) **En su momento señala la defensa del procesado FACHO RAMIREZ:** Refirió que la presente investigación solo se basa en una intervención policial, que se sustentó en una orden de videovigilancia que no cumplía con la formalidad; sin embargo, se imputa a su patrocinado ser comercializador de una organización, cuando realmente es consumidor de drogas, que se encontraba en el lugar de la intervención porque se acercó a comprar drogas a Huanca Elías. Preciso que su patrocinado ha colaborado con la policía, pues incluso los conduce a la vivienda.

v) **El abogado del procesado CORDOVA MERINO:** Al hacer uso de la palabra precisó que se le imputa a su patrocinado ser el facilitador del inmueble para la droga, lo cual no ha sido corroborado con ningún medio probatorio solo con la declaración del técnico Pinegro Cruzado, precisando que ha sido

una pésima intervención porque no se ha consignado que se ha encontrado en la vivienda, pues no se ha detallado que la motocicleta que estaba en la casa era utilizada para la venta de gas, siendo esta la razón por la cual cuenta con dos teléfonos movistar y claro, porque hace entrega a domicilio. Asimismo, alega que su patrocinado no conoce a Bocanegra ni a Huanca, precisando que desconocía de la droga, caso contrario no hubiera abierto la puerta.

vi) **La defensa técnica del procesado YUPANQUI PARODI:** Refirió que su patrocinado se encontró en el inmueble intervenido debido que se dirigía a ver el partido de fútbol con Córdova Merino, precisando que, si bien es consumidor de drogas, pero desconocía que en la casa había cannabis sativa – marihuana.

vii) **EL abogado del investigado AGUADO TELLO:** Refirió que su patrocinado se encontraba en la casa de Córdova en el momento de la intervención, debido que es su primo y vive con él desde enero del 2017, que solo es consumidor de drogas.

viii) **La defensa Técnica de RIVERA CHIROQUE:** Refirió que la presencia de su patrocinada en el momento de la intervención ha sido circunstancial, toda vez que habría ido a dejar la cámara fotográfica a Córdova Merino para que lo arregle, asimismo precisa que del examen toxicológico se advierte que no es consumidora.

b) RESPECTO A LA PROGNOSIS DE PENA

i) **Señala el señor Fiscal lo siguiente** que: el delito que se les atribuye a los procesados se encuentra previsto en el primer párrafo del artículo del 296, concordante con el artículo inciso 6) del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal, que prescribe que “La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4), 5) y 8) cuando: (...) 6.-El hecho es cometido por tres o más personas o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. (...)”. En ese sentido, señala que supera altamente el pronóstico de pena de cuatro años que se requiere para dictar esta medida coercitiva.

ii) **La defensa del procesado BOCANEGRA FERNÁNDEZ**, se opuso a la prognosis de la pena, toda vez que su patrocinado no se encuentra vinculado con el hecho imputado, siendo que su presencia en el momento de la intervención ha sido circunstancial.

iii) **La defensa técnica de los procesados AGUADO TELLO, YUPANQUI PARODI, FACHO RAMÍREZ Y CÓRDOVA MERINO**: Refirió que el representante del Ministerio Público no ha realizado un correcto análisis de los hechos investigados, advirtiéndose que se estaría forzando los hechos para subsumir en la norma antes citada, toda vez que en ningún momento se ha acreditado la vinculación del hecho con los investigados.

iv) **Asimismo, la defensa técnica de DE HUANCA ELIAS**: Se opuso a la prognosis de pena a razón que se habría acreditado la concertación entre los detenidos, conforme lo previsto en el Acuerdo Plenario 3-2005.

v) **Además la defensa del procesado RIVERA CHIROQUE**: Refirió que su patrocinada no tiene vinculación con sus co procesados.

c) RESPECTO AL PELIGRO PROCESAL

i) **El representante del Ministerio Público**. Refirió que el investigado Bocanegra Fernández, declaró ser taxista desde el año 2011, cuyo vehículo que conduce estaría afiliado a la empresa América, pero no ha presentado documento que acredite lo alegado, ni su licencia de conducir, además en el momento de la intervención se encontró que la droga estaba a expuesta dentro del vehículo, de lo que se infiere que el investigado tiene conocimiento y cumple el rol de conductor para la distribución de la droga. Además, señala que el investigado ha declarado domiciliar en la en la calle Ecuador N° 1686 - PPJJ Víctor Raúl Haya de la Torre - José Leonardo Ortiz, dirección que difiere de la consignada en su ficha RENIEC, precisando que es la más adecuada para que no rehuya de la justicia. Posteriormente, procedió a oralizar sus argumentos contra el imputado Huanca Elías, precisando que el investigado declara que se encuentra en la ciudad de Chiclayo por motivo de trabajo, y que labora con el señor Jesús Segundo Coronel Calderón, como controlador de la venta y transporte de material de construcción en los vehículos de su empresa, con un horario de 08:00 a.m. hasta las 06:00 p.m., lo que no ha sido óbice para que el día dieciocho de abril del presente año, el investigado sea intervenido conjuntamente con dos sujetos, a quienes se les encontró con droga. Si bien, el imputado manifiesta contar con arraigo familiar, este no

mantendría una relación de convivencia ni que cumpla con sostener económicamente a su familia; aunado a ello su declaración respecto a su dirección no coincide con la consignada en la ficha RENIEC. Además, señala que se evidencia peligro de obstaculización, a razón de que Facho sindicó a Huanca como el sujeto que le abastece de cannabis sativa – marihuana.

Luego prosiguió a oralizar el peligro procesal contra el investigado Facho Ramírez, quien en su declaración ha manifestado que tiene como domicilio ubicado en la calle Los Higueros N° 180-PP.JJ. San Miguel-Chiclayo, dirección a la que condujo a los efectivos policiales, luego de ser intervenido sorpresivamente dentro del vehículo azul en el que se le encontró con drogas, aceptando que la droga encontrada es suya; no obstante, esta dirección difiere de la que se ha consignado en su ficha RENIEC. Además, señala que se evidencia peligro de obstaculización, a razón de que Huanca Elías sindicó a Facho Ramírez como el sujeto que le abastece de cannabis sativa – marihuana. Continuando con su exposición, oralizó el peligro procesal contra el investigado Córdova Merino, precisando que ha declarado que domicilia en la calle Los Higueros N° 180-PP.JJ. San Miguel-Chiclayo, casa que ha sido intervenida el día dieciocho de abril del año en curso, en el que se encontró bolsitas de droga, cannabis sativa – marihuana, la cual se encontraba en exposición a los demás, de lo que se infiere que la calidad de arraigo domiciliario resulta débil; aunado a ello argumentó que carece de arraigo laboral y familiar porque, si bien manifiesta ser distribuidor de gas, se advierte que no cuenta con licencia que autorice su funcionamiento, ni que cuenta con familia que dependa económicamente del investigado.

Ahora bien, respecto al investigado Yupanqui Parodi, sustentó el peligro procesal, a razón de que el imputado no ha logrado explicar cuál es la razón de haberse encontrado en la casa intervenida, asimismo que no demostrado contar con arraigo domiciliario, si bien el imputado ha declarado que radica en la ciudad de Lima, pero que el motivo de su estadía en Chiclayo, se debe a que habría llegado a visitar a su enamorada; sin embargo, no acredita contar con un domicilio habitual que lo vincule y permanezca de forma permanente en un lugar. Asimismo, se verifica que de la revisión de autos, el investigado cuenta con antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas, de lo que se infiere que no ha interiorizado el fin de la pena. De otro lado, con relación al investigado Aguado Tello, no cuestiona que cuenta con domicilio conocido pero advierte que la calidad de arraigo es débil, a razón que en el interior del inmueble se encontró droga, siendo utilizada para la comisión de hechos ilícitos; aunado, a ello refirió que no ha corroborado documentalmente contar con arraigo laboral.

Seguidamente, sustentó el peligro procesal respecto de Rivera Chiroque, refirió que si bien el domicilio declarado coincide con el que se ha consignado en su ficha RENIEC, esto no resulta suficiente para acreditar que no exista peligro procesal, toda vez que de la revisión de los documentos presentados ante fiscalía, se advertiría que es estudiante de la escuela de ciencias de la comunicación en la Universidad Señor de Sipán, pero no ha sido matriculada para el semestre 2017 I; además que el contrato de trabajo suscrito con KEOPS, habría sido expedido de favor porque su madre es asesora de la empresa referida.

ii) **La Defensa Técnica del Investigado BOCANEGRA FERNÁNDEZ:** refiere que radica en la calle Ecuador N° 1686 – PPJJ Víctor Raúl Haya de la Torre - José Leonardo Ortiz, para ello presenta el certificado domiciliario N° 61-2017 de fecha tres de mayo del dos mil diecisiete, declaración jurada de la conviviente, acta de nacimiento de sus menores hijos: Adriana Yaritzy Guimaraes, y Krayg Alessandro Bocanegra Guimaraes, con lo cual se demuestra que su patrocinado cuenta con arraigo domiciliario y familiar; aunado a ello agrega tiene arraigo laboral, es taxista afiliado a la empresa América, precisando que la información se puede obtener extrayendo datos del sistema de la empresa referida.

iii) **El Abogado del Imputado HUANCA ELÍAS:** Refiere que su patrocinado tiene una familia, que esta conformada por su esposa e hijos, lo cual lo acredita con el acta de nacimiento de sus menores hijos, fotografías donde aparece su patrocinado y su familia, constancia de trabajo expedida por Jesús Segundo Coronel Calderón en el que consta que se desempeña como controlador de la venta y transporte de material de construcción en los vehículos de su empresa, se adjunta la ficha RUC de su empleador. Asimismo, refiere si bien es cierto su defendido se encuentra en la ciudad de Chiclayo por motivo de trabajo, su domicilio actual se encuentra en el Pasaje El Rosario N° 168 – Urb. Las Brisas, donde vive con su madre, lo que se corrobora con la declaración jurada de su madre.

iv) **El abogado del investigado FACHO RAMIREZ:** Manifiesta que su patrocinado domicilia en la Av. Unión N° 129 - Urb. Quiñones – Chiclayo, para ello lo acredita con el certificado de inscripción de ficha RENIEC, recibo de luz girado a nombre de su madre Elizabeth del Pilar Ramírez Santoyo, título de saneamiento de propiedad expedido por el organismo de formalización de la propiedad informal – COFOPRI de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete e inscripción de la sucesión intestada en el que consta que su madre es propietaria del bien inmueble referido, declaración jurada de su madre en el

que precisa que domicilia con su hijo, con lo que acreditaría el arraigo domiciliario y familiar. De otro lado, refiere que su patrocinado es trabaja como mozo en el restaurant D'Carlos y es estudiante de la escuela de Negocios Internacionales en la Universidad Señor de Sipán, lo que se acredita con su historial académico, precisando que se matriculará en el semestre 2017 I de manera extemporánea, a ello se debe tener en cuenta que el imputado desde un inicio ha colaborado con las investigaciones.

v) **El Abogado Del Procesado CÓRDOVA MERINO:** Refiere que el domicilio de su patrocinado se encuentra acreditado con la ficha RENIEC, además de que es un joven universitario de la escuela de ingeniería de sistemas de la Universidad Señor de Sipán, conforme se aprecia del historial académico; además, se desempeña como distribuidor de gas, para ello presenta boletas de compra, el cuaderno de anotaciones y entre otros documentos, a fin de acreditar que cuenta con arraigo laboral.

vi) **Asimismo, la defensa técnica del investigado YUPANQUI PARODI:** Refiere que no cuenta con antecedentes penales, esto a razón de que a la fecha ha sido rehabilitado por haber vencido el periodo de prueba, que su presencia en el inmueble intervenido ha sido circunstancial, no tiene conocimiento de la droga; asimismo, refiere que su patrocinado labora como asistente de animaciones y show infantiles los días sábados por la tarde; asimismo, se presenta constancia de trabajo expedido a nombre de su novia, entre otros documentos que acredita que su enamorada cuenta con trabajo subordinado.

vii) **La Defensa Técnica Del Investigado AGUADO TELLO:** Refiere que su patrocinado es primo de Córdova Merino, con quien a la fecha se encuentra viviendo en el inmueble intervino, cuenta con dieciocho años de edad, es un joven que recién ha terminado el colegio conforme se verifica de su certificado de estudios, pese a ello ha venido desempeñándose en diversas labores conforme constancia de trabajo suscrito por Marlene Zavaleta; además de dedicarse a volanteo; además se presenta documento en el que consta que sus tíos de su patrocinado velan por él.

viii) **La Defensa Técnica Del Procesado RIVERA CHIROQUE:** Refiere que su patrocinada domicilia con ella, quien es su madre, conforme lo acredita con la constancia de domicilio, además que de la revisión de boucher y de la hoja extraída del campus virtual de su defendida, se verifica que si estaría matriculada para el ciclo académico 2017 I. Asimismo, refiere que se cuestiona que su hija se encuentre laborando para la empresa KEOPS, resulta pertinente precisar que es una empresa formal, que realiza sus

contribuciones a favor del Estado y cuya ficha de ruc aparece activo; además se esta presentado las copias de las boletas de trabajo en el que se precisa su remuneración que percibe.

d) RESPECTO AL PLAZO DE PRISIÓN PREVENTIVA

i) **El representante del Ministerio Público.** Solicitó que se imponga a los detenidos el plazo de nueve meses de prisión preventiva, a razón de que se trata de un proceso que se sigue contra siete investigados, existiendo diligencias pendientes por realizar.

ii) **La defensa del procesado BOCANEGRA FERNÁNDEZ:** Se opone porque considera que las diligencias pertinentes ya han sido realizadas, por lo que conceder el plazo solicitado es restringir la libertad de su patrocinado sin fundamento jurídico alguno.

iii) **La defensa técnica de los procesados AGUADO TELLO, YUPANQUI PARODI, FACHO RAMÍREZ Y CÓRDOVA MERINO:** Refiere que los retardos en las investigados tienden a ser por responsabilidad del Ministerio Público, advirtiéndose que en el presente proceso de acuerdo a lo referido por el fiscal todo estaría esclarecido, no resultaría correcto amparar lo solicitado por el fiscal,

II.- PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: En principio, conforme lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional, las medidas restrictivas del ejercicio de los derechos personales como el derecho a la libertad, deben ser arbitradas equitativamente, lo que supone que su imposición sea el resultado de un juicio ponderado. En ese marco, el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal establece que *“las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo, las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad”*.

SEGUNDO: Considerando, entonces, que la restricción de la libertad personal, una vez que se haya dictado formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, reafirma su función propia de aseguramiento de la investigación, el mandato de prisión preventiva devendrá legítimo siempre que obre la concurrencia simultanea de los tres presupuestos indicado en el artículo 268.1 del Código Procesal Penal que dice: El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguiente supuestos que: i) existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo; ii) la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y iii) que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

TERCERO: Los artículos doscientos sesenta y ocho, así como también artículos doscientos ochenta y seis a doscientos ochenta y siete del Código Procesal Penal, establecen los presupuestos tanto para dictarse la prisión preventiva, así como la comparecía restrictiva y competencia simple. Asimismo, el artículo 253 de la normatividad indicada también señala los principios y finalidades de las medidas de coerción; norma de desarrollo constitucional que establece los principios de razonabilidad y proporcionalidad prescritos el artículo 200 - última parte de la Constitución Política del Estado.

CUARTO: El artículo 268.1 del Código Procesal Penal establece que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguiente supuestos que: i) existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo; ii) la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y iii) que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (*peligro de fuga*) u obstaculizar la averiguación de la verdad (*peligro de obstaculización*).

4.1) SOBRE LOS FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS CONVICCIÓN

Es el primer requisito que exige la prisión preventiva en el inciso uno del artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal. no se prevé expresamente en la convención de derechos humanos ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pero sí en la prohibición de detenciones arbitrarias, que se regulan en ambos cueros normativos.¹ Debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos preliminarmente y/o propiamente de investigación que cada uno de los aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. es el llamado *Fumus delictivi commissi*, o sea la apariencia de verosimilitud del hecho delictivo y vulneración del imputado.² Asimismo que para adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, sólo que exista un alto grado de probabilidad.³ de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria;⁴ valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momentos (primeros recaudos).

4.2) SOBRE LA PROGNOSIS DE PENA

Como es doctrina consolidada la prognosis de pena implica un análisis sobre la probable pena a imponerse. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad, previstos en los artículos IV Y VII del Título Preliminar del Código Penal y/o las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas de derecho penal premial, que podrían influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por la ley.⁵

¹ En ese sentido, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido en el Informe 2/9, que la presunción de culpabilidad de una persona no solo es un elemento importante, sino una condición *sine qua non* para continuar la medida restrictiva de libertad. LLOBERT RODRIGUEZ, Javier, 'La Prisión Preventiva. Límite Constitucionales. tercera edición San José: Editorial jurídica Continental, 2010, pp. 155 y 156.

² CASACION Nro. 6256-2013 - MOQUEGUA LA PRISIÓN PREVENTIVA. Fundamento Vigésimo Sexto.

³ La probabilidad significa un acercamiento plausible al existo de la acción emprendida, esto es, el juicio del sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado buscado, el conocimiento de la verdad, aunque reconoce no haberlo alcanzado totalmente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad, pero cree que se ha aproximado bastante a ella. La probabilidad, conforme a su grado es positiva o negativa, según que los elementos de prueba que confirman la hipostasis superan aquellos que la rechazan, aunque sin descartar absolutamente la solución contraria y viceversa. Intuitivamente, certeza o certidumbre se diferencia cualitativamente de probabilidad, pero la diferencia no es tan notable si exigimos una gran probabilidad [MAIER, Juio, Derecho procesal Penal. Fundamento 2 ed. Buenas Aires Editoriales del puerto 2004. t.I pp 843-847

⁴ Oré Guardia, Arsenio Manuel de derecho procesal penal. las medidas de coerción en el proceso penal. Lima Editorial, 2014 t II, p 145 (citadas en la referida Casación).

⁵ CASACION Nro. 6256-2013 - MOQUEGUA LA PRISIÓN PREVENTIVA. Fundamento Vigésimo Noveno.

4.3) SOBRE EL PELIGRO PROCESAL :

El peligro procesal es el elemento más importante de esta medida y la razón por la que se dicta. Se divide en dos: i) Peligro de fuga. ii) Peligro de Obstaculización.

Es así, que a efectos de reconocer este peligro en su artículo doscientos sesenta y nueve del Código procesal Penal establece criterios que debe evaluar el juez para determinar que existe la probabilidad que el imputado se sustraiga del proceso i) El arraigo; ii) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. iii) la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. iv) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. v) La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a la mismas.

QUINTO: La Resolución administrativa trescientos veinticinco - dos mil once- P-PJ. indica también, que en este tipo de audiencias, no se puede indicar una calificación totalmente absolutamente correcta sino racional, aproximada al tipo penal, refiriéndose en todo caso a la punibilidad y perseguibilidad, esto es respecto a la probabilidad de culpabilidad, como en este caso se advierte. Asimismo, señala que la presencia de algún tipo de arraigo no descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva.

Análisis del caso en concreto

SEXTO: Respecto a los presupuestos materiales contenidos en el dispositivo legal citado, específicamente al primer presupuesto, esto es, sobre los fundados y graves elementos de convicción.

6.1) El representante del Ministerio Público atribuye a los imputados **LUIGI ALEXANDER AGUADO TELLO, GERMÁN ALEJANDRO YUPANQUI PARODI, NAYLA VIOLETA RIVERA CHIROQUE, JIHM KELLY HUANCA ELIAS, JORGE BRAJHANT FACHO RAMÍREZ, CESAR AUGUSTO BOCANEGRA FERNANDEZ y JHON OLIVER CORDOVA MERINO**, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, conducta prevista en el primer párrafo del artículo del 296, concordante con el artículo inciso 6) del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal, en agravio de Estado Peruano; en ese contexto indica que: i) EL HECHO IMPUTADO, consiste en que el día 18 de abril del 2017 a las 11:20 horas, el personal policial de inteligencia se constituyó por

inmediaciones de la Avenida Pacífico -Chiclayo, que conduce a la localidad de Pimentel, con la finalidad de identificar y ubicar a los conocidos como alias: "Manco" y "Vendedor", cuyas características fueron brindadas por fuentes de inteligencia. Es así, que siendo las 12:00 horas aproximadamente, cuando observaron en actitud sospechosa a un sujeto con discapacidad física de un miembro superior (izquierdo), que salía del domicilio ubicado en la calle los Higueros N°180-PP.JJ. San Miguel-Chiclayo, llevando consigo una mochila, dirigiéndose a la Av. Zarumilla e ingresando a la derecha a la calle Napo-Satélite-Chiclayo, dirigiéndose a un vehículo de color azul de placa de rodaje C7E-306, el mismo que luego de abrir la puerta del **copiloto**, ingresa al vehículo, lo que motivó, la intervención del personal policial, siendo del caso, que proceden a intervenir el vehículo y sus ocupantes, identificando a las personas de Huanca Elías Jihm Kelly, quien estaba en el asiento posterior detrás del conductor, a quien se le encontró sobre sus piernas, una bolsa chequera color negra abierta en su extremo libre conteniendo en su interior tres paquetes de forma alargada hechos con cinta industrial "FIL" transparente, conteniendo en su interior restos de especies vegetal seca, con olor y características a **cannabis sativa -marihuana**; asimismo, al conductor César Augusto Bocanegra Fernández, a quien se le incautó un teléfono celular color negro marca LG y, finalmente al tercer sujeto, identificado como Facho Ramírez Jorge Brajhant, conocido como "manco", quien presentaba discapacidad física (sin antebrazo izquierdo), al mismo que al efectuársele el registro personal, se le encontró sobre sus piernas una mochila con la inscripción **RIPCURL** en cuyo interior se encontró tres bolsitas plástica tipo ziploc con cierre hermético cada uno conteniendo en su interior especie vegetal seca con olor y características al parecer **Cannabis Sativa - marihuana**, Un teléfono celular color plateado con negro marca Motorola "Claro" con IMEI, con chip. Luego de ello, el intervenido **Jorge Brajhant Facho Ramírez**, indica que en la casa donde vive tiene más droga, por lo que condujo al personal policial interviniente a su domicilio sito en calle Los Higueros N° 180 - PP.JJ "San Miguel" -Chiclayo, al llegar tocó la puerta y fueron atendidos por la persona de Jhon Oliver Córdova Merino, el personal policial se identificó y con la autorización respectiva se ingresó y en su registro personal se le encontró un teléfono celular marca **LOGIC** color verde con negro, con IMEI, con dos Chips, "Movistar y Claro, tres (03) billetes de S/.20.00 soles de diferente denominación, dos (02) billetes de S/.10.00 de diferente denominación, dos (02) monedas de S/. 5.00 soles, una (01) moneda de S/. 2.00; asimismo, al realizar el registro del inmueble antes citado, en un ambiente destinado como sala comedor al lado izquierdo de la puerta de ingreso sobre una **banca de madera** se encontró una bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina indicando el intervenido Jorge Facho Ramírez que eran de su propiedad, y entre ellas

se encontró un (01) paquete en forma alargada hecho con cinta industrial FIL conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer Cannabis Sativa - Marihuana; de igual forma sobre una mesa de madera que se encontraba a la vista se halló una bolsa plástica color blanca tipo chequera conteniendo en su interior trece (13) bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc cada una conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer Cannabis Sativa Marihuana, asimismo se encontró Una (01) bolsa plástica Transparente conteniendo semillas al parecer Cannabis Sativa - Marihuana, además se encontró una (01) Pipa y nueve (09) bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc vacías, precisando que en un ambiente contiguo se encontró a las personas de **Luigui Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, Nayla Violeta Rivera Chiroque.** b) En ese sentido, conforme lo indicó el fiscal, se le imputa a **Cesar Augusto Bocanegra Fernández** ser quien trasladaría vehículo a su co procesado **Jihm Kelly Huanca Elías**, con la finalidad de transportar la droga y entregarla a su co procesado **Jorge Brajhant Facho Ramírez**, quien a la vez la llevaría a la casa de su co procesado **Jhon Oliver Córdova Merino**, a fin de acopiarla, acondicionarla y comercializarla, por parte de **Luigui Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, Nayla Violeta Rivera Chiroque**, quienes serían encargados de empaquetar y comercializar la droga.

6.2) Elementos de convicción graves y fundados:

1. Informe N° 048-2017-SEGMACREGPOL-LAM-DIVICAJ/DEPANDRO-CH, de fecha 17 de abril de 2017, en el que se deja sentado que se logró obtener a través de fuentes humanas, información relevante del presunto accionar de un sujeto conocido como "Manco", quien domicilia en el inmueble en calle Los Higueros N° 180 – PJ San Miguel – Chiclayo, cuyo suministro de energía eléctrica N° 255250761, que serviría como fumadero y venta de drogas. Asimismo, que a dicho domicilio llegan asiduos consumidores de droga a bordo de vehículos en su mayoría al parecer estudiantes universitarios, quienes son atendidos por un sujeto que funge de vendedor de gas, quien es la persona que entrega los ketes, pacos etc.
2. Acta de intervención N° s/n-2017-REGPOL-LAM/DIVICAJ-DEPANDRO.PNP.CH, realizada el 18 de abril de 2017, documento en el que consta "(...) siendo las 12:00 horas aproximadamente, se observó en actitud sospechosa a un sujeto con discapacidad física de un miembro superior (izquierdo), que salía del domicilio ubicado en la calle los Higueros N°

180-PP.JJ. San Miguel-Chiclayo, llevando consigo una mochila, dirigiéndose a la Av. Zarumilla, ingresando a la derecha a la calle Napo-Satélite-Chiclayo, en donde se observó que dicho sujeto se dirigió a un vehículo de color azul de placa de rodaje C7E-306, abrió la puerta del lado de copiloto e ingresó y se sentó, lo que motivó que el personal policial proceda a intervenir el vehículo y sus ocupantes, identificando a las personas de Huanca Elías Jihm Kelly, quien estaba en el asiento posterior detrás del conductor, a quien se le encontró sobre sus piernas, una bolsa chequera color negra abierta en su extremo libre conteniendo en su interior tres paquetes de forma alargada hechos con cinta industrial "FIL" transparente, conteniendo en su interior restos de especies vegetal seca, con olor y características a cannabis sativa - marihuana; al conductor César Augusto Bocanegra Fernández, a quien se incautó un teléfono celular color negro marca LG, a la persona de Facho Ramírez Jorge Brajhant, conocido como "manco" el mismo que presentaba discapacidad física (sin antebrazo izquierdo) a efectuarse su registro personal, se le encontró sobre sus piernas una mochila con la inscripción RIP CURL en cuyo interior se encontró tres bolsitas plástica tipo ziploc con cierre hermético cada uno conteniendo en su interior especie vegetal seca con olor y características al parecer Cannabis Sativa - marihuana, Un teléfono celular color plateado con negro marca Motorola "Claro" con IMEI, con chip; ante esa circunstancia Jorge Brajhant Facho Ramírez, indica que en la casa donde vive tiene más droga, por lo que condujo al personal policial interviniente a su domicilio sito en calle Los Higueros N° 180 - PP.JJ "San Miguel" -Chiclayo, al llegar tocó la puerta y fueron atendidos por la persona de Jhon Oliver Córdova Merino, el personal policial se identificó y con la autorización respectiva se ingresó y en su registro personal se le encontró un teléfono celular marca LOGIC color verde con negro, con IMEI, con dos Chips, Movistar y Claro, tres (03) billetes de S/.20.00 soles de diferente denominación, dos (02) billetes de S/. 10.00 de diferente denominación, dos (02) monedas de S/. 5.00 soles, una (01) moneda de S/. 2.00, al realizar el registro del inmueble antes citado, en un ambiente destinado como sala comedor al lado izquierdo de la puerta de ingreso sobre una banca de madera se encontró una bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina indicando el intervenido Jorge Facho Ramírez que eran de su propiedad, y entre ellas se encontró un (01) paquete en forma alargada hecho con cinta industrial FIL conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer Cannabis Sativa - Marihuana, sobre una mesa de madera que se encontraba a la vista se halló una bolsa plástica color blanca tipo chequera conteniendo en su interior trece

(13) bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc cada una conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer Cannabis Sativa Marihuana, asimismo se encontró Una (01) bolsa plástica Transparente conteniendo semillas al parecer Cannabis Sativa - Marihuana, además se encontró una (01) Pipa y nueve (09) bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc vacías, precisando que en un ambiente contiguo se encontró a las personas de Luigui Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, en su registro se le encontró un teléfono celular marca OWN, Entel y, a la persona de Nayla Violeta Rivera Chiroque, una cartera cuerina color rosa conteniendo en su interior una cámara fotográfica marca canon Full HD 50x óptica 200 mil color negra.

3. Acta de registro personal de Jorge Brajhant Facho Ramírez, en el que consta *“positivo para estupefaciente, habiéndose encontrado sobre su pierna una mochila color negra con rojo con las inscripciones RIPCURL, en cuyo interior se encontró tres bolsitas plásticas tipo CIPLOP con cierre hermético, cada uno conteniendo en su interior especie vegetal seca con olor y características al parecer cannabis sativa – marihuana; asimismo, un teléfono celular color plateado con negro de la marca con Motorola de la línea claro con IMEI N° 359499040961717 con ship N° 8951100520055429957F.0S con su respectiva batería en regular estado de funcionamiento”*.
4. Acta de registro personal de Cesar Augusto Bocanegra Fernández, en el que consta *“positivo para otras especies, en el bolsillo de su pantalón color azul se encontró un teléfono celular color negro marca LG con IMEI N° 354462-05-733150-0 con ship N° 8951100429061593758F de la línea CLARO con su respectiva batería en regular estado de funcionamiento”*.
5. Acta de registro personal de Jihm Kelly Huanca Elías, en el que consta *“positivo para estupefaciente, habiéndose encontrado sobre su pierna una bolsa chequera color negra abierta en un extremo libre conteniendo en su interior tres paquetes en forma alargada hechos con cinta industrial FIL transparente conteniendo en su interior restos de especies vegetal seca, con olor y características a cannabis sativa -marihuana”*.
6. Acta de registro personal de Nayla Violeta Rivera Chiroque, en el que consta *“positivo para*

otras especies, se le encontró en la mano derecha un celular marca IPHONE, color palo rosa/blanco, con IMEI N° 355767074076311, con N° de abonado 923251623, con su respectivo chip ENTEL N° 89511710100154802150, en la mano izquierda, se le encontró una cartera de cuerina color palo rosa, conteniendo en el interior una cámara fotográfica marca canon full HD 50 x optical 200 m, color negra, con memoria Kingston de 32 GB, SDHC, un cargador de batería color plomo marca canon conteniendo una batería battery pack for canon NB-GL, en este acto se procede a la incautación de las especies antes descritas”.

7. Acta de registro personal de German Alesandro Yupanqui Parodi, en el que consta “positivo para otras especies, en el bolsillo izquierda de la parte delantera de su SMART color negro, marca OWN – ENTE, modelo OWN SMART Vawe serie N° 201606107016 con IMEI N° 861635030125224, chip entel N° 89511710100136753273, memoria micro SD – KINGSTON 8 GB, con su respectiva batería y en el bolsillo derecho de la parte posterior se encontró una billetera de cuero color negro, conteniendo dos tarjetas BCP credimas visa debito con serie N° 4557850809973609 y 4551880809860152”.
8. Acta de registro personal de Jhon Córdova Merino, en el que consta “positivo para otras especies, se encontró en el bolsillo derecho de su buzo color azul un celular marca LOGIC color verde con negro con IMEI N° 353370080720410, IMEI N° 353370080720428, con dos chip uno de ellos movistar y el otro claro serie N° 89510610216418530889002 y N° 8951101639002162062F respectivamente. También se le encontró en el bolsillo izquierdo de su brazo se le encontró tres billetes de veinte soles serie N° A2649090U, B4424587Q, B1700752N, dos billetes de diez soles series N° B3434155W, B0476953V, dos monedas de cinco soles, una moneda de dos soles, cuatro monedas de un sol, una moneda de veinte céntimos y una moneda de diez céntimos (...)”.
9. Acta de registro domiciliario, comiso de droga e incautación, en el inmueble ubicado en la calle Los Higuerones N° 180 PJ San Miguel -Chiclayo, en el que consta que “el intervenido Facho Ramírez Jorge Brajhant, indicó voluntariamente que en el inmueble donde se encuentra aloja tenía más droga, llegando al lugar antes mencionado donde se aprecia un inmueble de material rústico (adobe) lucida con yeso, de color rosado, techo de Eternit, con puerta contraplacada de madera color marrón y al tocar la puerta se encuentra a la persona de Jhon Oliver Córdova

Merino, quien permitió el ingreso al domicilio refiriendo que le ha dado alojamiento a la persona Facho Ramírez Jorge Brajhant desde hace una semana, procediendo al registro con el siguiente detalle: se aprecia un ambiente utilizado como sala comedor al lado izquierdo de la puerta de ingreso sobre una banca de madera se encontró una bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina, reconociendo el intervenido Facho Ramírez Jorge Brajhant ser suyas y entre ellas se encontró un paquete en forma alargada hecho con cinta industrial film conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer cannabis sativa – marihuana sobre una mesa de madera se encontró una bolsa plástica color blanca tipo chequera conteniendo en su interior trece bolsitas plásticas transparentes tipo ziplock cada una conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer cannabis sativa – marihuana; asimismo, se encontró una bolsa plástica transparente conteniendo semillas al parecer de cannabis sativa – marihuana; asimismo se encontró una pipa, nueve bolsitas plásticas transparentes tipo ziplock vacías, encontrando en un ambiente contiguo a las personas de Luigui Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi y Nayla Violeta Rivera Chiroque, quienes al parecer se encontraban bajo los efectos de haber consumido cannabis sativa – marihuana, encontrados tres ambientes en la parte posterior del inmueble, en donde no se encontró evidencias relacionados con el TID”.

10. Acta de registro de incautación de vehículo, de placa de rodaje N° C7E-306, vehículo en el cual se trasladaban los imputados Cesar Bocanegra Fernández, Jhim Huanca Elías y Jorge Facho Ramírez.
11. Análisis de descarte y pesaje N° 33/2017, según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jhim Kelly Huanca Elías, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 390 gramos.
12. Análisis de descarte y pesaje N° 034/2017, según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro en el domicilio ubicado en la calle Los Higueros N° 180 – PJ San Miguel – Chiclayo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 171.436 gramos (sumados las muestras M1 y M2) y 12.083 gramos (doce gramos con veintitrés miligramos de semillas de cannabis sativa - marihuana).

13. Análisis de descarte y pesaje N° 248/2017, según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jorge Brajhant Facho Ramírez, se obtuvo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, con un peso bruto de (08.566 gramos).

14. Lectura de memoria de los celulares incautados, como consecuencia de ello, se llegó a establecer los propietarios de los teléfonos incautados el día de la intervención:

- Del investigado Jorge Facho Ramírez número de abonado 974807848, tiene como contactos a Nayla con el número 923251623, Mamani con el número 958503116 (Córdova Merino) y primow con el número 948352531.

- Del procesado Córdova Merino, número de abonado 958503116 y 962770408, registra como contactos a Facho con el número 974807848, Nayla con el número 923251623, a mero (Yupanqui Parodi) con el número 934129216, los días 13, 14 y 16 de abril de 2017 llamadas de Nayla. Registra mensajes enviados a Facho, el día 02 de abril de 2017 a las 11:40 horas "estoy donde Mamani, vienes?". A Nayla, el día 01 de abril de 2017 a horas 01:12 "estamos afuera lanzando".

- Del investigado Germán Yupanqui Parodi número de abonado 934129216, registra llamadas salientes al número 974807848 (Facho) el día 07 de abril de 2017, así como al número 962770408 (Córdova Merino) los días 08, 10, 11 y 13 de abril de 2017.

- Nayla Rivera Chiroque número de abonado 923251623, tiene como contactos a Facho con el número 974807848, con quien registra llamadas los días 16 y 18 de abril.

- César Augusto Bocanegra Fernández número de abonado "desconocido".

15. Declaración de Luigui Alexander Aguado Tello, quien refiere, entre otros, "(...) *domicilia en calle Los Higueros 180, Pueblo Joven San Miguel - Chiclayo, donde vive desde el mes de enero de 2017 en compañía de Jhon Córdova Merino y Jorge Facho Ramírez, Yupanqui Parodi llega a la casa de vez en cuando Facho está viviendo en la casa desde hace un mes; se encontraba presente al momento de la intervención; una vez he consumido marihuana dentro de*

la casa donde vivo actualmente, en compañía de mi primo Jhon CORDOVA MERINO, quien me dio la marihuana para fumar fue "FACHO", eso fue hace tres o cuatro días antes de la intervención, lo tenía hecho el porro en un envoltorio tipo "Rilax", FACHO estaba fumando también(...)"

16. Declaración de Germán Alejandro Yupanqui Parodi, niega los cargos que se le incrimina, , quien refiere, entre otros, *"(...) Vive en la ciudad de Lima, está en Chiclayo desde Semana Santa (14 de abril), para pasarla con su novia, no tiene sueldo fijo, su novia lo apoyaba en la alimentación y casa, a Facho lo conoce el día de la intervención, a Córdova lo conoce en dos días, el 15 y 18 de abril a través de un amigo de la universidad del Señor de Sipán, al investigado Luigui Aguado Tello lo conoce el sábado 15 de abril, no vive en el lugar de la intervención, vive en la casa de su novia en calle Libertad N° 515- Urb. Santa Victoria - Chiclayo, pero no sabe el color de la fachada de dicha vivienda, si consume marihuana, desde hace 3 años aproximadamente, el sábado 15 de abril del 2017 ha consumido marihuana por primera y única vez en Chiclayo, en compañía de los muchachos en la casa intervenida por la policía (...)"*

17. Declaración de Jhon Oliver Córdova Merino , quien refiere, entre otros, *"(...) conoce a Facho desde este año, Luigui Aguado Tello es su primo a Yupanqui Parodi lo conoce desde el 15 de abril, llegó con un amigo de la universidad, a Nayla la conoce hace dos semana por Facho en su casa, no es su amigo, solo es conocida. Facho no vive en su casa, llega a la nueve y se va a las cuatro de tarde, algunas noches duerme allí; llegó a ver cuando Facho trajo el paquete de marihuana, también le encargó las bolsitas que tenían marihuana; Nayla le había dicho antes que tenía una cámara mal para arreglar (...)"*

18. Declaración de César Augusto Bocanegra Fernández, quien refiere, entre otros, *"(...) es taxista desde el año 2011, su horario de trabajo es de 08:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas; con relación a los hechos ha Indicado que una persona que le tomó una carrera esto a la altura de las calle Juan Pablo y Teatro de las Urb. Las Brisas de Chiclayo, me dice llévame a la calle Zarumilla y Ñapo, al llegar al lugar me dice espérame unos minutos para que le haga otra carrera al centro, ante ello apago el motor de mi carro, y me he puesto a leer mi periódico, es*

en esos instantes en que viene una persona que era manquito que le faltaba un brazo y sube en el asiento delantero de copiloto, en eso le reclamo al que me tomó la carrera diciéndole que mejor me pague, en eso vino sorpresivamente la policía y nos intervino, a mi en el registro me encontró un teléfono celular nada más, al copiloto que era discapacitado de un brazo le encontraron una mochila no se que contenía dentro la mochila, en la parte posterior estaba quien me tomó la carrera a él no se que le encontraron, hasta que pude escuchar en su registro que le habían encontrado una bolsa con marihuana, (...) manifiesta que no percibió el olor a marihuana, (...) luego nos condujeron hasta una casa ubicada por San Miguel , entre Zarumilla y Pacifico, donde nos hicieron pasar (...) dentro del domicilio habían cuatro o cinco personas dentro de ellos había una mujer joven. En el registro domiciliario al final he podido ver que habían encontrado marihuana, no sé donde lo encontraron, no sé de quién era la marihuana, pero al final la persona discapacitada del brazo dijo que era de su propiedad (...)"

19. Declaración de Nayla Violeta Rivera Chiroque, quien refiere, entre otros, "(...) de los intervenidos solo conoce a Facho quien es su amigo y solamente la pretende, Córdova Merino es solo un conocido, yo no estado en la intervención, yo he llegado cuando han estado en medio de la intervención, vino del gimnasio a donde fue pero al no encontrar casillero para guardar su cámara decidió ir a ver al técnico para que repare su cámara, en el gimnasio nadie se percató de su presencia, no efectuó ninguna coordinación previa con Córdova Merino para que éste arregle la cámara, cuando llegó al inmueble intervenido fue para buscar a Jhon Córdova Merino, me hicieron pasar a la casa para indicar quien me iba a reparar la cámara, he pasado y he señalado a Jhon Córdova(...)".

20. Manifestación de Jorge Brajhant Facho Ramírez, quien refiere, entre otros, "(...) este año no estudia, trabaja como mesero de reten eventualmente; conoce a Huanca Elías hace seis semanas porque era la persona que le vendía la marihuana que le encontraron; (...) a Córdova lo conoce porque ha estudiado en la misma universidad, (...) han fumado marihuana incluso en la casa intervenida; a Nayla la conoce hace un mes, es su enamorada. (...) La policía encontró sobre las piernas de Huanca tres envoltorios con marihuana, es el único que lo abastece desde hace dos meses, Huanca lo ha llamado para venderle marihuana, lo tiene agregado como Primo W; un día antes de la intervención lo ha llamado para ofrecerle marihuana".

21. Manifestación de Jihm Kelly Huanca Elías, quien refiere, entre otros, "(...) solo conoce a Facho hace mes y medio en el parque frío, donde han fumado marihuana, lo ha visto cuatro veces, han "lanzado" (fumar marihuana), Facho le vendió marihuana en una oportunidad; del día de los hechos salí de mi casa a las 11:30 de la mañana aproximadamente, tomando un taxi de la calle Juan Pablo y Teatro, sentándome en la parte de atrás del lado del copiloto solicitándole al conductor que me lleve a la Urb. Satélite, a la calle Ñapo, porque tenía conocimiento que en ese parque venden marihuana a esa hora de la mañana y quería comprar una bolsita de marihuana..Cuando el vehículo llega a la Urb. Satélite por la calle Ñapo, le dije al conductor que se detenga porque visualicé a la persona que le iba a comprar la marihuana, mi co detenido Jorge Brajhant Facho Ramírez, por lo que le silbé desde el carro, él voltea, le levanto la mano haciéndole una señal para que venga y le digo: "causita acércate", él se acerca al carro, le dije: "causita quiero sacar una bolsita de grifa, él abre la puerta del copiloto, sube con una mochila negra, se sienta y en el momento que íbamos a entablar conversación para la compra venta de marihuana, se da la intervención policial; un policía coge una bolsa negra que se encontraba en piso del carro al costado de su pie izquierdo...".

22. Acta de verificación domiciliaria, donde se deja constancia de las tomas fotográficas del inmueble intervenido.

23. Examen toxicológico N° 266-272/2017, en el que se concluye que las personas examinadas Jihm Kelly Huanca Elías, Jorge Brajhant Facho Ramírez, Jhon Oliver Córdova Merino, Luigui Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, dieron resultado positivo para marihuana en la orina negativo en el sarro ungueal. Asimismo, refiere que las personas examinadas Cesar Augusto Bocanegra Fernández y Nayla Violeta Rivera Chiroque, dieron resultado negativo para drogas en la orina y en el sarro ungueal.

24. Oficio N° 7528-2017-RDC-CSJLA/PJ de fecha 25 de abril del 2017 suscrito por la Coordinadora de Registros Judiciales de Lambayeque, mediante el cual se informa que **Yupanqui Parodi Germán Alejandro**, registra antecedentes penales a nivel nacional por el delito de micro comercialización.

25. Declaración del efectivo policial Jorge Pinegro Cruzado, quien refiere, entre otros, "(...) trabaja en actos de inteligencia y por información propias de mi función se había tenido conocimiento que dos personas una de ellas con discapacidad en el antebrazo izquierdo y otro de ellos era una persona que trabajaba repartiendo gas, vendían droga y que esta droga era comercializada a estudiantes de diversas universidades de Chiclayo y ambos compartían el mismo domicilio (...) ha sido testigo que momentos antes de la intervención varias personas jóvenes con aspectos de ser estudiantes llegaban y eran atendidos por una ventana que tiene el domicilio (intervenido); observa cómo es que Facho sale del inmueble ubicado en calle Los Higueros N° 180, Pueblo Joven San Miguel -Chiclayo para darle el encuentro a Huanca y aborde el automóvil que conducía Augusto Bocanegra, llegando a percatarse al momento de la intervención que Huanca tenía tres paquetes envueltos y por el olor y características se trataba de marihuana; en ese momento Huanca estaba nervioso y dijo que no era su droga; (...) a Facho se le encontró tres bolsitas de marihuana y en forma muy nerviosa dijo que en su casa había más droga a donde condujo a la policía, al llegar fueron atendidos por Córdova Merino, al ingresar se percató de la presencia de el resto de co investigados incluso Nayla, quien le informó que su presencia en el lugar se debía a que había llegado a visitar a su enamorado Facho; (...) Facho dijo que vivía en la casa, Córdova indicó que estaba a cargo de la casa, Yupanqui y Aguado mencionaron que también estaban viviendo en dicha casa porque no tenían a donde ir, que la información que recibió de que manco y vendedor vendían droga a estudiantes de diferentes universidades de Chiclayo; la marihuana encontrada a Huanca tiene la misma forma alargada y similar empaque con cinta industrial FIL que el paquete que fue encontrado en el registro domiciliario; las bolsitas ziploc que fueron encontrados a Facho tienen las mismas características que las que fueron encontradas en el registro domiciliario.; Yupanqui y Aguado le dijeron que eran consumidores al momento de la intervención (...)"

26. Declaración del efectivo policial Luisa Juárez Olazabal, quien refiere, entre otros, "(...) a Facho se le encontró sobre sus piernas una mochila y dentro de ella se encontró bolsitas tipo ziploc y al interior de estas se halló hierba cannabis sativa - marihuana (...) posteriormente uno de los Intervenidos de apellido Facho, indicó que en su casa tenía más droga y nos condujo a la calle Los Higueros N° 180 - San Miguel, se tocó la puerta y fuimos atendidos por Córdova quien

indicó ser el dueño de la casa, nos identificamos y le preguntamos por el intervenido Facho y nos respondió que él le estaba dando alojamiento desde hace un mes en dicho domicilio, indicando que se realizaría el registro domiciliario, ingresando a la mano izquierda, se encontraba una banca de madera y sobre ella había una bolsa plástica, Facho indicó que era de su propiedad y sobre esa ropa se encontró cannabis sativa - marihuana y a la mano derecha había una mesa del cual se encontró marihuana y semillas de marihuana, además de una pipa, 09 bolsitas plásticas tipo ziploc pero vacías, luego en un ambiente contiguo se encontraron tres personas dos de sexo masculino y una persona de sexo femenino (Nayla Rivera)".

6.3) La juzgadora, luego de escuchar al fiscal y a la defensa de cada uno de los procesados, analizando los elementos de convicción concluye que los hechos así descritos por el Ministerio Público éstos se subsumirían en el artículo primer párrafo del artículo del 296, concordante con el artículo inciso 6) del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal así como por la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos que se les atribuyen, conforme paso a detallar a continuación. Sin dejar de resaltar que respecto a la calificación jurídica se tiene que al encontrarnos en una audiencia de prisión preventiva, no puede exigirse una calificación absolutamente correcta, sino racionalmente aproximativa al tipo legal referido:

i) Respecto a Cesar Augusto Bocanegra Fernández, a quien la fiscalía le atribuye ser la persona quien trasladaría vehículo a su co procesado Jihm Kelly Huanca Elías, con la finalidad de transportar la droga y entregarla a su co procesado Facho Ramírez, para luego éste la lleve hasta el inmueble intervenido; siendo así, la juzgadora verifica la existencia de elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del ilícito penal, como son: el acta de intervención policial en el que consta que el referido imputado, es quien conducía el vehículo de placa de rodaje C7E-306, siendo intervenido conjuntamente con sus co imputados Jihm Kelly Huanca Elías y Jorge Brajhant Facho Ramírez, habiéndose precisado en el acta de intervención que la persona de Huanca Elías Jihm Kelly, quien estaba en el asiento posterior detrás del conductor, se le encontró sobre sus piernas, una bolsa chequera color negra abierta en su extremo libre conteniendo en su interior tres paquetes de forma alargada hechos con cinta industrial "FIL" transparente, conteniendo en su interior restos de especies vegetal seca, con olor y características a cannabis sativa -marihuana; asimismo a la persona de Facho Ramírez Jorge Brajhant, conocido como "manco" el mismo que presentaba discapacidad física (sin antebrazo izquierdo) a

efectuarse su registro personal, se le encontró sobre sus piernas una mochila con la inscripción RIP CURL en cuyo interior se encontró tres bolsitas plástica tipo ziploc con cierre hermético cada uno conteniendo en su interior especie vegetal seca con olor y características al parecer Cannabis Sativa - marihuana, Un teléfono celular color plateado con negro marca Motorola "Claro" con IMEI, con chip; corroborado con el registro personal de de Jihm Kelly Huanca Elías y Jorge Brajhant Facho Ramírez donde se deja constancia de la droga encontrada en los citados procesados; sumado a ello, la declaración de los efectivos policiales Jorge Pinegro Cruzado y Luisa Juárez Olazábal quienes han declarado del seguimiento a Facho Ramírez así como de la intervención a sus co imputados, además de indicar que tanto a Facho Ramírez y Huancas Elías se les encontró en posesión de bolsitas de marihuana. Si bien la defensa, indica que la participación de su patrocinado sería la de conductor del vehículo y que ese día brindó el servicio de taxi; sin embargo, se debe indicar que efectivamente en la declaración del citado imputado, refiere entre otros, que ese día encontró una persona que le tomó una carrera hacia a las calles Juan Pablo y nao, pero que le dice que lo espere unos minutos, por lo que apague su carro. Asimismo, señala en la pregunta 13) de su declaración, que su horario de trabajo es de 8:00 a.m. a 03:00 p.m.. Sin embargo, al caso, se debe considerar, conforme al acta de registro personal que dio negativo para dinero, lo que significaría que pese a encontrarse según él, laborando desde las ocho de la mañana hasta las doce del medio día que se produjo la intervención no tenía suma de dinero alguna; aunado a ello, que la persona que le tomó la carrera (HUANCAS ELIAS), tampoco tenía dinero para pagar la carrera, conforme al acta de registro personal e intervención. Agregado a ello, que tampoco ha podido probar que tenga la actividad de taxista, puesto que ni siquiera cuenta con licencia de conducir, permiso para ejercer tal actividad (taxista) ni menos que se encuentre afiliado a alguna asociación; máxime si se considera además que la droga se encontraba a exposición de los ocupantes así como el olor de la misma, conforme a las pre constituidas y declaración de los efectivos policiales intervinientes Jorge Pinegro Cruzado y Luisa Juárez Olazábal. Sumado a ello, las pericias (Análisis de descarte y pesaje), según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jhim Kelly Huanca Elías, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 390 gramos. Así como del descarte y pesaje N° 034/2017, como consecuencia del registro en el domicilio ubicado en la calle Los Higueros N° 180 – PJ San Miguel – Chiclayo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 171.436 gramos (sumados las muestras M1 y M2) y 12.083 gramos (doce gramos con veintitrés miligramos de semillas de cannabis sativa - marihuana). Análisis de descarte y pesaje N° 248/2017, según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de

Jorge Brajhant Facho Ramírez, se obtuvo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, con un peso bruto de 08.566 gramos.

ii) Referente al procesado Jihm Kelly Huanca Elías, se advierte que existen elementos de convicción contundentes que lo vinculan con el hecho imputado como son: el acta de intervención, registro personal en la que se precisa que el investigado conjuntamente con dos personas, fueron intervenidos y encontrados en posesión de la droga cannabis sativa - marihuana. Si bien la defensa técnica argumenta que su patrocinado es consumidor, siendo la razón por la que se subió al taxi de Cesar Augusto Bocanegra Fernández, a fin de que le realice una carrera, para encontrarse con Jorge Brajhant Facho Rodríguez, quien sería el vendedor y así conseguir droga. Sin embargo esta versión no resulta de recibo porque del registro personal del procesado y sus co investigados intervenidos, se verificó que ninguno de ellos contaban con dinero ya sea para pagar una carrera de taxi o comprar droga. Además, se corroboraría la vinculación del imputado con los hechos investigados con la propia declaración de su co procesado Jorge Brajhant Facho Ramírez, quien señaló al responder a la pregunta 3), que: “ (...) a Jihm Kelly Huanca Elías si lo conozco desde hace seis semanas atrás porque él era el que me vendía o abastecía de la droga que me encontraron (...)”, asimismo, la declaración del efectivo policial Luisa Juárez Olazábal, quien en la pregunta número 4) “ tres personas de apellido Huanca, Facho y el conductor fueron intervenidos en las intersecciones de la Av. Zarumilla y Napo en el interior de un vehículo color azul , a Huanca en el registro que le hizo el efectivo policial Nuñez , le encontró sobre sus piernas una bolsa plástica conteniendo tres envoltorios alargadas los cuales contenían cannabis sativa – marihuana (...)”. además de la declaración del efectivo policial interviniente Pinegro Cruzado, éste indica que Elías Huancas tenía en su poder una bolsa **CHEQUERA COLOR NEGRA ABIERTA EN SU EXTREMO LIBRE CONTENIENDO EN SU INTERIOR TRES PAQUETES DE FORMA ALARGADA HECHAS CON CINTA FIL TRANSPARANTE CONTENIENDO** en su interior restos de especies vegetal seca, con olor y características al parecer Cannabis Sativa .- Marihuana. Sin dejar de resaltar el hecho que **la droga encontrada en el interior del inmueble intervenido presentaba la misma forma y característica de los envoltorios conteniendo en su interior droga encontradas en posesión de Huancas Elías.** Sumado a ello, las pericias (Análisis de descarte y pesaje) según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jhim Kelly Huanca Elías, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 390 gramos. Así como del descarte y pesaje N° 034/2017, como consecuencia del registro en el domicilio ubicado en la calle Los

Higuerones N° 180 – PJ San Miguel – Chiclayo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 171.436 gramos (sumados las muestras M1 y M2) y 12.083 gramos (doce gramos con veintitrés miligramos de semillas de cannabis sativa - marihuana)., Análisis de descarte y pesaje N° 248/2017, según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jorge Brajhant Facho Ramírez, se obtuvo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, con un peso bruto de (08.566 gramos).

iii) En lo concerniente al procesado **Jorge Brajhant Facho Ramírez**, también existen elementos de convicción graves como son: el acta de intervención policial, donde consta que fue intervenido conjuntamente con sus co imputado Huancas Elías en posesión de droga (cannabis sativa), así como su co imputado Augusto Bocanegra quien conducía el vehículo azul de placa de rodaje C7E-306, se les encontró con droga lo que se corrobora con los registros personales realizados a los citados procesados, quien además en forma voluntaria conduce a los efectivos policiales hacia su domicilio ubicado en calle Los Higueros N° 180 – PPJJ – San Miguel – Chiclayo, indicando que la droga hallada en el inmueble también le pertenece; lo cual coincide con las declaraciones de los efectivos policiales Luisa Juárez Olazábal, quien ante la pregunta 4), responde que: “ *tres personas de apellido Huanca, Facho y el conductor fueron intervenidos en las intersecciones de la Av. Zarumilla y Napo en el interior de un vehículo color azul (...) a Facho se le encontró sobre sus piernas una mochila y dentro de ella se encontró bolsitas tipo ziploc y al interior de estas se halló hierba cannabis sativa (...)*”; y el Jorge Pinegro Cruzado, en la pregunta número 4) precisa, que “*(...) Facho indica querer colaborar es ahí donde indicó que en su domicilio tenía más marihuana (...)*”; asimismo, su co imputado Jihm Kelly Huanca Elías, ante la pregunta número 4), refiere que “*(...) le dije al conductor que se detenga porque visualicé a la persona que le iba a comprar la marihuana y era mi co detenido Jorge Brajhant Facho Ramírez, (...)*”. Sin dejar de señalar que el investigado Facho Ramírez tanto en el acta de intervención policial como en su propia declaración admite incluso que la bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina y entre ellas se encontró un paquete en forma alargada FIL conteniendo cannabis sativa ser de su propiedad. Asimismo, si bien el imputado Facho Ramírez señala que el día de los hechos se encontraba con Huancas Elías porque le iba a comprar droga, sin embargo, del registro personal también dio negativo para dinero. También, de la revisión de la visualización de lectura de teléfono celular de **Jorge Brajhant Facho Ramírez**, tiene número celular **974807848**, verificándose que ha registrado como contactos y ha mantenido comunicación con: **Jhon Oliver Córdova Merino** quien

aparece como Mamani con el número de celular **958503116**, así como con **primo W** con número celular **948352531** que correspondería a **Huanca Elías** conforme la declaración de Facho Ramírez; y con **German Alejandro Yuanqui Parodi**, conforme acta de visualización de lectura del teléfono celular con número **934129216**.

iii) **Respecto al imputado Jhon Oliver Córdova Merino**, se advierte la existencia de graves y fundados elementos de convicción, como son el acta de intervención, acta de registro domiciliario y comiso de droga e incautación y de la propia declaración del investigado, quien manifiesta encontrarse a cargo del bien inmueble intervenido ubicado en al momento de ingresar al inmueble ubicado en calle Los Higueros N° 180 – PPJJ – San Miguel – Chiclayo, en cuyo interior se encontró la droga ya detallada, precisándose que en un ambiente destinado como sala - comedor al lado izquierdo de la puerta de ingreso sobre una banca de madera se encontró una bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina, que si Jorge Brajhant Facho Ramírez reconoce como suya, entre ellas se encontró **un paquete en forma alargada hecho con cinta industrial FIL conteniendo en su interior restos secos de especies de vegetal al parecer cannabis sativa – marihuana**, pero en otra mesa de madera se encontró una bolsa plástica color blanca tipo chequera conteniendo en su interior trece bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc cada una conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal **al parecer cannabis sativa – marihuana**, asimismo se encontró una bolsa plástica transparente conteniendo semillas **al parecer cannabis sativa – marihuana**, una pipa y nueve bolsitas plásticas transparentes ziploc vacías, siendo así se advierte que la cannabis sativa – marihuana se encontraba a la vista del co procesado Jhon Oliver Córdova Merino; además, se cuenta con las declaraciones de los efectivos policiales en el que se precisa las forma y circunstancia de como ingresaron a la vivienda, cómo y donde encontraron la droga. Sumado a ello, las pericias (Análisis de descarte y pesaje) según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jhim Kelly Huanca Elías, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 390 gramos. Así como del descarte y pesaje N° 034/2017, como consecuencia del registro en el domicilio ubicado en la calle Los Higueros N° 180 – PJ San Miguel – Chiclayo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa – marihuana con un peso bruto total de 171.436 gramos (sumados las muestras M1 y M2) y 12.083 gramos de cannabis sativa - marihuana. Análisis de descarte y pesaje N° 248/2017, según el cual la droga encontrada como consecuencia del registro personal de Jorge Brajhant Facho Ramírez, se obtuvo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, con un peso bruto de 08.566 gramos.

- Ahora bien respecto a que su defensa técnica refiere que no se ha verificado que exista comunicación entre los detenidos, a fin de que el representante del Ministerio Público precise que los hechos imputados se subsume en el artículo 297 inciso 6 del Código Penal. Al respecto, se debe precisar que de la revisión de la visualización de lectura de teléfono celular, se tiene que el citado procesado cuenta con dos números telefónicos **958503116** y **962770408**, verificándose que ha registrado como contactos y ha mantenido comunicación con: Jorge Brajhant Facho Ramírez como Facho con el número de celular **9744807848**, y Germán Alejandro Yupanqui Parodi como mero con el número de celular **934129216**. Además de señalar que la droga encontrada a los imputados Facho Ramírez y Huancas Elías presentan características y forma similar a la droga encontrada en el inmueble del investigado Córdova Merino (intervenido el día de los hechos), conforme a las actas de intervención policial, registro domiciliario y declaración del efectivo Pinegro.

iv) **Respecto del imputado Germán Alejandro Yupanqui Parodi**, también se verifica la existencia de graves y fundados elementos de convicción, contradiciendo lo alegado por su defensa técnica quien refiere que el imputado había llegado a la ciudad de Chiclayo, desde el día 14 de abril del año en curso para pasar el fin de semana con su enamorada, precisando que no conoce y no tiene conexión con los co procesados. Sin embargo, se debe indicar que el imputado fue encontrado en el momento de la intervención, conforme a las pruebas pre constituidas, no pudiendo justificar su presencia en dicho lugar, por el contrario a la pregunta número 3), refiere que *"(...) con referencia a Facho Ramírez Jorge Brajhant, si lo conozco desde el día de la intervención, no me une un vínculo de amistad con la persona de Córdova Merino Jhon Oliver, si lo conozco en dos días que fue el 15 y el 18 de abril del 2017"*, lo que coincidiría con la declaración de Jhon Oliver Córdova Merino, quien en la pregunta número 3) refiere que *"(...) a Yupanqui Parodi Germán lo conozco recién el 15 de abril del 2017 (...)"*; no obstante, del acta de visualización de su teléfono con número celular **934129216**, se verifica que ha registrado como contactos y ha mantenido comunicación con **Jorge Brajhant Facho Ramírez** como Facho, Briant quien tiene el número de celular **9744807848**, con quien se ha comunicado el día **07 de abril del año en curso** a hora 08:47 p.m.; asimismo se advierte que con su co detenido Jhon Oliver Córdova Merino, quien cuenta con el número de celular **962770408**, ha mantenido comunicación los días 07 de abril a horas 07:25 p.m. y 07:31 p.m., 08 de abril a horas 07:53 a.m. y 08:17 a.m., 10 de abril a horas 11:36 a.m y 04:36 p.m., 11 de abril a horas 08:07 a.m. y 09:27 a.m.; y el 13 de abril del presente

año a horas 09:03 a.m; de ello se colige que el imputado, mantenía comunicación con fecha anterior a la que refieren los co procesados, es más señala conocer a Facho Ramírez el día de la intervención (18 de abril), sin embargo se advierte comunicaciones con fecha anterior (07 de abril); además, de haber indicado que se encontraría en el inmueble intervenido porque estaba volanteando publicidad para la venta de gas, sin embargo, su co imputado refiere Córdova Médina señala que estaba ese día para cocinar el almuerzo y su defensa al momento de su alegación precisó que su patrocinado se encontraba para ver un partido de futbol (champion), advirtiéndose la conexión que han tenido incluso antes del 18 de abril del año en curso. Asimismo que dio positivo para marihuana, muestra practicada en la orina y sarro ungueal de ambos manos, conforme al examen toxicológico 266- 272- 2017. A mayor abundamiento que dicho investigado se encuentra condenado en el expediente N° 10014-2012, por el delito de tráfico ilícito de drogas, con fecha cinco de junio del dos mil catorce a 3 años de pena privativa de libertad suspendida en ejecución por el periodo de prueba de 2 años, 180 días multa. Si bien señala que se encuentra rehabilitado, sin embargo no ha presentado medio probatorio alguno que corrobore su versión, máxime si la condena continúa vigente, no existiendo certeza que el sentenciado haya cumplido con las reglas de conducta impuestas así como la pena de multa, de lo que colige que a la fecha ha sido condenado por similar delito.

Por otro lado, si bien su defensa técnica refiere que su patrocinado solo es consumidor de drogas; sin embargo, se verifica del acta de registro personal que el imputado no contaba con dinero, conforme al registro personal, para comprar la misma.

viii) Respecto a Luigi Alexander Aguado Tello, Se debe considerar el acta de intervención policial, el acta de registro domiciliario así como las declaraciones de los efectivos policiales. En ese sentido, se tiene que su propia declaración - la pregunta 3) refiere que vive desde fines de enero en el inmueble intervenido, ubicado en al momento de ingresar al inmueble ubicado en calle Los Higueros N° 180 – PPJJ – San Miguel – Chiclayo, en cuyo interior se encontró la droga antes detallada, precisándose que en un ambiente destinado como sala - comedor al lado izquierdo de la puerta de ingreso sobre una banca de madera se encontró una bolsa plástica negra conteniendo prendas de vestir masculina, que si Jorge Brajhant Facho Ramírez reconoce como suya, entre ellas se encontró un paquete en forma alargada hecho con cinta industrial FIL conteniendo en su interior restos secos de especies de vegetal al parecer cannabis sativa – marihuana, pero en otra mesa de madera se encontró una bolsa plástica color blanca

tipo chequera conteniendo en su interior trece bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc cada una conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer cannabis sativa – marihuana, asimismo se encontró una bolsa plástica transparente conteniendo semillas al parecer cannabis sativa – marihuana, una pipa y nueve bolsitas plásticas transparentes ziploc vacías, siendo así se advierte que la cannabis sativa – marihuana se encontraba a la vista del co procesado Jhon Oliver Córdova Merino; además, se cuenta con las declaraciones de los efectivos policiales en el que se precisa las forma y circunstancia de como ingresaron a la vivienda, cómo y donde encontraron la droga, en donde se encontraba droga a la vista y exposición de todos los que la habitan. Agrega a ello, el Informe Policial así como la declaración de los efectivos policiales Jorge Pinegro Cruzado que ha sido testigo que varias personas jóvenes con aspecto de ser estudiantes llegaban y eran atendidos por una ventana que tiene el domicilio. Asimismo que dio **positivo para marihuana, muestra practica en la orina y sarro ungueal de ambos manos, conforme al examen toxicológico 266- 272- 2017.**

-La defensa también cuestiona la videovigilancia, indicando que la misma se iba a realizar con una cámara digital. Sin embargo, señala el citado efectivo policial que no existe el video debido a que el testigo se encontraba en un lugar visible por parte de los vecinos y se cubría bastante de no ser advertidos por las personas que estaban vendiendo droga (ver respuesta a la pregunta 17)

De todo lo expuesto, esta judicatura concluye que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados mencionados con los hechos que se les atribuyen; asimismo, a criterio de la juzgadora también se presentarían los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el artículo 297 inciso 6) del Código Penal, es así que conforme lo establecido en el Acuerdo P01enarío 3-2005/CJ-116, se establece que el objeto del artículo antes referido, es sancionar con severidad a quienes participan en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, en tanto integran un conjunto de tres o más personas, en ese sentido, considerando las pruebas pre constituidas (acta de intervención, registro domiciliaria, comiso de droga, registro vehicular, las pericias, declaraciones de los investigados, de los efectivos policiales intervinientes, visualización de lectura de teléfono que los co imputados habrían tenido comunicaciones entre ellos, si bien tratan de desvincularse sin embargo considera la juzgadora que se trata de argumentos de defensa; asimismo, si bien a Huancas Elías y Bocanegra Fernández no se le encontró celular al primero y al segundo un celular inoperativo al momento de la intervención. Sin embargo, ello de por sí, no puede ser argumento para desvirtuar la imputación fiscal, pues se toma en

cuenta ya los elementos indicados, y sobre todo, se debe precisar que la forma del envoltorio que contenía la droga y que se le encontró a Huancas Elías tenía las mismas características en su forma alargada, peso casi similar, paquete que corresponde a cinta industrial FIL y el producto el mismo (restos de especie vegetales marihuana), a la droga encontrada al momento de la intervención en el inmueble así como bolsitas plásticas transparentes tipo ziploc conteniendo en su interior restos secos de especie vegetal al parecer cannabis sativa – marihuana, encontradas en poder de Facho Ramírez con las encontradas en el inmueble, lo que evidenciaría que las actividades que habrían desarrollado implican un despliegue organizacional con el objeto de tráfico de droga que no puede merecer un tratamiento parcial, sino global.

SÉPTIMO: Es necesario también absolver los cuestionamientos referidos por las defensas técnicas de los imputados, quienes han cuestionando la videovigilancia, alegando que no se ha cumplido con filmar ni con las formalidades así como la validez del acta intervención dado que no se consignó en su texto los nombres de los policías intervinientes. Al respecto, se debe precisar que el efectivo policial Penigro Cruzado indicó que efectivamente no se ha realizado las grabaciones dado que él se encontraba en un lugar visible a los vecinos, por lo que se cubría para no ser advertido por las personas que estaban vendiendo droga, la distancia era de treinta a cuarenta metros (ver pregunta 16). De otro lado, respecto a las actas se debe citar el artículo 121 inciso 1) del Código Procesal Penal, que prescribe “El acta carecerá de eficacia sólo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal, o si faltare la firma del funcionario que la ha redactado”; en ese sentido, se tiene de la revisión de la acta cuestionada que sí aparecen en la última parte de la acta los nombres de los intervinientes, señalando que se ha concluido a las 15:10 horas del mismo día, suscribiendo a continuación el personal de la PNP intervinientes: SOT1 PNP Jorge Pinegro Cruzado, SOT1 PNP Juan Morales León, SOT1 Luisa Juárez Olazábal, SO” PNP José Vásquez, S3 PNP Richard Rimarachin Tocto, SO3 Giancarlo Núñez Chaname Giancarlo, SO2 PNP Mergón Fernández Torres y alférez PNP Jhonatan Guevara Saavedra. Sumado a ello, que los efectivos policiales han intervenido en flagrancia delictiva, conforme a los actuados ya mencionados. Asimismo, se cuestiona el actuar de los efectivos policiales intervinientes, sin presentar medio probatorio alguno, por ello, considera la juzgadora que la buena fe de los funcionarios se presume y la mala fe en su actuación debe ser demostrada, situación que no se ha presentado por ahora en autos.

OCTAVO: Ahora bien, respecto a la investigada **Nayla Violeta Rivera Chiroque**, la juzgadora considera que si bien es cierto se habría encontrado en el lugar de los hechos (domicilio intervenido) al momento de la intervención, sin embargo, conforme a los elementos de convicción ya detallados éstos no resultan suficientes y graves como para dictar una prisión preventiva, puesto que la misma Acta de intervención N° s/n-2017-REGPOL-LAM/DIVICAJ-DEPANDRO.PNP.CH, contiene que a la persona de Nayla Violeta Rivera Chiroque, una cartera cuerina color rosa conteniendo en su interior una cámara fotográfica marca canon Full HD 50x óptica 200 mil color negra. Es así que, de su declaración se verifica que la imputada domicilia en dirección distinta al bien inmueble intervenido, esto es, en la calle Minavir 262-Urb. San Isidro-Chiclayo, corroborado con otros documentos precisados en el considerando décimo segundo. Asimismo, ha indicado que el día 18 de abril del año en curso, se encontraba en el inmueble porque llevaba en su bolso una cámara fotográfica para que la arregle, Jhon Oliver Córdova Merino quien es estudiante de ingeniería de sistemas, precisando que también fue a la casa mencionada a visitar a su enamorado (Facho Ramírez). Si bien, conforme el acta de visualización de su teléfono celular se tiene mensaje de Nayla Violeta Rivera Chiroque, con Oliver Córdova Merino, "estamos afuera lanzando", lo que significaría, conforme lo señaló el señor fiscal en audiencia "consumiendo droga", aunado a ello, que en la declaración de Pinegro Cruzado, en la pregunta 17 indica que la persona que **persona que efectuaba la venta de droga en el inmueble a través de la ventana tenía la silueta de varón**. Asimismo, al examen toxicológico concluyó negativo para drogas, esto es, que no ha estado en contacto con la droga a diferencia de sus co procesados **Aguado Tello y Yupanqui Parodi**, quienes **dieron positivo para marihuana**, muestra practica en la orina y sarro ungueal de ambos manos (ver examen toxicológico 266- 272- 2017), por tanto, se concluye que los elementos de convicción que sustentarian la imputación formulada en su contra Nayla Violeta Rivera Chiroque, quien sería conforme a la tesis fiscal, la encargada de empaquetar y comercializar la droga, por ahora no reúne las condiciones de probabilidad suficientes para vincularla con los hechos investigados.

RESPECTO A LA PROGNOSIS DE PENA

NOVENO: Cabe señalar que éste se presenta cuando es posible determinar que la sanción a imponer en el proceso penal sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; en tal sentido se debe afirmar que éste presupuesto no está referido a la pena fijada por la ley para el delito, sino a la pena probable que el juzgador impondrá en su sentencia condenatoria de ser el caso, que supone una prognosis de la pena, lo que implica un acercamiento, un cálculo a esa determinación conforme a los actuados existentes en la

oportunidad en que corresponda dictar la medida y que será la regla de aplicar la prisión preventiva; en el presente caso, se le atribuye a los procesados la comisión del delito Contra la Salud Pública, en su modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, previsto en el artículo 296° del Código Penal que señala. *"El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 4). (...)"*, con la circunstancia agravante del inciso 6 del artículo 297° del mismo cuerpo legal que prescribe: *"La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4), 5) y 8) cuando: (...) 6.-El hecho es cometido por tres o más personas o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. (...)"*. Siendo esto así, se advierte, que en caso probable de una sentencia condenatoria la pena a imponerse, sería superior a cuatro años de pena privativa de libertad y en ninguno de los casos será menos de quince años de pena privativa de la libertad, por lo que la Juzgadora considera superado también el segundo supuesto.

DÉCIMO : PELIGRO DE FUGA:

(10.1) Respecto al imputado **Cesar Augusto Bocanegra Fernández**, refiere que radica en la calle Ecuador N° 1686 – PPJJ Víctor Raúl Haya de la Torre - José Leonardo Ortiz, para ello, presenta el certificado domiciliario N° 61-2017 de fecha tres de mayo del dos mil diecisiete, expedido por el notario público de Chiclayo, César Enrique Delgado Pérez, en el que certifica que la señora Juana Lidia Guimaraes Tamani, y sus menores hijos radican en el citado inmueble; así como la declaración jurada de la conviviente en el que se precisa que domicilian en la dirección referida, desde aproximadamente el año dos mil doce, lo cual difiere de la dirección del domicilio del imputado que se ha consignado en el acta de nacimiento de sus menores hijos: 1) Adriana Yarity Guimaraes, quien nació el treinta de diciembre del dos mil trece, en el que se ha consignado como dirección de la madre calle Ecuador N° 1661 – Víctor Raúl Haya de la Torre – JLO y 2) Krayg Alessandro Bocanegra Guimaraes nació el seis de febrero del dos mil diecisiete, en el que se ha consignado como dirección el de la madre del imputado, sito Urb. Primavera Etapa II Mz. 01 – lote 06 – Ucayali Coronel Portilla Calleria; además la dirección declarada difiere de la que se ha precisado en su ficha RENIEC expedida el trece de junio del dos mil catorce, PJ

Urrunaga I sector calle España – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, de lo que se colige que no existe arraigo domiciliario ni arraigo familiar, al evidenciarse inconsistencia entre lo declarado por el imputado y lo acreditado documentalmente; siendo así no se ha acreditado que el imputado tenga un domicilio fijo o habitual y con domicilio con su familia, por lo que no se puede concluir que se encuentre a cargo de la manutención de los mismos, además tampoco ha acreditado que cuente con bienes o negocio que vinculen de manera permanente en un lugar. Si bien ha indicado trabajar como taxista, sin embargo ni siquiera ha demostrado tal actividad pues no ha acreditado contar con licencia de conducir menos otra documentación que acredite que tiene tal condición y, de ser así, en dicho trabajo el imputado no se encontraría subordinado a un empleador menos un horario y remuneración mensual.

(10.2) De otro lado, el **procesado Jihm Kelly Huanca Elías**, en su declaración precisa que reside en el pasaje el Rosario N° 168 – Urb. Las Brisas – Chiclayo, es así, que con la finalidad de acreditar lo referido, ha presentado la declaración jurada de domicilio de fecha cuatro de mayo del presente año expedido por el notario Público, Domingo Dávila Fernández, en el que consta que el imputado domicilia con María Elías Cepeda (su madre), dirección que coincide con la consignada en la consulta RUC de su madre, que figura como persona natural con negocio, también presenta recibo de electricidad; no obstante, se advierte que la dirección antes referida difiere de lo que se ha consignado como domicilio real del imputado en los siguientes documentos: declaración jurada de convivencia suscrita por Grisell Lidia Cruces Pérez, de fecha dos de mayo del presente año, legalizada ante el notario público Vega Erausouin Antonio, en el que consta que tiene la condición de esposa del imputado, con quien tiene dos hijos, precisando que domicilia en la Mz. Z – 2 lote 6 Urb. Santa Cruz – Callao- Lima, lo cual coincide con la dirección consignada en el documento de identidad del imputado, de su esposa y de sus hijos, así como del acta de nacimiento de sus hijos, de lo que se puede colegir que no tiene un domicilio habitual, además el negocio e inmueble indicado precedentemente pertenecen a su madre, por tanto no se puede concluir que tiene negocio o bienes que lo obliguen a establecerse en esta localidad; a ello debe agregarse que el imputado en audiencia ha referido que se encuentra en Chiclayo por motivo de trabajo, es decir se encuentra de paso en la ciudad, por tanto no acreditaría el arraigo domiciliario, tampoco ha acreditado el familiar, puesto que sí bien señala que se encontraría trabajando en esta ciudad, sin embargo, no ha probado que envíe dinero para la manutención de su familia, solo ha alcanzado a este órgano jurisdiccional, fotografías con su familia cuya data de impresión sería del año dos mil doce. Sobre su arraigo laboral presenta una constancia de trabajo expedida por Jesús Segundo Coronel Calderón, quien

ha indicado que el procesado se encuentra laborando desde el mes de abril del dos mil dieciséis hasta el dieciocho de abril del año en curso, como controlador de la venta y transporte de material de construcción en los vehículos de su empresa, con un horario de 08:00 a.m. hasta las 06:00 p.m., de lunes a sábado, percibiendo como ingreso la suma de mil doscientos soles; adjuntando RUC a fin de verificar la existencia de su empleador, quien aparece como persona natural con negocio; sin embargo, de la revisión de la constancia de trabajo se denota que el imputado ha sido detenido en hora y día laborable, por lo que a la juzgadora no le causa convicción que efectivamente cuente con ese trabajo, máxime que no cuentas boletas de pago, por ende, se advierte un arraigo débil.

(10.3) Con relación al imputado **Jorge Brajhant Facho, Ramírez**, se tiene que en la presente audiencia, ha indicado que domicilia en la Av. Unión N° 129 - Urb. Quiñones – Chiclayo, es así que a fin de acreditar lo referido, presenta los siguientes documentos: certificado de inscripción de ficha RENIEC, recibo de luz girado a nombre de su madre Elizabeth del Pilar Ramírez Santoyo, título de saneamiento de propiedad expedido por el organismo de formalización de la propiedad informal – COFOPRI de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete e inscripción de la sucesión intestada en el que consta que su madre es propietaria del bien inmueble referido, declaración jurada de su madre en el que precisa que domicilia con su hijo, entre otros documentos, advirtiéndose que la dirección que se consigna en los documentos referidos coincide con la brindada en audiencia; sin embargo, del acta de intervención, se precisa que el imputado Jorge Brajhant Facho Ramírez, condujo de forma voluntaria a los efectivos policiales a su casa, luego acepta que la droga encontrada es suya, en el mismo sentido, tenemos la declaración del efectivo policial Jorge Pinegro Cruzado, quien en la pregunta 5), refiere que Jorge Brajhant Facho Ramírez vivía en el domicilio sito en calle los Higueros N° 180-PP.JJ. San Miguel-Chiclayo, lo cual coincide con la declaración de Luigui Alexander Aguado Tello, quien en la pregunta 3), indica que ***“(...) a Facho Ramírez Jorge Brajhant si lo conozco solo vive conmigo”***, esto es en el bien inmueble intervenido, así como la declaración de Jhon Oliver Córdova Merino, en la pregunta 4), señala que ***“(...) solo llega por las mañanas a las 9 de la mañana y se va a las 3 o 4 de la tarde, algunas noches duerme allí”***, por ende, no se puede concluir que tenga un domicilio habitual.

En cuanto a su arraigo laboral, refiere ser estudiante de la escuela de Negocios Internacionales en la Universidad Señor de Sipán, para ello presenta su historial académico en el que precisa que ha venido estudiando desde el dos mil doce hasta el dos mil dieciséis, no obrando documento que acredite que se ha

matriculado este año a fin de continuar con sus estudios universitarios. Asimismo, refiere que trabaja como mozo en el restaurant D'Carlos; sin embargo, no ha probado tal actividad; en conclusión actualmente este procesado no acredita ninguna actividad lícita ni la de estudiante ni la de mozo, por tanto se concluye por la inexistencia de arraigo laboral, domiciliario y familiar.

(10.4) En el caso del imputado **Jhon Oliver Córdova Merino**, el domicilio donde radica no ha sido cuestionado, es así que éste en su declaración a la pregunta número 3), refiere que *"estoy viviendo hace dos años en dicho inmueble, el cual es de mi abuelita, en agosto del año pasado a España y ella me dejó para cuidar su casa (...)"*. Sin embargo, conforme al acta de intervención efectuada por personal policial, se tiene que en dicho inmueble se encontró droga, por ende, se debe calificar la calidad de arraigo, en ese sentido, debemos concluir que el domicilio en que habita se estaría utilizando para cometer actos ilícitos (venta de droga), señala ser estudiante de la escuela de ingeniería de sistemas de la Universidad Señor de Sipán, para ello presenta su historial académico; sin embargo se debe dejar en claro que a la fecha no ha presentado documento alguno que acredite que actualmente venga cursado estudios superiores. Asimismo, refirió tener un negocio de venta de gas, ubicado en su domicilio sito en calle los Higueros N° 180-PP.JJ. San Miguel-Chiclayo, presentando para ello: copia de volantes, copias simples boletas de ventas de adquisición de gas, cuaderno de anotaciones de venta de gas, entre otros documentos; sin embargo, tales documentos de por si no acreditan que efectivamente realice tal actividad, toda vez que no ha presentado licencia o autorización para la venta de gas, boletas de venta de la venta diaria del citado producto; no resultando relevante el cuaderno de anotaciones, para acreditar que cuenta con dicho negocio, tampoco acreditado tener bienes, carga familiar, ni laboral, de tal manera que pueda asegurar su presencia en esta localidad para afrontar el proceso. Por último, cabe precisar que el imputado no cuenta con carga familiar, ni ha acreditado contar con familiar que dependa de él, siendo así no contaría con arraigo familiar ni laboral.

Asimismo, en audiencia pública la defensa técnica del imputado Jhon Oliver Córdova Merino, ha presentado una pericia de parte, con la finalidad de demostrar que resultaría imposible que en la casa intervenida se venda drogas por la ventana, sin embargo, al encontrarnos en una audiencia de medida coercitiva de prisión preventiva no resulta conducente el análisis de la misma, toda vez que el artículo 177 y siguientes del Código Procesal Penal, prescribe las formalidades con las que debe contar una pericia de parte para ser admitida y luego valorada. Dejado sentada la posición que en el presente caso, al

debatirse una medida de prisión preventiva, considera la juzgadora conforme ya lo detallo precedentemente la existencia de suficientes elementos de convicción que vincula a los procesados con el hecho investigado.

(10.5) **Respecto de Germán Alejandro Yupanqui Parodi**, refiere que domicilia en Jr. Pimentel 303-Urb. San Felipe-Comas-Lima, pero que ha llegado a la ciudad de Chiclayo, el 14e de abril del presente año, con la intención de estar con su enamorada, encontrándose hospedado en su domicilio sito en Urb. Santa Victoria – Av. Libertad, quien le brinda alimentos. De ello, se puede colegir que el investigado no tiene un domicilio habitual menos un trabajo conocido lícito y remunerado, menos ha acreditado contar con bienes o negocios de tal manera que lo vinculen y permanezca de forma permanente en un lugar; más aun si ni siquiera ha podido explicar su presencia en el domicilio intervenido donde se encontró droga. Pues su defensa técnica refirió que su patrocinado se encontró en el lugar intervenido porque iba a ver un partido de fútbol; en cambio la declaración de John Oliver Córdova Merino, en la pregunta número 3), refiere que *“a Yupanqui Parodi German lo conozco recién el quince de abril del dos mil diecisiete, llegó con un amigo de la universidad y me lo presentaron y el día de la intervención llegó a mi casa para cocinar el almuerzo (...)”*, y la declaración de Luigi Alexander Aguado Tello, en la pregunta número 3) indica que *“Yupanqui Parodi Germán Alejandro no lo conozco, solo sé que llega a la casa donde estoy viviendo de vez en cuando (...)”*, no logrando acreditar que cuenta arraigo domiciliario debido a que se evidencia inconsistencia entre las declaraciones y su defensa.

Asimismo, se el imputado ha referido laborar en la ciudad de Lima como mototaxista, en la asociación los chasquis también refiere ser asistente de trabajo de animaciones y show infantiles los días sábados por la tarde, habiendo presentado una constancia de trabajo y un contrato. Al respecto, se debe indicar que el contrato no reúne las formalidades mínimas dado que señala que el imputado labora en la Chasquis sin embargo no precisa Ruc, tampoco el vínculo de la persona que suscribe el documento con la empresa, menos se ha acreditado la existencia de la misma ni se ha presentado documento que acredite que la persona que suscribe la constancia de trabajo efectivamente es la representante de la empresa antes referida, ni documento alguno encontrarse afiliado a la asociación; respecto al contrato HALEX Y BRIAS se encuentra totalmente ilegible; aunado a ello, la respuesta a la pregunta número tres de su declaración, precisa que *“(...) conoce a John Oliver Córdova Merino, (...) yo le iba a ayudar a volantear propaganda de venta de gas”*, sin embargo en la pregunta 18) refiere que *“(...) el sábado quince de*

abril del dos mil diecisiete he consumido marihuana (...) en compañía de los muchachos en la casa intervenida (...)”, de lo cual se determina que el arraigo laboral no ha sido superado, máxime si los documentos presentados por la defensa respecto al domicilio y trabajo están referidos a una tercera persona Pradell bendezu Joharya, quien indica sería enamorada, en conclusión el imputado no ha probado contar con asiendo laboral, familiar y domiciliario.

(10.6) Con relación al imputado **Luigi Alexander Aguado Tello**, efectivamente el investigado tendría domicilio conocido, conforme el acta de intervención efectuada por personal policial, así como la declaración de Jhon Oliver Córdova Merino en la pregunta número 3), refiere que “(...) *lo conozco porque es mi primo porque una de sus tías está casada con mi tío Juan Córdova Capitán, con él estamos viviendo juntos desde fines de enero del presente año (..)*”; sin embargo, ello de por sí, no resulta suficiente para enervar el peligro procesal, toda vez que en el inmueble que habita se encontró la droga materia sub litis, por ende, se concluye que la calidad del arraigo es débil, dado que el inmueble vendría siendo utilizado para cometer hechos ilícitos. Respecto al arraigo laboral ha indicado trabajar como repartidor de volantes de gas, entre otros trabajos que se le presente, si bien ha mostrado una constancia de trabajo suscrita por Marlene Zavaleta, pero se desconoce si efectivamente existe la empresa o negocio, no se adjuntado ficha de RUC a fin de verificar su existencia, ni se ha presentado documento que acredite que la persona que suscribe la constancia de trabajo efectivamente es la representante de la empresa antes referida, toda vez que no existe mayores precisiones en el documento presentado en audiencia.

De otro lado, se debe considerar la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, se tiene que se les atribuye la comisión del delito Tráfico Ilícito de Drogas prescrito en el artículo 296 con la agravante del artículo 6 del artículo 297 del Código Penal, el mismo que se sanciona con una pena no menor de quince años ni mayor de veinticinco años; se debe citar que mediante la prognosis de pena establecido como presupuesto de la prisión preventiva (artículo 268 literal b) se parte de que el magistrado debe evaluar el tipo de injusto, así como la culpabilidad, pasando por los criterios de determinación de la pena, hasta arribar a un posible quantum de la misma. A diferencia de la gravedad de la pena como criterio para determinar el peligro de fuga, pues acá no se trata de evaluar la prognosis de pena en el caso concreto, sino se analiza la reacción que pueda tener determinada persona con la posible pena a imponer, de lo que se colige por las máximas de la experiencia, que una pena tan alta podría influir en los investigados para sustraerse a la investigación dado que como resultado del proceso se

esperaría la aplicación de la pena sumamente grave; a ello se suma que se trata de un delito pluriofensivo que ataca la salud pública esto es el bienestar físico y psíquico afectando a la colectividad y a los ciudadanos, no solamente a ellos sino incluso la economía nacional.

DÉCIMO PRIMERO: En tal sentido se concluye atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo permite la Constitución Política del Estado, a través su artículo 200° última parte resulta amparable el requerimiento de prisión preventiva contra los imputados **Luigi Alexander Aguado Tello, Germán Alejandro Yupanqui Parodi, Jihm Kelly Huanca Elías, Jorge Brajhant Facho Ramírez, Cesar Augusto Bocanegra Fernández y Jhon Oliver Córdova Merino**, no solamente porque se presentan de manera concurrente los tres presupuestos materiales que señala el artículo 268° del Código Procesal Penal, sino también en atención a los principios antes citados (razonabilidad y proporcionalidad), resulta claro que con relación a la idoneidad, la prisión preventiva resulta la más eficaz para garantizar la presencia de los imputados en juicio además la ejecución de la pena en caso de una sentencia condenatoria; sucediendo lo mismo con respecto a la necesidad, toda vez que frente a la ausencia total de arraigo laboral y bajo arraigo familiar y domiciliario, agregado a ello, la naturaleza grave del delito que se les atribuye – tráfico ilícito de drogas, no existe una medida menos gravosa que con la misma eficacia de la prisión preventiva, que asegure la presencia de los imputados en juicio y, el cumplimiento o ejecución de una posible condena; finalmente con relación al sub principio de proporcionalidad propiamente dicho, en consecuencia la Juzgadora considera que luego de apreciar la forma y circunstancias en que se han producido los hechos, los elementos de convicción que respaldan la tesis inculpativa del representante del Ministerio Público, siendo esto así, la intervención de la libertad de los imputados se justifica vendrían dedicándose al tráfico ilícito de drogas, habiéndose repartido las funciones, para transportar, almacenar, empaquetar y comercializar, conforme a los elementos de convicción ya analizados; máxime aun si se considera la gravedad de los hechos denunciados, pues es pluriofensivo que no solamente ataca a la salud pública entendida ésta como el bienestar físico y psíquico que afecta a la colectividad o ciudadanos sino también la economía nacional, el orden público, el patrimonio económico e integridad personal, sin dejar de señalar que si bien en este delito se protege la salud pública, no se debe olvidar que los efectos de estas sustancias inciden en la salud física y mental de la persona humana que en muchos casos con efectos irreversibles, ocasionando muchas la degeneración genética y la incidencia de estos delitos ha quedado claro que también afecta la estructura social, política y económica de todo un Estado; por lo tanto, la intervención de la libertad de los imputados se justifica,

por la necesidad que tiene el Estado de garantizar la persecución penal con un juzgamiento oportuno, sumado a ello, el compromiso que tiene el Estado de combatir el tráfico ilícito de drogas, conforme al artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que prescribe: **"El Estado combate y sanciona el Tráfico Ilícito de Drogas"**; agregado a ello que la afectación a la libertad personal de los investigados es sólo es temporal y por un plazo fijado de **nueve meses**, plazo que no resulta excesivo, dado que en este caso, se advierte la pluralidad de agentes, además conforme lo ha indicado el fiscal, faltas aún actos de investigación que realizar, entre otros, el resultado de pericia química de droga, la visualización del contenido del equipo celular encontrado a Bocanegra Fernández, sin dejar de indicar que ésta medida comprende tanto el proceso mismo como la ejecución de la sentencia.

DÉCIMO SEGUNDO: Con relación a la investigada **Nayla Violeta Rivera Chiroque**, se concluye que si bien existe un grado de imputación, sin embargo no es grave y fundado, conforme se ha detallado en el octavo considerando. Asimismo, se tiene que en la presente audiencia ha indicado que domicilia en la calle Minavir 262-Urb. San Isidro-Chiclayo, habiéndolo acreditado con el certificado domiciliario de fecha veinticinco de abril del presente año, expedido por el notario público Carlos Caballero Burgos, en el que consta que la investigada domicilia en la dirección referida conjuntamente con su madre, así como la declaración jurada del impuesto predial en el que se consigna como propietaria a su madre Verónica Chiroque Becerra y su propia declaración. Además, que tiene la condición de estudiante universitaria conforme a la constancia de estudios expedida de fecha veinticinco de abril del presente año, suscrita por la decana de la facultad de humanidades de la universidad Señor de Sipán, en el que consta que la investigada pertenece a la escuela desde el semestre académico 2015 II, también ha presentado la copia de la matrícula actual semestre académico 2017-I así el recibo de pago de matrícula por el importe de 350 soles, de fecha de emisión de 24 de marzo del año en curso, copia de los recibos de pago (periodo 201701) realizados a favor de la universidad Señor de Sipán por conceptos de estudios tales como computación I y actividades académicas y sociales, etc., aunado a ello, el contrato de trabajo suscrito con la empresa de inversiones, proyectos y Obras KEOPS E.I.R.L desde el uno de septiembre del dos mil dieciséis hasta el treinta de agosto del dos mil diecisiete, así como el reporte extraído del portal Web de Transparencia económica, en el que se precisa que la empresa habría girado el monto de 27, 564 800.67 como contribuyente activo, y con la ficha de RUC de la empresa en que se señala que contribuyente tiene el estado de activo, empleadora de la procesada trabaja, corroborada con las copias de las boletas de pago emitidas a su nombre. De lo expuesto, se concluye por la existencia de una mínima peligrosidad.

En tal sentido, respecto a esta procesada, la juzgadora considera que los hechos que le atribuye la fiscalía merece una mayor investigación para imponer una medida tan grave como es la prisión preventiva, por tanto se le debe imponer una comparecencia con restricciones, por ser suficiente y proporcional para asegurar su presencia en el transcurso del proceso. Además del pago de una caución económica de mil soles, conforme el artículo 289 del Código Procesal Penal, precisa que *“La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. La calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado el modo de cometer el delito y la gravedad del daño”*, en ese sentido, atendiendo que la imputada cuenta con trabajo con una remuneración básica de dos mil soles mensuales, conforme a las boletas adjuntadas, se fija en mil nuevos soles además de quedar sometida a reglas de conducta.⁶

III.- PARTE RESOLUTIVA:

1. Declarar **FUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva, solicitado por el señor representante del Ministerio Público en el proceso seguido contra **LUIGI ALEXANDER AGUADO TELLO, GERMÁN ALEJANDRO YUPANQUI PARODI, JIHM KELLY HUANCA ELIAS, JORGE BRAJHANT FACHO RAMÍREZ, CESAR AUGUSTO BOCANEGRA FERNÁNDEZ Y JHON OLIVER CÓRDOVA MERINO**, por la presunta comisión del delito **CONTRA LA SALUD PÚBLICA**, en su modalidad de **TRAFICO ILICITO DE DROGAS, POR UN PERÍODO DE NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA**, que se computará desde la fecha de su detención. SE DISPONE el ingreso al Establecimiento Penal de Chiclayo, ex Picsi, una vez que sea capturado girándose las ordenes de ubicación y captura a nivel nacional para tal fin.

⁶ Expediente nro. 1976-2014 Primera Sala Penal de Apelaciones - Resolución Cinco * Al no verificarse uno de los presupuestos que sustenten la prisión, la Sala Considera que la medida cautelar (...)es la de comparecencia con restricciones.

Expediente Nro. 1550-2015. Primera Sala de Apelaciones - Resolución Cinco * (...) Cuando los elementos resultan claros para sostener preliminarmente que los hechos se han cometido de la manera como el Ministerio Público formula su imputación (...), la sala considera debe hacerse uso de una medida menos gravosa (...) que debe dictarse una medida de comparecencia con restricciones.

2. Declarar **INFUNDADO** el Requerimiento de Prisión Preventiva, solicitada por la representante del Ministerio Público, contra el imputado **NAYLA VIOLETA RIVERA CHIROQUE**, disponiéndose en su lugar una medida menos gravosa, como es la de **COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES**, conforme lo establece el artículo 287 del Código Procesal Penal, en consecuencia: se le impone como reglas de conducta: a) Firmar cada quince días ante el fiscal a cargo de la investigación, b) No cambiar de domicilio sin autorización del juez de la causa, c) No cometer nuevo delito doloso; d) Pagar una caución de mil soles, mediante depósito judicial a nombre del Juzgado; todo ello bajo expreso apercibimiento de revocarse la comparecencia restrictiva y ordenar su Prisión Preventiva e ingreso al Penal de Chiclayo, previo requerimiento Fiscal y audiencia; asimismo estando detenido el imputado se **ORDENA SU LIBERTAD INMEDIATA**, siempre y cuando no exista mandato de detención emitida por autoridad competente.

3. **SE DISPONE** la notificación a los sujetos procesales presentes aquí en esta audiencia.

FISCAL: Conforme. (Se registró en audio)

ABOGADOS DE LOS IMPUTADOS: Apelaron la resolución, sustentando en el plazo de ley. (Se registró en audio)

La **SEÑORA JUEZ**, tiene por interpuesto el recurso de apelación concediendo el plazo de tres días a fin que sea fundamentado, bajo apercibimiento de declararse inadmisibles en caso de incumplimiento.-

V.- FIN DE LA AUDIENCIA

Siendo las 11:02 p.m. se terminó la audiencia y se cierra el audio, procediendo a firmar el acta la señora Juez y la especialista de audiencias encargada de la redacción del acta.

**ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA
DE PRISIÓN PREVENTIVA**

EXPEDIENTE : 6352-2017-56-1706-JR-PE-05
JUEZ : SERGIO RALPH CHIMPEN ASENJO
ESPECIALISTA : CRISTIAN DANILO RAMOS HERRERA
IMPUTADO : LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA y OTRO.
DELITO : HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA y OTRO.
AGRAVIADO : ANTHONY SMITH ORTEGA FERNANDEZ Y OTRO
Esp. De Audiencia : Rosedith Vásquez Tantaleán

Lugar : Sala de Audiencias Número DOCE- Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Fecha : 13 de Julio del 2017.

Hora : 12:30 P.M

Juez : Dr. Sergio Ralph Chimpén Asenjo

I.-ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

1.- **FISCAL:** JUAN FRANCISCO DREXLER PEÑA; *Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo, con domicilio procesal en M. Izaga Nº 115 – Chiclayo Teléfono: 074-222208*
-Casilla Electrónica Nº 38813.

2.- **INTERCONSULTA:** DR. JAVIER QUIRÓZ GROSSO; *Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo.*

3.- **ABOGADO DEL AGRAVIADO:** DR. JOSE REQUE MILLONES, *identificado con Ical Nº 3676.*

4.-**ABOGADO DEFENSOR DE LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA:**
DR. EDSON REUPO BARDALES.
-Domicilio Procesal : 7 de Enero 639 –Of. 203 – Chiclayo.
-Celular : 985255281.

5.- **ABOGADO DEFENSOR DE MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS DR.**
ALVARO RODAS DIAZ, *identificado con Ical Nº 09038*
- Casilla Electrónica Nº 4942

6.-**SR. LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA, (20),** *identificado con DNI Nº 73880400, nacido el 1 de Marzo de 1997, natural de Pomalca- Chiclayo, hijo de Leoncio Maldonado Saldaña y Domitila Saldaña Riojas, de estado civil soltero, con*

grado de instrucción cuarto años de secundaria de ocupación mototaxista, con domicilio real en 24 de Junio Nº 05 -Pomalca.

7.- SR.MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS (36),identificado con DNI Nº 43628783, nacido el 30 de Abril de 1981, natural de Chiclayo -Lambayeque, hijo de Ángel Puccio y Herminda, de estado civil casado, grado de instrucción secundaria, con domicilio real en Calle Los HuarauquerosNº 165- Pueblo Joven "San Antonio"- Chiclayo, sin antecedentes penales, de ocupación mototaxista y construcción civil

II.- INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA:

Declaró formal y válidamente la presente audiencia al no haber observaciones formales por parte de los sujetos procesales intervinientes. Seguidamente, concedió el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que fundamente su requerimiento. (Se registró en audio).

III.- DEBATE:

Concedido el uso de la palabra, al representante del Ministerio Público sustentó su requerimiento de prisión preventiva, oralizando y fundamentando los presupuestos señalados en el artículo 268º del Código Procesal Penal. (Se registró en audio).

A su turno, los abogados defensores de los imputados rebatieron los presupuestos señalados en el artículo 268º del Código Procesal Penal, solicitando se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva. (Se registra en audio).

Luego de escuchada las réplicas y dúplicas correspondientes, el señor Juez emitió la resolución correspondiente

Juez: Emite la siguiente resolución.

RESOLUCION NÚMERO: DOS

Chiclayo, Trece de Julio

Del año dos mil Diecisiete

AUTOS Y VISTOS, OÍDAS las partes en debate sobre el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Representante del Ministerio Público - Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA y MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS como autor y cómplice primario respectivamente, del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de **HOMICIDIO en grado de Tentativa**, en agravio de Anthony Smith Ortega Fernández y como autores del delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de **TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en agravio del ESTADO**; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Según la Constitución Política los ciudadanos tienen derechos fundamentales entre ellos: la libertad personal, la cual conforme al Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, constituye no sólo un derecho fundamental sino un valor superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado sino que se encuentra limitado conforme a ley. En el mismo sentido el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal, establece que las medidas que limitan los derechos fundamentales sólo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantías previstas en la Ley, mediante decisión motivada a instancia de la parte procesal legitimada, agregando que la orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.

SEGUNDO.- En virtud de lo señalado, el Código Procesal Penal ha establecido la posibilidad de limitar la libertad personal de un imputado dentro del marco del proceso penal regulando para tal fin una serie de medidas de coerción dentro de las cuales se encuentra la prisión preventiva como medida extrema y excepcional, lo que significa que su imposición sólo será posible cuando no exista otra medida menos gravosa que logre la finalidad perseguida en el proceso penal y siempre y cuando se observen concurrentemente los requisitos previstos por el artículo 268 inciso 1 del Código Procesal Penal, como son: a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad y c) Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

TERCERO.- Conforme al requerimiento de la medida coercitiva de prisión preventiva oralizada por el representante del Ministerio Público, corresponde entonces al Juzgador verificar si en el presente caso concurren los tres presupuestos señalados en el Art. 268 inciso 1 del Código Procesal Penal que sustenten la procedencia o no del requerimiento fiscal de prisión preventiva, en virtud a los elementos indicativos que nos exige la norma procesal penal por medio de los cuales podamos entender razonablemente que estas personas podrían ser autor y cómplice primario respectivamente, del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de HOMICIDIO, en grado de tentativa, en agravio de Anthony Smith Ortega Fernández y como autores del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO, PORTE DE ARMAS DE FUEGO en agravio del Estado, ilícitos previstos en los artículos 106º y 279 G del Código Penal, respectivamente que establecen: *Artículo 106.- Homicidio Simple. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años y el Artículo 279-G.- Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena,*

suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.

CUARTO: Los hechos conforme da cuenta el Ministerio Público han ocurrido el día 10 de julio de 2017 a las 14:30 horas aproximadamente, en circunstancias en que el agraviado Anthony Smith Ortega Fernández se encontraba conduciendo su mototaxi, color negro, sin placa de rodaje en la calle San Juan del distrito de Pomalca de esta ciudad, acompañado de su primo menor Marión Brando Alarcón Sosa (quien iba como pasajero), se percató que una (1) moto lineal, modelo Pulsar, color negra, de placa de rodaje N° A5-1345, con dos (2) ocupantes a bordo, comenzó a perseguirlo, siendo que en la misma estaba como pasajero el investigado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña y como conductor el co investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas, precisándose que cuando dichos vehículos se encontraban en la calle Hipólito Unanue, por inmediaciones del parque Principal de Pomalca (Túpac Amaru), dicho investigado es advertido por su primo Marión Alarcón Sosa, quien le indicó *"Anthony acelera porque Leo ha sacado su arma"*, motivo por el cual el mismo acelera y observa por su espejo lateral que el investigado Leo Maldonado Saldaña comenzó a dispararle en varias oportunidades y en ese momento, ha sentido un impacto en el costado derecho de su espalda, gritando *"me hirieron? me hirieron"* y dichas motos lineales, al ver la referida situación, se dieron a la fuga en diferentes direcciones, mientras que el aludido agraviado siguió acelerando por 2 cuadras más, llegando a la intersección de las calles Alfonso Ugarte y Quiñones en donde estacionó su vehículo, siendo auxiliado y trasladado/por su hermano Brayan Montalvan Fernández al Hospital Regional Docente /tas Mercedes"-Chiclayo; en donde recibió el tratamiento médico correspondiente

Asimismo, cabe agregar que luego 60 minutos aproximadamente de ocurrido el ilícito penal denunciado, efectivos policiales de la Comisaría PNP de Pomalca, fueron informados por la persona de Manuel Ortega Curay, padre del agraviado, que los mencionados investigados se encontraban en el Bar-Restaurant "Leo", ubicado en la Manzana "Q", lote 2, Centro Poblado Menor "20 de enero"-Pomalca de esta ciudad (que es el domicilio del , lográndose intervenir, en primer lugar, al investigado LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga y fue detenido en el exterior del mencionado local comercial, siendo que el acompañante del mismo, intentó escapar ingresando a dicho local, llegando hasta la parte posterior aun ambiente no habitable y en dicho lugar arrojó un (1) arma de fuego (pistola), de marca TAURUS SAC, made in Brazil, con serie N° KES33433, color negro, con cacerina abastecida con cinco (5) cartuchos, cada uno con un calibre 3.80, siendo intervenido e identificado como el investigado MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS; razones por las cuales ambos fueron trasladados a la dependencia policial para las fines de investigaciones correspondientes.

Además, cabe mencionar que producto de los hechos denunciados, el agraviado Ortega Fernández resultó con lesiones corporales, concluyéndose que el mismo presenta *'herida penetrante en pared de hemitórax derecho por proyectil de arma de fuego único, sin signos de corla distancia, sin compromiso de cavidad torácica, con trayectoria de derecha a izquierda y detrás delante'*, de conformidad con el Certificado médico legal N° 010315-V de fecha 11 de julio de 2017.

Finalmente, cabe indicar que el arma de fuego (pistola), marca TAURUS SAC, made in Brazil, con serie N° KES33433, color negro, con cacerina abastecida con cinco (5) cartuchos, cada uno con un calibre 3.80 se encuentra en regular estado de conservación y buen funcionamiento, de acuerdo al Dictamen pericial de balística forense N° 421-422/2017 de fecha 11 de julio de 2017; lo que se denuncia para los fines correspondientes.

Se sustenta el requerimiento en los siguientes elementos de convicción:

- a) *Acta de Intervención Policial*, de fecha 10 de julio de 2017, de la cual se desprende la forma y circunstancias en que se produjo la intervención policial de los imputados, precisándose además que el investigado Puccio Dueñas, al momento de su intervención, arrojó un (1) arma de fuego (pistola), de marca TAURUS SAC, made in Brazil, con serie N° KES33433, color negro, con cacerina abastecida con cinco (5) cartuchos, cada uno con un calibre 3.80.
- b) *Acta de intervención*, de fecha 10 de julio de 2017, mediante la cual se deja constancia/que efectivos policiales se constituyeron a la sala de emergencia del Hospital Regional Docente "Las Mercedes"- Chiclayo, encontrando al agraviado Ortega Fernández siendo atendida por personal de emergencia de dicho nosocomio.
- c) *Acta de recepción de prenda de vestir*, de fecha 10 de julio de 2017, mediante la cual se deja constancia que se recibió del agraviado Anthony rtega Fernández: Un (1) polo deportivo, color blanco, con franjas plomas 'en el hombro, marca "Adidas", el mismo que presenta un orificio en su lado derecho al parecer por PAF y manchas hemáticas.
- d) *Acta de hallazgo y recojo de arma de fuego*, de fecha 10 de julio de 2017, mediante la cual se deja constancia que en la parte interior del local comercial Restaurant "Leo", se recogió: Un (1) arma de fuego (pistola), de marca TAURUS SAC, made in Brazil, con serie N° KES33433, color negro, con cacerina abastecida con cinco (5) cartuchos, cada uno con un calibre 80, la misma que fue arrojada por el investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas
- e) *Acta de lacrado*, de fecha 10 de julio de 2017, mediante la cual efectivos policiales procedieron a lacrar en un sobre manila, color amarillo, el arma de fuego (pistola), de marca TAURUS SAC, made in Brazil, con serie N° KES33433, color negro, con cacerina abastecida con cinco (5) cartuchos, cada uno con un calibre 3.80.
- f) *Declaración del agraviado Anthony Smith Ortega Fernández*, quien narra la forma y circunstancias de cómo se suscitaron los hechos materia de investigación en su agravio, precisando la participación específica de cada uno de los imputados.

g) Declaración del testigo menor de edad Marión Brando Alarcón Sosa, quien narra la forma y circunstancias de cómo sucedieron los hechos en agravio de Anthony Smith Ortega Fernández, precisando la participación específica de cada uno de los imputados.

h) Declaración del ST2 PNP Fortunato Mejía Samillán, quien narra la forma y circunstancias de cómo se produjo la intervención policial de los imputados.

i) Acta de reconocimiento de personas en rueda, de fecha 11 de julio de 2017, mediante la cual el agraviado Anthony Smith Ortega Fernández, reconoce al investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas, como el conductor de la moto lineal en la que se encontraba como pasajero el investigado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña, el mismo que le disparó en varias oportunidades.

j) Acta de reconocimiento de personas en rueda, de fecha 11 de julio de 2017, mediante la cual el testigo Marión Brando Alarcón Sosa, reconoce al investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas, como el conductor de la moto lineal en la que se encontraba como pasajero el investigado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña, el mismo que le disparó en varias oportunidades al agraviado Ortega Fernández.

k) Certificado médico legal Nº 010315-V de fecha 11 de julio de 2017, mediante el cual se acredita que el agraviado Ortega Fernández resultó con lesiones corporales, concluyéndose que el mismo presenta "herida penetrante en pared de hemitórax derecho por proyectil de arma de fuego único, sin signos de corta distancia, sin compromiso de cavidad torácica, con trayectoria de derecha a izquierda y detrás delante".

l) Hoja de información básica del investigado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña, con la cual se acredita que el mismo no cuenta con registro SUCAMEC para portar armas de fuego.

m) Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 421-422/2017 de fecha 11 de julio de 2017, mediante el cual se acredita que el arma de fuego (pistola), TAURUS SAC, made in Brazil, con serie Nº KES33433, color negro, | el/con cacerina abastecida con cinco (5) cartuchos, cada uno con un calibre " si/3.80 se encuentra en regular estado de conservación y buen funcionamiento.

n) Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 430/2017 de fecha 11 de julio de 2017, mediante el cual se concluye que el proyectil de cartucho para arma de fuego, calibre 380, extraído del cuerpo del agraviado Ortega Fernández cuando fue homologado con sus similares obtenidos de la pistola, marca TAURUS SAC, made in Brazil, dio como resultado negativo.

o) Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 431/2017 de fecha 11 de julio de 2017, mediante el cual se concluye que el agraviado Ortega Fernández presentó una herida penetrante compatible con (O-E) producido por un proyectil disparado por arma de fuego, de calibre 380.

p) Acta de situación vehicular, de fecha 10 de julio de 2017, mediante la cual se acredita la ubicación y preexistencia de la moto lineal, modelo Pulsar, color negra, de placa de rodaje Nº A5-1345, utilizada por los investigados para cometer el ilícito penal denunciado.

q)Oficio N° 12333-2017-RDC-CSJLA/PJ de fecha 11 de julio de 2017, mediante el cual se acredita que el investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas si registra antecedentes penales a nivel nacional y que el investigado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña no registra antecedentes penales a nivel nacional.

QUINTO: En ese sentido, con relación al primer presupuesto se advierte que si concurren fundados y raves elementos de convicción que dan cuenta de la comisión de los delitos de Homicidio en grado de Tentativa, en agravio de Anthony Smith Ortega Fernández y el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, en agravio del Estado, que vinculan a los imputados.

Conforme se ha dado cuenta el día 10 de Julio del 2017 a las 14: 30 horas en circunstancias que el agraviado conducía un vehículo menor acompañado de su primo y testigo Marlon Brandon Alarcón Sosa y se dirigían con dirección a su domicilio, fueron interceptados por dos motos lineales en cuyos vehículos menores iban dos personas, éstas personas conforme lo han señalado los declarantes, agraviado y testigo, los han interceptado y efectuado disparos hacia el cuerpo del conductor del vehículo Anthony Smith Ortega Fernández, habiendo sido impactado por proyectil de arma de fuego, respecto de cuyo hecho ha sido sindicado como autor material el imputado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña.

Lo relativo a las secuelas lesivas de éste hecho quedan evidenciados con el Certificado Médico Legal, que da cuenta de las lesiones por el proyectil que ha impactado en el cuerpo del agraviado, en el lado derecho, conforme se describe, en el hemitórax derecho, siendo un disparo realizado a corta distancia con compromiso de cavidad torácica habiéndole requerido 15 días de incapacidad médico legal.

Corroboran la sindicación, la declaración del testigo que acompañaba al agraviado, su primo Marlon Alarcón Sosa, recogiéndose además evidencia de ello, como es la prenda que llevaba en esos momentos, la cual presenta un orificio por el efecto del impacto del proyectil al cuerpo como también, se ha efectuado el recojo del proyectil que fue entregado al personal policial para su homologación correspondiente conforme se detalla el examen pericial de balística forense.

Por lo que se desestiman las alegaciones en principio de la defensa de Maldonado Saldaña, relativas a que los hechos no se ajustan a la realidad, no se explica el juzgador cómo podría la defensa sostener dicha afirmación si su patrocinado ha optado por guardar silencio en uso de su derecho, los que no dejan de ser meras afirmaciones que no se apoyan en elemento de convicción alguno que nos pueda revelar que no se habría encontrado en el lugar, día y hora de los hechos o que las cosas no hayan podido suceder como lo afirma el agraviado y el testigo. Se ha indicado que el arma no le fue encontrado pero no se le atribuye ello, sino no, el haber utilizado un arma de fuego para victimar al conductor del vehículo Anthony Smith Ortega Fernández. La defensa del investigado, Leo Gerson Hipzon Maldonado

Saldaña, lo que ha hecho en general es cuestionar los elementos de convicción de manera aislada e independiente uno por uno, lo cual en definitiva no resulta correcto, puesto que los elementos de convicción se valoran siempre de manera conjunta, a fin de poder obtener una idea general y razonable de cómo ocurrieron los hechos.

Más aún abonan a establecer su presencia en el lugar de los hechos acompañado de su co-investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas, el que una hora después hayan podido ser encontrados ambos a inmediaciones de un restaurante; es decir, éstas personas fueron vistas en una moto lineal para victimar al agraviado Anthony Smith Ortega Fernández y, luego una hora después fueron encontrados juntos a inmediaciones de un restaurante, quiénes al notar la presencia policial, el primero de ellos Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña optó por darse a la fuga, el segundo de ellos Miguel Ángel Puccio Dueñas por ingresar al restaurante hacia un lugar donde no pueda ser ubicado y fue en esas circunstancias que fueron intervenidos.

La aparente contradicción que existiría con relación a que solo fue una moto lineal o dos motos lineales conforme a las versiones del agraviado y testigo, no conducen a establecer que los hechos no hayan ocurrido en la realidad, tenemos a una persona que ha sido herida de bala, no habría sido otro el propósito que acabar con su vida disparándole al cuerpo. Se ha señalado por la defensa que el agraviado no habría ahondado en tales o cuales circunstancias que fueron relatadas por el testigo, sin embargo, todo ello podrá ser objeto de una declaración ampliatoria si el Ministerio Público conviene con el pedido de la defensa. Por lo que del análisis del conjunto de los elementos de convicción ambos imputados quedan vinculados al delito de homicidio tentado en agravio del señor Ortega Fernández, luego del cual una hora después ambos imputados fueron intervenidos con el hallazgo de un arma de fuego que fue recogida en el lugar o escenario donde se intervino al imputado Miguel Ángel Puccio Dueñas, esto es, al interior de un restaurante donde ingreso para ocultarse al advertir la presencia policial.

Por su parte la defensa del imputado Miguel Ángel Puccio Dueñas, ha señalado que su patrocinado no se encontró en el lugar de los hechos, respecto de lo cual tampoco ha podido acreditarlo con elemento de convicción alguno, siendo una alegación que no tiene respaldo. Se indica que el testigo falsea la verdad, tampoco se encuentra razón para afirmar ello, no justifica cómo es que podría haber falseado la verdad. Se ha indicado que no se le ha encontrado en posesión de arma alguna, no obstante, existe la sindicación que el arma fue arrojada por él conforme fluye de lo declarado el efectivo policial interviniente Fortunato Mejía Samillán, quién ha ratificado el acta de hallazgo y recojo del arma de fuego y, claramente ha señalado que el imputado ingresó corriendo al local, lo siguió hasta el final a un ambiente donde pudo verlo que arrojó una pistola, la misma que luego recogió levantando posteriormente las actas.

Si bien el Juzgador puede colegir que el arma hallada y recogida no habría sido la utilizada para disparar al agraviado, puesto que respecto de dicha arma la homologación pericial ha determinado que el proyectil que impactó al agraviado no salió de dicha arma, sin embargo, también es cierto que en la investigación el testigo Alarcón Sosa, ha señalado que en el hecho participaron dos motos lineales en las cuáles iban dos personas en cada una de ellas, incluso ha señalado que hubo más de un disparo, también ha señalado quiénes son las personas que tenían armas de fuego y ha identificado a una tercera persona que además del investigado Maldonado Saldaña tenía en dichos momentos un arma de fuego, y a ésta persona la identifica como el conocido como "Antonelli", precisando que tanto "Jersy" como "Antonelli", se encontraban con un arma de fuego y ambos estaban en motos lineales diferentes, versión que no ha sido desacreditada con suficiencia por parte de los abogados defensores, solo han señalado alegaciones en sentido negativo, que los imputados no habrían participado en el hecho y que no ha firmado el acta policial el investigado Miguel Ángel Puccio Dueñas, lo que tampoco resta mérito a lo expresado por el efectivo policial interviniente; incluso el valor que puede tener éste documento policial no queda supeditado a la firma de los detenidos, la autoridad policial puede formular las actas policiales y sus actos se encuentran legitimados por el principio de presunción de veracidad, un acta policial que no lleve la firma del detenido no le resta valor, siempre le asiste al investigado el principio de no autoincriminación, por lo que no se encuentran obligados a firmar las actas policiales, pero si la autoridad ha dejar expresa constancia de su negativa a firmarlos, lo que no puede ser tomado en su contra. Es por éstas razones y porque además, las sindicaciones del agraviado y el testigo Alarcón Sosa han sido ratificadas, cuando se ha realizado la diligencia de Reconocimiento en Rueda y han reconocido al imputado Puccio Dueñas como la persona que conducía el vehículo menor -motocicleta, desde la cual el co imputado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña efectuó disparos al agraviado, el primer presupuesto si concurre.

SEXTO: Con relación al segundo presupuesto, prognosis de pena, los hechos nos ubican ante dos ilícitos penales, el delito de Homicidio en grado de Tentativa y el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, ambos delitos en sus extremos mínimos prevén como sanción seis años de pena privativa de libertad.

Para el caso de los imputados el primer delito han quedado en grado de tentativa, lo cual ameritaría una rebaja prudencial y por otro lado, se verifica que al imputado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña le beneficiaría la responsabilidad restringida por la edad, 20 años en el momento de la comisión de los ilícitos. El Juzgador debe atender en este presupuesto, cual es la pena que a futuro les espera de ser hallados responsables y en ello, se debe atender la posibilidad que podrían cogerse a salidas alternativas y/o beneficiosas para alcanzar una rebaja de la pena que les pueda ser impuesta.

De modo que para el Juzgador en prognosis de pena, verifica que ésta si sería superior a los cuatros años de pena privativa de libertad para ambos imputados aún con las atenuantes señaladas que ameritarían una rebaja prudencial, pues en el caso concreto nos encontramos ante un concurso real de delitos, lo que amerita que las penas sean sumadas, pero no solo ello, la pena a imponer de ser hallados responsables partiría del tercio intermedio por la pluralidad de agentes que intervinieron en la ejecución del delito.

En consecuencia, el Juzgador haciendo una prognosis de la pena que se les imponga en su oportunidad a los imputados de ser hallados responsables por los ilícitos que se les imputa, esta si sería superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad, por tanto este presupuesto también concurre.

SETIMO: El tercer presupuesto a contemplar lo constituye el peligro procesal para lo cual debe tenerse en cuenta lo previsto en los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal, referido a las dos vertientes: el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. La citada norma tiene dos supuestos diferentes, aunque para que concurra este requisito, será suficiente la presencia de uno de ellos.

En este sentido para calificar el peligro de fuga que se ha aludido se tendrá en cuenta el arraigo en el país del imputado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; así también, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo; el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas.

Mientras que para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; influirá para que co imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente e inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

Posición del Ministerio Público

El Ministerio Público en cuanto al tercer presupuesto, invoca el peligro de fuga. Respecto del imputado LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA, señala que no tiene ocupación conocida, no tiene bienes propios, si bien cuenta con un domicilio, ello no descarta la aplicación de la prisión preventiva conforme lo señala la Resolución Administrativa N° 325- 2011, ha indicado que no tiene asiento familiar, aludió a la gravedad de la pena dado que se encuentra incurso en dos ilícitos penales y la reacción que le podría generar una eventual condena haría que se aleje

del lugar donde reside, ha señalado también que se encuentra incurso en dos investigaciones ambas del año 2016, respecto a la primera no se precisó el ilícito y, la segunda, es una investigación por lesiones.

Con relación al investigado MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS, señala que no tiene asiento familiar, personas que dependan de él, por la gravedad de la pena podría eludir la acción de la justicia, también se refirió a la magnitud del daño ocasionado, que no ha reparado el daño y registra investigaciones por los delitos de robo agravado y lesiones de los años 2014 y 2015. Finalmente se refirió a la proporcionalidad de la medida, pidió se conceda un plazo de nueve meses y se declare fundado el requerimiento.

Posición de la Defensa

Por su parte la defensa del imputado LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA, indicó que el imputado tiene un arraigo familiar. Presenta actas de nacimiento de sus dos menores hijos, así como, las copias de sus DNI; una Constancia de Convivencia con la señora Wendy del Pilar Vera Isique; una declaración jurada del señor Luis Antonio Saldaña Rivas, propietario de un vehículo mototaxi que alquila por la suma de S/.10.00 Nuevos Soles diarios con puerta libre, además, de una Constancia que señala que reside en la Av. 24 de Junio N° 15-Pomalca.

Por su parte la defensa del co-investigado MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS señala que su patrocinado cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral. Presenta un Certificado de Convivencia donde se consigna que convive quince años con la señora María Elizabeth Tongo Fernández; que tiene como ocupación mototaxista, ha presentado el DNI de su conviviente y de sus cuatro hijos, así como, recibos de consumo de energía eléctrica de Ensa, a fin de acreditar que reside en la calle Los Huaqueros 165 -PP.JJ San Antonio. Finalmente, los abogados defensores solicitan se les imponga una medida menos gravosa como la comparecencia restrictiva.

OCTAVO: En consecuencia, el Juzgador considera con relación a sus calidades de arraigo, que ambos cuentan con arraigos débiles, ésta debilidad no resulta suficiente para asegurar sus presencias en la investigación preparatoria, asegurar el proceso en definitiva hasta llegar a una sentencia que defina su responsabilidad, esto es, que alcance a la etapa intermedia y el juzgamiento.

Con relación al imputado Leo Gerson Hipzon Maldonado Saldaña, se indica que reside en el domicilio ubicado 24 de Junio del 2015, así se consigna en la constancia donde se indica que reside en dicho lugar en compañía de su conviviente Wendy del Pilar Vera Isique, elementos de convicción que si bien no ha sido controvertido por el Ministerio Público, el Juzgador puede verificar que el lugar de residencia actual no lo ha sido anteriormente como se puede verificar de las actas de nacimiento de sus menores hijos y en ellos aparece otro domicilio real ubicado en el C.P San Isidro Mz.

5 -lote 4-Pomalca, de modo que no conocemos a ciencia cierta desde cuándo y en qué condiciones se encuentra residiendo en la Av. 24 de Junio N° 15- del Distrito de Pomalca, si es una vivienda familiar, una vivienda alquilada, es una vivienda que usa de modo temporal, habitual, permanente, todo lo cual no nos permite estimar que no va a cambiar de domicilio o no se va a alejar del domicilio donde ahora reside.

Con relación a su actividad laboral solo se ha presentado una declaración jurada pero no se aporta mayor documentación, solo la tarjeta de propiedad del vehículo que se señala alquila al señor Luis Antonio Saldaña Rivas, no se ha presentado la licencia de conducir, tampoco la tarjeta de operatividad que le permite realizar ésta actividad, acreditar si pertenece a una asociación de mototaxistas o ha algún paradero en el cual venga desarrollando dicha actividades en el Distrito de Pomalca, lo que merece las respectivas comprobaciones.

Con relación a su arraigo familiar si bien se puede establecer que tiene dos menores hijos que por su edad dependerían de él, sin embargo, también es cierto que las calidades de arraigo son meras tipologías referenciales como se señala en la Resolución Administrativa N°325-2011, toda persona tiene un domicilio como también familia, lo cual no impide que se pueda adoptar una medida como la requerida. Ellas deben ser analizadas en conjunto y en contraste con otros elementos del hecho en concreto, por tanto, evaluando su calidad de arraigo, su familia siempre ha existido, ha preexistido a la comisión de los ilícitos y no fue tenido en cuenta por parte del imputado para desplegar una actividad ilícita grave como la que se le imputa, de modo que cualquier señalamiento de que tenga familia o un domicilio conocido no obliga al Juzgador a desestimar la imposición de una medida como la requerida.

Para el caso del co-investigado MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS, de igual manera con vista de la documentación presentada como se puede verificar con relación a su domicilio que aparece en su ficha RENIEC, ubicado en la calle Los Huaqueros N° 165 -PP.JJ San Antonio, no es el domicilio en el cual ha venido residiendo anteriormente y no se conoce desde cuando reside en dicho domicilio por cuánto en los DNI de sus menores hijos aparece otro domicilio ubicado en la calle Los Carrizos 156 CPM López Albújar, siendo un domicilio distinto; de modo que la documentación presentada para acreditar el domicilio o una buena calidad de arraigo domiciliario por las razones igualmente antes expuestas, no asegura que no pueda alejarse del lugar donde ahora reside. Sus familia y actividad laboral son arraigos que preexisten a la comisión del ilícito grave que se le imputa. Razones por las que se indica que los niveles de arraigo de los imputados en general les resultan de bajo nivel,

Por lo que en el análisis de proporcionalidad, el Juzgador considera que la medida de prisión preventiva si resulta idónea para garantizar la presencia de los imputados en el proceso y necesaria, si tenemos en cuenta que el bien jurídico protegido ha sido vulnerado y su aplicación solo puede dictarse en casos particularmente graves y

siempre que sea estrictamente necesaria para los fines que se persigue con el proceso penal, evidenciándose gravedad en el hecho a nivel de probabilidad y vinculación razonable de los imputados en la comisión de los ilícitos hacen necesario imponer la medida requerida. Por lo que en el juicio de proporcionalidad se satisfacen los criterios de idoneidad de la medida por ser adecuada para el logro de la finalidad perseguida y necesaria, dado que la aplicación de otras medidas menos gravosas no se justifican en atención a lo precedentemente expuesto y, en el análisis del sub principio de proporcionalidad, la restricción de sus libertades resulta legítima para la protección de bienes jurídicos preponderantes como la vida, razones por las que resulta justificada la intervención de la libertad de los imputados, siendo procedente amparar el requerimiento de prisión preventiva.

Con relación al plazo de la medida, el artículo 253º inciso 3) del Código Procesal Penal, señala que la restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario. El Juzgador atiende que se van a realizar una serie de diligencias como las que se han plasmado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, encontrándose pendiente de recabar el examen de absorción atómica lo cual resulta importante para efectos de esclarecer debidamente los hechos que se imputan sobre todo si se ha establecido que uno de los imputados habría efectuado disparos, por lo que el Juzgador considera razonable conceder el plazo de nueve meses de prisión preventiva.

NOVENO: En consecuencia, para el caso concreto concurren copulativamente los presupuestos procesales que contempla el artículo 268 del Código Procesal Penal para imponer la medida provisional de prisión preventiva.

1. Por tales consideraciones y en ejercicio de la potestad jurisdiccional; **SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA** contra los imputados: **LEO GERSON HIPZON MALDONADO SALDAÑA (20)**, identificado con DNI Nº 73880400, nacido el 1 de Marzo de 1997, natural de Pomalca- Chiclayo, hijo de Leoncio Maldonado Saldaña y Domitila Saldaña Riojas, de estado civil soltero, con grado de instrucción cuarto años de secundaria de ocupación mototaxista, con domicilio real en 24 de Junio Nº 05 -Pomalca y contra **MIGUEL ÁNGEL PUCCIO DUEÑAS (36)**, identificado con DNI Nº 43628783, nacido el 30 de Abril de 1981, natural de Chiclayo -Lambayeque, hijo de Ángel Puccio y Herminda, de estado civil casado, grado de instrucción secundaria, con domicilio real en Calle Los Huaraueros Nº 165- Pueblo Joven "San Antonio"-Chiclayo, por la presunta comisión de los delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de HOMICIDIO, en grado de tentativa, en agravio de ANTHONY SMITH ORTEGA FERNÁNDEZ y por el delito Contra la Seguridad Pública, en su modalidad de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en agravio del ESTADO.

2. **SE PRECISA** que el Plazo de la Prisión Preventiva tendrá una duración de **NUEVE MESES**, la que computada desde el día 10 de Julio del 2017 vencerá el día 09 de Abril del 2018; en consecuencia: **ORDENO** sus inmediatos ingresos al Centro Penitenciario de Chiclayo; **DISPONGO** se cursen los Oficios respectivos al Director del Establecimiento Penal para el **TRASLADO** e **INGRESO** correspondientes.

Se NOTIFICA la resolución emitida

FISCAL: Conforme

ABOGADOS DEFENSORES: Interponen Recurso de Apelación.

El **SEÑOR JUEZ** tiene por interpuesto los recursos de apelación contra la resolución dictada en audiencia, concediendo el plazo de ley para fundamentarlos; con el apercibimiento de que en caso no lo hicieran serán declarados inadmisibles.

IV.-FIN DE LA AUDIENCIA.

Siendo las 2: 06 P.M se terminó la audiencia y se cierra el audio, procediendo a firmar el acta el señor Juez y la especialista de audiencias encargada de la redacción del acta.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA

EXPEDIENTE : 09050-2017-95-1706-JR-PE-03
ESPECIALISTA : LUCIA FIORELLA TORRES ALVARADO
MINISTERIO PUBLICO : MEDINA LUCANO, MAXIMO
IMPUTADO : GUERRERO MECHAN, CARLOS JOEL
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : PEÑA UGAZ, ARTURO CONRADO SAMUEL
RODRIGUEZ DIAZ, XIMENA ALEJANDRA
ESP. DE AUDIENCIA : SAMUEL DIAZ GONZALES

Lugar : Sala de Audiencias N° 03 - Sede Chiclayo
Fecha : 27 de Septiembre de 2017
Hora : 07:50 a.m.
Juez Titular : DR. VÍCTOR ADOLFO TORRES SÁNCHEZ

I. ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES:

- **MINISTERIO PÚBLICO:** MÁXIMO MEDINA LUCANO, Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, con domicilio procesal en la calle María Izaga N° 115 - Chiclayo. Casilla Electrónica N° 40562.
- **ABOGADA DEL IMPUTADO:** CLARA FLOR PEREZ VÁSQUEZ, con ICAL N° 1448, con domicilio procesal ubicado en la calle Elías Aguirre N° 305, Of. 302 - Chiclayo, con Casilla Electrónica N° 4903.
- **IMPUTADO:** CARLOS JOEL GUERRERO MECHAN, con DNI N° 76746086, natural de Chiclayo, nacido el 01 de junio de 1999, hijo de Cristóbal y Violeta, estado civil soltero, no tiene hijos, grado de instrucción quinto de secundaria, trabaja en una tienda de insecticidas, de nombre Lambayeque Agronegocios, ubicada en Lambayeque en la Av. Ramón Castilla, frente a la Caja Trujillo, vende todo producto para el campo, gana S/ 850.00 mensuales, trabaja allí desde el 29 de Junio de 2017, el dueño de la tienda es su papá, ha firmado un contrato y no recuerda cuando, vive con sus padres, no tiene otros procesos, no consume drogas, mide 1.70 m. no tiene apodos, el 01 de Junio de 2017 ha cumplido 18 años de edad, con domicilio real ubicado en la Av. Las Américas N° 958 - P.J. San Nicolás - Chiclayo.

II. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA:

En el presente acto, el señor Juez declaró instalada la audiencia, al no haber observaciones, y concedió el uso de la palabra a las partes, a fin de que fundamenten sus pretensiones.

III. DEBATE:

FISCAL: Oralizó el requerimiento de prisión preventiva, narró los hechos delictivos, tipificándolos en el delito de Robo Agravado, con las agravantes de haberse realizado durante la noche, con el concurso de dos o más personas y a mano armada, sustentando los requisitos consistentes en fundados y graves elementos de convicción, pronóstico de pena superior a cuatro años, peligro procesal, proporcionalidad de la medida y plazo de la misma. (Registrado en audio)

ABOGADA DEL IMPUTADO: Oralizó los argumentos de su defensa a favor de su patrocinado, indicando que las circunstancias en que ocurrieron los hechos no fueron precisamente como las ha narrado el Ministerio Público, además que habría quedado en grado de tentativa,

considerando que debe tipificarse el hecho en el delito de robo simple, asimismo, objeta el requisito procesal de peligro de fuga, con las documentales que acompaña en este acto, manifestando que no concurren los presupuestos para dictarse un mandato de prisión preventiva. Solicitó que se declare infundado el requerimiento fiscal. (Registrado en audio)

FISCAL: Considera que la tipificación de los hechos se encuentra debidamente realizada, pues se trata de un delito de robo agravado, y no de robo simple, objetando además las documentales que ha presentado la defensa para acreditar el arraigo domiciliario y laboral del imputado,

JUEZ: Pregunta al imputado si tiene algo más que manifestar en su defensa. (Registrado en audio)

IMPUTADO: Manifiesta que cuando lo subieron al carro, habían dicho que apaguen los celulares para que pareciera robado, y que no se ha robado nada. (Registrado en audio)

IV. DECISIÓN:

En este estado, luego de escuchar los fundamentos de hecho y de derecho del requerimiento de Prisión Preventiva, así como las alegaciones de su oposición a dicho requerimiento de parte de la defensa del imputado, el señor Juez procedió a emitir la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS

Chiclayo, veintisiete de septiembre del años dos mil diecisiete.-

PARTE EXPOSITIVA: (Registrado en audio)

PARTE CONSIDERATIVA: (Registrado en audio)

PARTE RESOLUTIVA: (Registrado en audio y transcrita)

En tal razón, el señor Juez Titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, **RESUELVE:**

1. **DECLARAR IMPROCEDENTE** la aplicación de una medida menos gravosa solicitada por la defensa del imputado.
2. **DECLARAR FUNDADO** el requerimiento presentado por el fiscal, en consecuencia **DICTESE MEDIDA CAUTELAR PERSONAL DE PRISIÓN PREVENTIVA**, por el plazo de **SIETE MESES**, contra el imputado puesto a disposición, **CARLOS JOEL GUERRERO MECHAN**, con DNI N° 76746086, cuyas demás generales de ley obran en autos, en la Investigación Preparatoria en la que el Ministerio Público le atribuye ser presunto **COAUTOR** del delito contra el Patrimonio, en su figura de **ROBO AGRAVADO**, previsto en los artículos 188 y 189, primer párrafo, numerales 2), 3) y 4) del Código Penal, en agravio de **ARTURO CONRADO SAMUEL PEÑA UGAZ** y **XIMENA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ**.
3. **CURSAR LOS OFICIOS** correspondientes al **DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENAL DE CHICLAYO**, para el ingreso respectivo del imputado a dicho Establecimiento Penitenciario, y a la **POLICÍA JUDICIAL** para el traslado correspondiente.
4. **CURSAR** por Secretaría y de manera inmediata la ficha **RENIPROS** del imputado.
5. **NOTIFICAR** conforme a ley.

NOTIFICACIÓN:

FISCAL: Conforme. (Registrado en audio)

ABOGADA DEL IMPUTADO: Se reserva el derecho. (Registrado en audio)

V. FIN DE LA AUDIENCIA:

Siendo las nueve horas con diez minutos del día de la fecha, se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el señor Juez y el Especialista de Audiencia encargado de la redacción del acta, conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal Penal.